**FORO “LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA”**

Viernes 19 y sábado 20 de enero de 2001

SALÓN: “LEGISLADORES DE LA REPUBLICA”

El Presidium se conformó por: la Ingeniera Xóchitl Gálvez, titular de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República; el Antropólogo Marcos Matías Alonso, Director General del Instituto Nacional Indigenista; el Diputado Héctor Sánchez López, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados; el Diputado Cándido Coheto Martínez, Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Diputado Pablo Arnaud Carreño, Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Diputado José Feliciano Moo y Can, Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Palabras del Antropólogo Marcos Matías Alonso
Director del Instituto Nacional Indigenista**

En el proceso de análisis y discusión de la Reforma Constitucional, no puede ni debe estar ausente la voz central de los pueblos indígenas de México.

Esta es la razón fundamental para escuchar la opinión y la posición de los dirigentes indígenas que hoy participan en este Foro, seguramente serán voces plurales, voces diversas que representan la heterogeneidad del movimiento indígena de nuestra República Mexicana.

El tema central es la identificación de puntos de consenso en torno a la Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos Indígenas que el titular del Ejecutivo Federal envió el pasado 5 de diciembre al Senado de la República; este es el tema central de este Foro.

El Instituto Nacional Indigenista, como Institución de la Administración Pública Federal encargada de coordinar las acciones del gobierno en materia indígena, quiere dejar constancia pública, de su apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que recoge los Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación.

El INI une su esfuerzo al de los pueblos indígenas de México y de la sociedad nacional para que el Poder Legislativo pronto lo eleve en parte integrante de nuestra Carta Magna.

Sabemos bien que los tiempos de consultas, talleres, mesas redondas, simposiums y otros encuentros municipales y regionales ya han pasado, ya corrió mucha tinta y mucho papel, ya ha sido escrito: nosotros consideramos que ahora es tiempo de dar el último empujón, tenemos que dar un empujón muy fuerte hacia delante y no volver hacia atrás ni repetir procesos de consulta agotados y que han sido ya superados, sin embargo, si fuera necesario, si fuera absolutamente necesario, estoy seguro que los pueblos indígenas estarán dispuestos a volver a refrendar lo que en las consultas pasadas ya se emitió, pero lo altamente recomendable es avanzar hacia adelante.

Esta es una de tantas razones para que su contribución, la de los ponentes indígenas y no indígenas sean del más alto nivel propositivo.

Esperamos que la combinación de las aportaciones de los expertos indígenas, de los expertos académicos y los conocedores del mundo de los pueblos indígenas, sean

ponderados por el Poder Legislativo. Este es el espíritu principal de este Foro, con sus ideas contribuir al diálogo y la paz en las regiones indígenas de México.

**Palabras de la Ingeniera Xóchitl Gálvez
Coordinadora de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.**

Es un hecho relevante que asistamos hoy, en el inicio de un nuevo siglo y de un nuevo milenio a un acto que confirma la vocación democrática de amplios sectores de la sociedad mexicana, a propósito de un tema larga y dolorosamente postergado: la vigencia plena de los derechos de los pueblos indígenas.

Que el debate respecto a la reforma constitucional sobre los derechos y cultura indígena tenga como recinto el Palacio Legislativo de San Lázaro, es motivo de enorme satisfacción para los organizadores de este foro, pero es más importante, seguramente lo será, para los millones de compatriotas que han hecho oír sus voces para luchar por acabar con la desigualdad y la discriminación étnica, lingüística y cultural.

Los estudiosos del tema indígena han señalado un cambio sustancial en el carácter de las demandas de los pueblos indígenas, cambio cuyos orígenes pueden ubicarse a partir de la década de los 70s. El Foro que hoy inicia ratifica la importancia de esta nueva orientación de las propuestas, de los reclamos y de las luchas del movimiento indígena.

Al producirse el estallido en Chiapas en 1994, y más tarde en las discusiones que llevaron a la elaboración de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, la redacción de la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, la problemática de los derechos y cultura indígena cobró una importancia trascendental. Por muy diversas razones, menciono tres: la primera, por el hecho de que las mesas de discusión los indígenas hicieran oír las voces de la pluralidad, interpretando el sentir de millones de sus hermanos, daba forma a estas nuevas

demandas y colocaba el tema de los derechos y del desarrollo integral indígena en las prioridades de la agenda política nacional.

Dos: Porque mostraba que la lucha indígena no se circunscribía al reclamo de las acciones asistenciales básicas, sino a la expresión de propuestas mucho más integrales, estructurales y por ello mismo más profundas y duraderas.

La tercera: Porque la información pública sobre los temas en debate comenzó a sensibilizar y a movilizar a otros sectores sociales no indígenas.

Estas tres razones, y seguramente muchas otras irán surgiendo en las exposiciones y en los debates de este foro, nos orientan al cumplimiento de una tarea esencial: la de dar a conocer por todos los medios a nuestro alcance, el contenido de nuestra propuesta, elaborada por la COCOPA y el sentido que para la nación tiene el poder disponer de una legislación que amplíe y profundice lo que quedó plasmado con la adición al artículo 4° de nuestra Constitución Política; que reconoce explícitamente el sustento que los pueblos indígenas dan a la composición pluricultural de la nación.

La oficina de Representación para el Desarrollo de los pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista y su sistema de radiodifusoras culturales, harán las gestiones necesarias ante las diversas instancias, para contribuir al logro de este objetivo.

Por todo lo anterior, considero que los trabajos de este foro deben multiplicarse en los diversos ámbitos del territorio nacional, contribuyendo a generar una cultura cotidiana en la que la libre expresión de las ideas, el debate franco y generoso y la circulación oportuna de la información, enriquezcan la experiencia de todos los ciudadanos y las políticas que nos conduzcan al establecimiento efectivo de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad nacional.

**Palabras del Diputado Pablo de Jesús Arnaud Carreño.
Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.**

Es loable el esfuerzo que están ustedes haciendo de venir hasta esta su casa para, escuchar lo que nos quieren decir, a nosotros, sus legisladores y representantes populares.

Es cierto, como dice el antropólogo Marcos Matías, ya se ha discutido y ha habido foros. Creo que esto no debe de dar marcha atrás; debemos ir siempre hacia adelante, y este es un paso más hacia esta gran hermandad mexicana a la que todos aspiramos.

**Palabras del Diputado José Feliciano Moo y Can
Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.**

Hoy estamos ante una gran oportunidad para darle a los mexicanos, la oportunidad también a los que no son indígenas, de que podamos ser una nación plena en donde se puedan integrar todas las comunidades indígenas, porque queremos sí, una ley integral que permita que todos los indígenas de México tengan las mismas oportunidades como lo tienen las sociedades más consolidadas y dominantes en este México. No queremos dos Méxicos, queremos un solo México, el México de todos.

Por eso es importante la participación de todas las voces de todos los indígenas de este país, que todos nuestros hermanos puedan hacer llegar sus sentimientos y sus ideas para que podamos impulsar una iniciativa que una y que transforme a este México para beneficio de todos, no de unos cuantos. Y por eso es importante reconocer que no solamente es la ley la solución a todos los problemas, que es una parte importante, pero también es importante que la sociedad misma reconozca que nos ha discriminado a los indígenas a lo largo de estos 500 años; no se puede negar que hay una sociedad que nos discrimina, nos lacera y nos lastima, y que lastima a México.

Por eso es importante también dentro de esta discusión, ver todos los problemas en su conjunto, porque creo que hoy tenemos una gran oportunidad.

En esta Comisión de la Cámara de Diputados, hemos coincidido todas las fracciones partidistas, en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder generar iniciativas y leyes y poder impulsar también desde las instancias gubernamentales para que los programas y las acciones de los gobiernos en materia indígena, sean acciones políticas de estado verdaderamente contempladas con un gran esfuerzo de todos los mexicanos.

**Palabras del Diputado Héctor Sánchez López.
Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.**

Nosotros creemos que las propuestas, que las demandas de los pueblos indios para poder iniciar un verdadero diálogo que conduzca a reformas legales y constitucionales, está involucrada toda la sociedad mexicana, los tres Poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo que ha dado muestras ya de la voluntad política que corresponde precisamente a la desmilitarización de la zona de Chiapas y del país; el Poder Judicial, para buscar los mecanismos para la liberación de los presos vinculados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por supuesto, el Poder Legislativo, que tiene la gran responsabilidad de sacar adelante este primer gran paso que son las reformas constitucionales sobre derechos y cultura de los pueblos indios.

En este sentido, nosotros creemos que si no hay una reforma constitucional de fondo, si no hay leyes secundarias, si no hay una institución, todo lo que estaremos hablando acerca de integrar a los indígenas de México al desarrollo de nuestro país será pura demagogia.

Necesitamos integrarlos con el pleno respeto a su identidad, a sus culturas, a sus derechos, a sus territorios, a sus recursos naturales. En ese sentido, creo que es una gran responsabilidad la que en los próximos meses, los legisladores federales de nuestro país habremos de asumir.

Por eso en este encuentro que hoy convocamos, tanto el Instituto Nacional Indigenista, las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, creemos importante, a unas pocas semanas tal vez porque esperamos que sean en este primer periodo, que se empiece a abordar estas reformas constitucionales, es importante escuchar ahora y siempre, la voz de la sociedad, la voz de los indígenas, para que nosotros, como diputados federales, tengamos mucho más elementos para poder participar en los debates que habremos de dar tanto en las comisiones como en el pleno de la Cámara.

Para nosotros los legisladores federales, citar a este encuentro, escuchar sus opiniones, sus propuestas y llevarlas para los debates que se darán en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, será fundamental para poder crear las bases de una verdadera política de Estado para atender los asuntos indígenas.

Hoy creemos que la política indígena es una política dispersa, es una política sin coherencia. A partir de estas reformas constitucionales, sus leyes reglamentarias, las instituciones que deban de administrar estas leyes y, por supuesto, la organización de los indígenas, que deberán ser reconocida por todas las instancias del Estado Mexicano.

En este sentido, pues, quiero decirles que este encuentro que hoy realizamos en esta Cámara de Diputados tiene esa función: recabar, recopilar, tener todas estas opiniones, muy valiosas, tanto de indígenas como de académicos e intelectuales involucrados en la lucha por el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios.

Esperando que sea para beneficio de todo el pueblo de México y particularmente de los indios de nuestro país.

SE DECLARÓ INAUGURADO FORMALMENTE LOS TRABAJOS DE ESTE ENCUENTRO “LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA”, EL DÍA 19 DE ENERO DEL AÑO 2001, A LAS 10:55 HRS.

AUTONOMÍA: HACER VALER LO QUE SOMOS.

Dr. Gustavo Esteva Figueroa*

Quienes concibieron el Estado Mexicano y aún honramos como padres de la patria, los intolerantes que lo pensaron con una religión única, de Estado, lo imaginaron sin los pueblos indios. Atendidos a modas importadas los trataron como tribus extranjeras. Este principio se reprodujo en todas nuestras constituciones y en los usos y costumbres de todos nuestros gobiernos. Lograron así reducir la proporción de los pueblos indios en el conjunto de la población, pero no consiguieron extinguirlos. Ahí están. En el amanecer del siglo XXI no podemos seguir negando su existencia. Ha llegado la hora de decir: ¡Basta ya!. Amplios sectores de la sociedad mexicana igualmente excluidos -, quieren también dejar atrás ese diseño político intolerante y reivindican junto a los pueblos indios la autonomía y el pluralismo para establecerlos como condición normal de la vida democrática.

Existe en apariencia consenso general sobre la necesidad de remediar este entuerto histórico que ha sido fuente de todo género de males para la República, pero se ha estado cuestionando el consenso logrado sobre la forma de hacerlo en los términos que formuló la COCOPA con base en los Acuerdos de San Andrés.

Este texto no es uno más, a examinar junto a otros . Tardó en llegar aquí como iniciativa de reforma constitucional. Pero fue formulado por un cuerpo calificado del Congreso; aceptado por todas las fuerzas políticas representadas en él y por el Ejecutivo; asumido por los representantes más legítimos de los pueblos indios, ratificado en amplísimas consultas y convertido en demanda propia de millones de mexicanos. Ninguna otra iniciativa de reforma constitucional ha tenido, en la historia del país, un sustento tan claro y sólido como ésta.

*CIESAS-Oaxaca.

El texto de la COCOPA, como los propios Acuerdos de San Andrés, fueron producto de complejas negociaciones y compromisos en que ninguna de las partes obtuvo cuanto quería. Eso mismo califica el texto: es la forma que hoy puede adoptar el consenso. Modificar sus elementos, así sea por afán de perfeccionamiento, significa dismantelar lo que en las circunstancias actuales puede fundar nuestra comunión. En vez de contribuir a la paz, estimularía la confrontación y reactivaría una vieja disputa entre los mexicanos.

Aún con ese riesgo, sería preciso modificar el texto si existieran razones de peso para ello. Tendrían que hacerlos diputados y senadores de ésta legislatura, como un deber de conciencia y como una obligación sus electores. Pero no es el caso. He analizado cuidadosamente todas las observaciones que se han presentado, desde las más débiles y descuidadas, como las del gobierno de Zedillo, hasta las mejor argumentadas y sólidas de famosos tratadistas o las implícitas en propuestas alternativas de redacción. No aparecen esas razones de peso. Y es mi obligación sostener, con todo respeto a quienes las formularon, que en su mayor parte proceden de la ignorancia o el prejuicio, cuando no del mal disimulado racismo.

En el bravísimo tiempo de que disponemos, permítanme ir directamente al fondo de la cuestión. La reivindicación indica reflejada en San Andrés y por la COCOPA, afirma la autonomía en el seno del Estado Mexicano en términos internacionalmente reconocidos y que son ley suprema en México; carece de todo fundamento la advertencia equívoca de que sería simiente de separatismo o disgregación; fortalece la unidad nacional no la debilita.

La autonomía de los pueblos indios conlleva el reconocimiento de sus sistemas normativos internos. Esto exige articularlos con el derecho positivo general y establecer con claridad sus respectivos límites y ámbitos de aplicación conforme al principio del pluralismo jurídico. Lo hace eficazmente el texto COCOPA. Aplica así el espíritu del legislaciones contemporáneas en el mundo entero con un tratamiento técnico que sólo está en contradicción con teorías jurídicas obsoletas, de claro resabio monárquico y autoritario, refugiadas aún en la tradición del monismo jurídico. Un régimen jurídicamente pluralista no crea fueros, castas o estamentos patrimonialistas. Al contrario. Combate o disuelve los

que se constituyen en forma ilegítima al amparo de ilusiones legales de supuesta igualdad y universalidad. Lejos de cuestionar el estado de derecho, lo consolida. Y el estado de derecho, por cierto, sólo existe cuando el cuerpo social conoce y acepta las normas y estas tienen aplicación universal. Esas condiciones se cumplen cabalmente en los pueblos indios, pero no en el resto del país.

Como condición de gobernabilidad se ha tolerado la autonomía de hecho de los pueblos indios y de muchos otros grupos. Pero la tolerancia es sólo la formas más civilizadas de intolerancia. Tolerar dice le diccionario, es sufrir con paciencia. Se tolera caprichosamente al otro, al que no es al que tolera cree que se debe ser y así se le discrimina discrecionalmente. El régimen de autonomía permite pasar de la mera tolerancia, siempre expuesta a actitudes intolerantes, a la hospitalidad: a la actitud que se abre a la diferencia y aprende a celebrarla. En ella podemos fundar la convivencia armónica de los diferentes y hacer que la autonomía de hecho lo sea también de derecho.

El ejercicio de la autonomía.

Se manifestaron en San Andrés y en el debate posterior, múltiples esfuerzos de acotar y restringir el reconocimiento formal de los pueblos indios, en nombre de todo género de fantasmas.

La comunidad es la forma inmediata de existencia de los pueblos indios. En ella encontraron refugio y capacidad de resistencia. En ella se pertrecharon y con ella y por ella conciben su vida. A pesar de todos los empeños para disolverla, la comunidad real ha sido la principal forma de existencia de la mayoría de los mexicanos a lo largo de la mayor parte de la historia. Es una vergüenza que a estas alturas, se le siga negando personalidad jurídica y capacidad política. Uno de los muchos méritos de San Andrés y del texto de la COCOPA, es remediar tajantemente esta ausencia sin socavar la estructura republicana y federal del país.

Sin embargo, acotar la autonomía al ámbito comunitario o al municipal, implicaría negarla. Restringir a ese plano el ejercicio de los derechos inherentes al reconocimiento de los pueblos indios, es truco leguleyo para quitarle todo sentido y hacerlo imposible en la práctica. Como hace el texto de la COCOPA, recogiendo lo acordado en San Andrés, reconocer a los pueblos indios significa admitir que son sujetos legítimos de sus derechos.

Es cierto que los pueblos indios no son lo que eran. Una de sus mejores tradiciones ha sido la de cambiar la tradición de manera tradicional. Se adaptan a las circunstancias cambiantes, pero sin romper con el pasado. Gracias a eso han logrado sobrevivir y mantener una continuidad histórica de la que carece el hombre moderno.

Los pueblos indios de México se reconstituyen continuamente. Lo que era un pueblo se vuelve dos ó diez y los que eran dos ó diez se vuelve uno. El intento de fusionarlos a todos en “el pueblo mexicano”, sólo cristalizó en los discursos y los libros de texto, pero se creó un cambio: la noción de ciudadanía mexicana, con su correspondiente patriotismo. Todos los pueblos indios afirman esa condición para sus integrantes y se consideran patrióticos, asumen un compromiso explícito con la patria mexicana. Pero no por eso dejan de ser lo que son, pueblos específicos. Algunos de ellos lo expresan en instituciones y ámbitos que abarcan y comprometen a casi todos sus miembros; otros retienen el horizonte de su pueblo original, pero crean culturas diferentes a escala regional con sus respectivas instancias de concertación.

Desde las comunidades, desde sus raíces más profundas, articulando sus empeños a contrapelo de los vientos dominantes, los pueblos indios han estado reactivando múltiples procesos de reconstitución que darán lugar a todo género de configuraciones imprevisibles de las que ya hay algunas muestras. Lo que hoy hace falta, es crear el marco jurídico y político para que lo puedan hacer en libertad, con autonomía. Eso es lo que consigue con eficacia el texto de la COCOPA. Nada más. No es aceptable nada menos.

El texto de la COCOPA por los propios Acuerdos de San Andrés pueden ser mejorados, enriquecidos, perfeccionados, sería absurdo negarlo pero es miopía inocente o criminal no

ver que a estas alturas intentarlo sería contraproducente. Y someter el texto a seudodebate en los medios o al muy democrático recurso de plebiscito, sería una burda simulación.

Averse sin reserva alguna a transformar en ley la iniciativa, como compromiso con la historia y con la paz, es una responsabilidad suprema de esta legislatura. Al decirlo aquí sin embalajes, expreso la tímida esperanza de que la sabrá cumplir. Muchas gracias.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD.

Natalio Hernández*

Les saludo con un gran afecto a todos los amigos y amigas y los hermanos aquí presentes.

En los Acuerdos de San Andrés Larráinzar se puede leer, en varios apartados de los documentos suscritos por el EZLN y los representantes del Gobierno Federal, puntos importantes referidos a la educación, la lengua y la cultura de los pueblos indígenas. A manera de ejemplo cito algunos de éstos párrafos:

“El Estado debe impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas, de promoción y coordinación de las actividades e Instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas, con la participación activa de los pueblos indígenas y de incorporación del conocimiento de las diversas prácticas culturales en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas públicas y privadas. El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones hacia los indígenas”. Termina esta primera cita.

Otra cita muy breve dice uno de los documentos de los Acuerdos de San Andrés: “ La educación que imparte el Estado debe ser intercultural”.

*Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas. A.C:

Otro párrafo: “Se estima necesario elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y en general la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional”.

Finalmente un último párrafo de los Acuerdos de San Andrés: “El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas necesarias para que las lenguas indígenas de cada Estado tengan el mismo valor social que el Español”.

Sin embargo, observo que en la iniciativa de la COCOPA que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores recientemente, estos acuerdos se reflejan de manera insuficiente y quedan integrados en el artículo cuarto de la Constitución.

Todos sabemos que para la construcción de una sociedad incluyente, la educación debe sufrir profundas transformaciones en sus principios, objetivos y contenidos, y esto solo es posible si se contempla en el artículo correspondiente de la Constitución, en este caso me refiero al artículo 3o. No tenemos porque remitir estos aspectos de educación, lengua y cultura al cuarto sino más bien abrir una apartado fundamental en el artículo 3o.

En mi opinión, es necesario incluir la reforma del artículo 3o de nuestra Constitución, que se refiere precisamente a la educación, la lengua y la cultura de los pueblos indígenas en el contexto de la diversidad y en el diálogo intercultural entre todos los mexicanos.

A manera de propuesta preliminar, y con ánimo de provocar la reflexión y discusión de este importante foro, sugiero la inclusión de un nuevo inciso en el apartado II del artículo tercero, que podría quedar escrito en los siguientes términos:

“Será intercultural y multilingüe para todos los mexicanos, con el objetivo de que responda a la diversidad que caracteriza a la nación mexicana y tendrá como finalidad la unidad a partir de la diversidad. Ello requiere de un modelo educativo incluyente, que supere

prejuicios y actitudes racistas y aliente el reconocimiento de la riqueza de la diversidad. Las lenguas indígenas serán materia de estudios en el ámbito escolar para posibilitar su desarrollo y difusión a fin de que alcancen el mismo valor social que el español que hablamos todos los mexicanos”.

Insisto, este es el texto que sugiero. Tenemos que inscribir todo lo relacionado con la educación en el artículo tercero y no como está planteado en la iniciativa de la COCOPA que lo incluye en el artículo cuarto, como ya lo he mencionado.

Por otra parte, tenemos que superar la idea equivocada de mucha gente, de muchos mexicanos, indígenas y no indígenas, en el sentido de que la educación intercultural bilingüe es únicamente para los pueblos indígenas. El proyecto de nación que estamos imaginando, que estamos ahora reflexionando hacia el futuro, que tiene que ser multiétnica y pluricultural, requiere de una educación que desarrolle la conciencia en las niñas y niños mexicanos, indígenas y no indígenas, que somos un país de muchas lenguas y culturas, que ninguna de ellas es superior sino diferente y que en conjunto enriquecen a la sociedad mexicana y le hacen tener un rostro propio que es el rostro que nos identifica ante el concierto mundial de las naciones.

Sólo una educación para la diversidad que propicie el diálogo intercultural en las nuevas generaciones de indígenas y no indígenas, puede contribuir a la construcción de una sociedad incluyente, sin prejuicios y sin actitudes racistas.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS

Franco Gabriel Hernández*

Sin personalidad jurídica, sin el reconocimiento del sujeto histórico culturalmente diferenciado, se mantiene la invisibilidad política y no se aprecia el derecho de no tener derechos propios en un marco jurídico nacional.

Voy a abordar el tema de la representación política y quiero partir de un hecho muy poco visto pero que habíamos revisado desde hace mucho tiempo y el problema, el paso actual de la invisibilidad política a la presencia jurídica en México.

La población indígena como uno de sus rasgos de esa situación colonial que se mantiene aún en el contexto de nuestro capitalismo, justamente su falta de presencia o su inexistencia en los planos políticos, social e incluso cultural. De tal forma que ni en la ley ni en el currículum ni en la cultura se reconocen o tienen presencia reconocida con grupos como sujeto de derechos de lengua y cultura propias hasta muy recientemente.

Este reconocimiento que se inicia en la reforma del artículo cuarto constitucional tiene que reconocérsele como el producto de una lucha muy larga y que en México la podemos encontrar rápidamente a nivel nacional en 1975 como el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y a partir del 76 con la alianza nacional de profesionales indígenas bilingües pero el detonante mayor en 1994 con el levantamiento en Chiapas.

¿Qué experiencias tenemos para poder construir nuevos escenarios políticos en México?. En Oaxaca podemos encontrar antes todavía en 1990 una reforma constitucional: la creación del artículo 16. En Oaxaca mismo en el 95 se reforma el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales a través de los cuales se reconocen y respetan las formas tradicionales de elegir a sus autoridades municipal por medio de procedimientos de

* Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO.

usos y costumbres. Y quizás una de las contribuciones más importantes es la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca que reconoce quince grupos étnicos, las comunidades afroamericanas y los indígenas procedentes de otros estados.

¿Qué pasa con esto? Vemos nosotros que empieza ya en el campo jurídico a reconocerse a la población indígena como persona moral de derecho público. Sin embargo, este esfuerzo necesita ser profundizado.

En esta Constitución local podemos encontrar la definición de lo que son ahora ya los pueblos indígenas, de lo que son ahora las comunidades indígenas y se tiene como experiencia ya como una ley estatal rige en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas a esta población, como se conceden prerrogativas para la existencia, pervivencia, dignidad y bienestar de estos pueblos y como se establecen las obligaciones a los poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de gobierno.

¿Qué tenemos, que sucede? Que este sujeto histórico empieza a tener personalidad propia, una personalidad jurídica reconocida, más allá de la personalidad de presencia histórica que se ha malentendido por siglos. Esto implica un problema de política.

¿Cómo puede pensarse la política en este campo?. La primera condición de una nueva política es incluir a todo pueblo y comunidad indígena que se reconoce como tal, que pertenece a cualquiera de la étnias nacionales, para que disfrute el derecho que corresponda. Ello implica una política incluyente, abierta e ideológicamente comprometida con este sector de la población.

Una segunda condición de ésta política es su naturaleza y esencia democrática en cuanto a su característica de apertura y participación en todas las tareas políticas, económicas, sociales y culturales que les competa. El esfuerzo es unir participación y conciliación para lograr la unidad en la diversidad, para dar vida a la pluralidad y ejercitar como práctica

democrática la tolerancia que enriquece y da sentido a la acción tanto gubernamental como la de la presencia de los grupos indígenas.

La tercera condición de ésta política es la pluralidad. Considero que la democracia requiere poder real, si no es una farsa. Que el avance de los pueblos hacia metas de mayor alcance son posibles si los caminos son recorridos con estas diversas corrientes de pensamiento con todas las fuerzas políticas que se vayan configurando en los diversos escenarios de nuestro país.

El desarrollo Nacional no puede realmente realizarse sin los indígenas, sin su pensamiento, sin sus expectativas, sin sus demandas. Además, esta política debe ser: para de política indigenista a política indígena. Es decir, que la práctica gubernamental que la acción institucional esté orientada por los actores y beneficiarios reales. Que las acciones de gobierno deben partir de reconocimiento hacia los pueblos indígenas de su capacidad de organización, de sus propias formas de promoción del desarrollo y de búsqueda y de construcción de nuevos escenarios.

En este contexto también la política debe ser transformadora en el sentido de plantearse un cambio de situación de desigualdad, y por último debe ser educativa porque el hecho de que los propios pueblos sean rectores de sus acciones nos permitirá aprender más de ellos y tendrán ellos la oportunidad de sentirse cada vez más universales y cada vez más mexicanos. Y esto nos lleva al problema de la representación.

La representación en realidad tiene que darse no solamente en el plano de la legislación sino en los tres poderes. Es decir, en cuanto al campo ejecutivo, como ya lo estamos viendo ahora, los indígenas deben hacerse responsables de dirigir las instituciones que han sido creadas para su beneficio. La presencia de los indígenas en lo programas y proyectos debe ser cada vez más clara, es decir, en este plano de lo ejecutivo.

En el plano de lo legislativo tenemos que estudiar la posibilidad para que todos los grupos, todas las étnias de la nación tengan una representación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

La idea de la representación proporcional puede ser inicial. En el caso de las poblaciones más pequeñas como los Kikapú, los Kiligua y grupos más pequeños, tal vez una organización étnico regional permita una representación suya, pero no se puede pasar sin esas representaciones.

Y en el plano judicial se tiene que avanzar. No nos podemos quedar con el problema nada más de los traductores bilingües, tenemos que avanzar a ese plano de los jueces, a jueces indígenas o a jueces especializados en este campo de derecho. No podemos ignorar que la ley no pueden aplicarse sin los hombres, pero tampoco podemos olvidar que los hombres requerimos una formación más adecuada y más profesional para este logro.

Eso considero que podrían ser los tres campos de la representación política y no pensarse solamente en una. Eso es cuanto podría comentar ahora porque tiene que ver con los estudios que estamos viendo con respecto a la ley.

DEFENSA DE LOS TERRITORIOS, CULTURA Y DERECHOS COLECTIVOS.

José Martínez Cruz*

Vengo en representación también de organismos civiles Todos los Derechos para Todos. Estas organizaciones hacen trabajo aproximadamente 15 Estados de la república con diversos pueblos indígenas. Hemos realizando algunos análisis y partimos de algunas líneas específicas que fueron motivadas, fueron atentadas, sobre todo a partir de la irrupción

* Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Zapatista del EZLN en Chiapas y a partir de allí la vinculación con el movimiento indígena que el país se expresa de manera diferenciada, amplia y que tiene el Congreso Nacional Indígena a uno de sus pilares fundamentales.

Las organizaciones de la red hemos planteando en ese sentido algunos aspectos fundamentales que atraviesan la situación de todos los pueblos indígenas.

1. Defensa de los territorios indígenas y sus recursos. Recuperación del derecho indígena. Cultura jurídica entre mestizos e indígenas sobre los derechos de los pueblos. Defensa específica de los derechos colectivos. Reconstrucción de los pueblos indios, de sus culturas y de las organizaciones sociales y civiles que han nacido en su seno. Autonomía económica y política garantizando éstas en las leyes mexicanas.

Establecimiento de un marco legal pluricultural. Democracia pluricultural. Defensa de los derechos civiles y políticos de los indígenas, sobre todo los que viven en contextos de guerra que ha significado, entre otras cosas. La existencia de muchos presos indígenas, muchos de ellos por razones de políticas.

En ese sentido vemos que hay una presencia cada vez mayor de transnacionales en distintas regiones tanto del norte como del el sur y el centro del país. Hay mayor pobreza por causas estructurales. Fenómenos migratorios que han extendido y generalizado a más comunidades indígenas se que han convertido en zonas expulsoras. La migración ya no es sólo para cruzar la frontera de México-Estados Unidos, sino de sur a norte del país por temporadas.

Presencia cada vez más generalizada del narcotráfico, ya no solo como forma de subsistencia económica, sino afectando la salud de los indígenas y con ellos la vida comunitaria.

Persistencia de la militarización en muchas regiones del país, con estrategias diferenciadas de acción, ya sea contra el narcotráfico, focos rojos por pobreza, lucha contrainsurgentes y

guerra de baja intensidad, pero con similares repercusiones en las comunidades indígenas, ruptura del tejido social, prostitución, drogadicción, alcoholismo, represión.

Un clima ascendente de violencia por la acción política e ideológica por el mismo narcotráfico. En este contexto ha surgido un movimiento indígena importante en nuestro país que debe ser escuchado y que en este mismo Palacio seguramente dentro de pocas semanas estará siendo objeto de la participación de miles y miles de indígenas de todo el país.

Impacto de los programas de gobierno de lucha contra la pobreza básicamente negativos, ya que no acaban con el problema de fondo y si propician división y segregación dentro de las mismas comunidades. Además de que sirven de espejo para desviar la atención sobre las causas estructurales de la pobreza.

De manera resumida podríamos decir que el diagnóstico de la situación de los pueblos indígenas nos permite concluir que se requiere impulsar acciones para lograr que se reconozcan plenamente los derechos colectivos, partiendo de algunas líneas fundamentales: La recuperación y el control territorial de los recursos naturales con que cuentan los pueblos indígenas.

La democracia pluricultural, entendida como no excluyente de las múltiples formas de expresión de los diversos sectores de la sociedad mexicana y de los niveles de participación cotidiana en la consulta y toma de decisiones que tengan trascendencia pública.

Autonomía y poder local en donde se haga valer plenamente el derecho de los pueblos indígenas a decir sobre sus derechos económicos, políticos y culturales.

Creación de un marco jurídico pluricultural desde la dimensión de los derechos colectivos y pluriculturalidad.

Lucha en contra de la militarización de la vida política en las comunidades y regiones indígenas, así como en el conjunto del país, ya que este proceso destruye el tejido social y violenta los derechos y libertades fundamentales.

En este sentido hemos realizado un amplio estudio acerca del impacto que están teniendo los megaproyectos en el conjunto de la población, particularmente en la población indígena y sobre todo en este proyecto Puebla-Panamá, que evidentemente no cuenta la participación de las comunidades indígenas directamente.

Estos cambios a nivel global y que se impulsan a través de los megaproyectos, llevan implícitas violaciones a los derechos colectivos de los campesinos y pueblos indígenas, en cuyas tierras se imponen los megaproyectos por acuerdos cupulares, generalmente excluyendo la propia participación de los pueblos indígenas, violando en ese sentido lo que establece el derecho comunitario a través del convenio 169 de la OIT, así como de las garantías establecidas en los artículos 7º y 8º y la ausencia de información oficial verás y oportuna sobre los proyectos y los requisitos establecidos por la ley para su establecimiento.

Vemos con preocupación, por supuesto, que mientras no haya un proceso de desmilitarización de los pueblos y comunidades indígenas evidentemente van a seguir presentándose toda una serie de violaciones a los derechos humanos y violaciones de diversa naturaleza que afectan la cultura y la forma de vida de los pueblos.

Otros aspectos, que quiero señalar muy rápidamente, tienen que ver con procuración de justicia porque debe haber una transformación de nuestro sistema jurídico hacia uno más plural, empezando por la reforma y aceptación de las iniciativas de ley pendientes que los propios pueblos han exigido claramente en los Acuerdos de San Andrés, la reforma al artículo 27 Constitucional.

El derecho a la equidad social creemos que es fundamental, en México hemos vivido una sociedad de discriminación estructural que ha mantenido de manera particular a los pueblos indios en la marginación y la pobreza. Para garantizar el derecho a la equidad debemos reconocernos como una nación pluricultural y pluriétnica, expresando ese reconocimiento en un marco legal que contemple nuestra diversidad, reconociendo la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos.

Un primer ejercicio entre los pueblos indios en México se dio en esa participación en las mesas de diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal en San Andrés, que posteriormente se concretaron en los Acuerdos que deben ser por supuesto legislados y reconocidos ampliamente en estos espacios a nivel nacional.

Las propuestas concretas concluyendo:

Primero.- Adecuar la Constitución y la legislación secundaria conforme al convenio 169 de la OIT enmarcando los Acuerdos de San Andrés como respuesta política a las demandas actuales de los pueblos indios; reformar las instituciones y el marco legal para que se reconozcan los derechos colectivos de los pueblos indios para construir una democracia pluricultural.

Reformar el artículo 27 Constitucional para dar seguridad a la integridad de los territorios indígenas de acuerdo al convenio 169 de la OIT,

Reformar el artículo 115 Constitucional para que fortalezca la autonomía municipal y contemple otras formas de organización política de los pueblos indios, de tal forma que se garantice la plena autonomía de éstos en lo político, económico y cultural.

Modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar jurídicamente los derechos de los pueblos indígenas a participar en el gobierno mediante representantes libremente elegidos por usos y costumbres o por la vía que los mismos pueblos y comunidades decidan.

Tipificar los delitos ambientales para que se contemplen sanciones a las empresas que afecten derechos humanos, recursos naturales y el medio ambiente de los pueblos indígenas.

Asimismo, establecer procedimientos jurídicos de indemnización y reparación de daños a favor de dichos pueblos.

Crear asimismo, leyes de protección de los pueblos indios que tomen en cuenta su condición y su derecho a preservar su diferencia cultural y las normas internacionales destinadas a protegerlos. Gracias.

**LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL QUE ES PRIMERO EN TIEMPO ES PRIMERO
EN DERECHO.**

Dr. Salomón Nahmad Shittón*

Muchas gracias a los organizadores de este Foro y me complace muchísimo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores este escuchando de éste tema central para la vida mexicana.

Desde hace más de veinticinco años propusimos una reflexión y un cambio de la Constitución Política Mexicana.

Agradezco también al nuevo director del INI, colega antropólogo y miembro del pueblo Náhuatl del Estado de Guerrero, el hecho de que estimule y fomente esta discusión en el más amplio nivel.

Por otro lado, me complace muchísimo escuchar de mi amigo, el maestro Natalio Hernández, expresarse en el idioma mexicano, cosa extraña que nuestro país, que se llama México, el idioma mexicano está excluido del reconocimiento nacional, grave error de los constitucionalistas desde la independencia hasta el presente. La exclusión de el idioma mexicano refleja muy claramente la exclusión de los pueblos indígenas de la estructura jurídica nacional y la exclusión implica no democracia.

* CIESAS-Oaxaca.

Por ello quisiera recordar a todos ustedes que la lucha que inició Zapata en 1910 fue precisamente por la exclusión de los indígenas en las discusiones, de la distribución de la tierra y la expansión de latifundio sobre los bienes comunales de las comunidades indígenas, del Estado de Morelos, del estado de México, del Distrito Federal y después se expandió a todo el país.

Por ello es necesario hacer brevemente, puntualmente, porque el tiempo no da para hacer análisis tan amplio como quisiéramos, que el proyecto genocida del Siglo XIX fue la exterminación de los pueblos indígenas de México, esa era la práctica y la política.

La segunda política fue el blanqueamiento de la población indígena, es decir, importar población europea para eliminar a la población indígena; Segunda, esa etapa genocida la resistieron los pueblos indígenas con la resistencia militar y guerrera.

La tercera etapa fue a partir de Emiliano Zapata y que logró que el Artículo, 27 Constitucional llegara a una nueva relación entre los pueblos indígenas de México y el estado nacional, donde se le reconoció el derecho a tener sus propios territorios, sus propias tierras, algunas veces dotadas por la vía ejidal y la mayoría de las veces dotadas por la vía comunal, que en este sentido implica el reconocimiento tácito de los territorios.

Frente a la expansión liberal de despojo, los indígenas lograron este cambio.

El cuarto punto fue el primer Congreso Indigenista de Patzcuaro en 1940.

Estos dos hechos reflejan una política asimilacionista, es decir, la destrucción de los pueblos indígenas para asimilarse a la sociedad mexicana perdiendo sus propias identidades, sus propios valores y su propia cultura.

La tercera etapa es con la ley que crea el Instituto Nacional Indigenista, que la Cámara de Diputados aprobó en 1948. Esta ley crea el INI para pasar de la etapa asimilacionista, a una

nueva etapa integracionista que hoy he escuchado en voz del Sr. Diputado, quien nos habló de la necesidad de integrar a los pueblos indígenas.

En 1975 se celebró el primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas de todo el país y en ese primer Congreso se presentaron más de 2500 representantes de pueblos indígenas. Sin embargo, la sociedad más conservadora y más reaccionaria del país tembló ante la posibilidad de la unión de los pueblos indígenas.

En 1990 la reforma al 4º Constitucional y en 1989 la ratificación del convenio 169 modificó la relación con los pueblos indígenas pero insustancialmente sin ir a fondo y esta política se puede enmarcar en la política integracionista. Sin embargo, a partir de la ratificación del 169 por el Senado de la República y el levantamiento armado de 1994 y la firma de los Acuerdos de San Andrés, cambiaron tácitamente la política de la relación entre los pueblos indígenas y el estado nacional y la sociedad mexicana. Más sin embargo, aún cuando no han puesto en la ley estos acuerdos, los hechos ya está señalando que la exclusión u la negación del reconocimiento de los pueblos originarios de este país, no estamos hablando de reconocimientos ajenos a este país, son los pueblos que nos dieron cobijo a millones de gentes que emigramos de otras regiones, nuestros padres o nuestros abuelos ya ellos no se les reconoce este derecho, su participación ha sido mínima negada y aún cuando se aduce que Don Benito Juárez fue Presidente de la República y Zapoteca, las circunstancias en que se dio ese cambio no fue por el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Entonces, necesitamos que los Acuerdos de San Andrés modifiquen la exclusión que se cometió el error, que se cometió desde 1928 con la primera Constitución y pongamos orden en la construcción del país, una simple declaración de que somos un país pluricultural no dice nada.

La declaración del 4º Constitucional es francamente un artículo decorativo. Lo que se requiere es un cambio estructural de fondo como lo señalan los Acuerdos de San Andrés.

Por lo que respecta a la autonomía, a la libre determinación, yo pienso que esto se da en los hechos, más no se reconoce en derecho. Con muchos Gobernadores que he viajado por las regiones indígenas, con muchos Secretarios de Estado que he recorrido las regiones indígenas, siempre me dicen: “Cuando llegamos a estas regiones parece que estamos entrando a otro país, a otra área”. ¿Por qué? Porque la gente habla otro idioma, porque la gente tiene sistemas culturales diferentes en la alimentación, en la agricultura, en la medicina, en la forma de gobierno, en la forma de vivir, que se expresa de una manera muy real.

Por tal razón considero que mi ponencia, que es muy amplia, considero que debe de tomarse en cuenta estos cambios que se ofrecieron, que se firmaron por el Gobierno de la República y que está costando mucho trabajo ponerlos en la Constitución, cuando es un derecho de los pueblos originales, que son los primeros, y el que es primero en tiempo, es primero en derecho y los pueblos indígenas estaban aquí antes de que se constituyera la nación mexicana. Muchas gracias.

LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LOS PUEBLOS INDIOS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN.

Marcelino Díaz de Jesús*

En la pasada legislatura el autor de éstas líneas, tuvo la fortuna de formar parte en esa histórica LVII Legislatura y en su carácter de diputado federal indígena presentó al pleno de ésta Soberanía, una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación política de los pueblos indígenas, la cual tomó vigencia en el contexto del foro: “Los Pueblos Indígenas ante la Reforma Constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena”, que seguramente será recordado como el prelude de una serie de propuestas, debates y discusiones que esperamos puedan culminar felizmente reconociendo con justicia a los

*Consejo Guerrerense “500 años de Resistencia Indígena”.

pueblos indígenas los derechos que por siglos les han negado a través de la aprobación de la iniciativa de la COCOPA.

El reconocimiento constitucional de sus derechos ha sido una preocupación constante de los pueblos indios de México y de sus organizaciones sociales y políticas, así por ejemplo el Partido de la Revolución Democrática a lo largo de las cuatro legislaturas en las que ha tenido representación legislativa en ésta Cámara de Diputados ha presentado varias iniciativas en este sentido y ha apoyado las elaboradas por otras fuerzas políticas, sin embargo, dado que éstas iniciativas legislativas en favor del reconocimiento y ampliación de los derechos de los pueblos indios de México han sido desestimadas y hace urgente y necesario ampliar y reformar el marco jurídico que ampara nuestra población indígena, en algunos casos las plataformas de los partidos políticos utilizan un discurso indígena, tan sólo para atraer algunos votos y a pesar de que sus estatutos claramente señalan que deben otorgar espacios de representación política en los congresos locales y federales a sus militantes indígenas, estos les son negados sistemáticamente, incluyendo aquellos partidos políticos que se dicen verdaderos aliados de los pueblos indígenas, llámese estos PRD o PRI.

Hoy, se hace necesaria la adopción de medidas legislativas que fomenten y apoyen la elevación del nivel de vida de los pueblos indios. Se hace necesario revisar nuevamente el artículo 27 constitucional para reincorporar a su redacción la defensa y protección de las formas sociales de la propiedad rural, el Ejido y la Comunidad, que son el rasgo de las reformas sociales de la propiedad rural, el ejido y la comunidad, que son un rasgo distintivo de la economía campesina e indígena; se hace necesario legislar buscando la asignación de recursos presupuestales suficientes para atender y satisfacer las necesidades de alimentación, educación, salud, seguridad social, empleo, vivienda y desarrollo comunitario regional; se hace necesario legislar para proteger, conservar y desarrollar el patrimonio cultural y de propiedad intelectual de los pueblos indios, para defender, proteger y restaurar su entorno ecológico, sus tierras y sus territorios.

Conciente de todas las necesidades, se consideró, sin embargo, la iniciativa de referencia, al ámbito de la representación política de los pueblos indígenas, y en particular ha incrementar la presencia de representantes indígenas en el ámbito del poder legislativo tanto federal como estatal, de manera que los representantes de los pueblos indios y de sus organizaciones puedan acceder a los puestos de representación popular en el Poder Legislativo, por lo menos en una proporción equivalente al de su peso demográfico en el conjunto de la población total del país. En este contexto, elaboramos esa iniciativa que presentamos al pleno de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados a fines de Abril, el 28 del Abril del año 2000 en el último período de sesiones.

Para alcanzar este objetivo, optamos por proponer cambios y adiciones sustanciales a diversos artículos de la Constitución, tendientes a lograr el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas precisamente a través de reformar aquellos artículos que se oponen, contradicen u obstaculizan la plena vigencia de nuestros derechos.

Esta iniciativa remitida a Comisiones, por no decir olvido del archivo, pretende la conquista constitucional de los derechos de los pueblos indígenas de México en materia de representación política, concretamente dentro del Poder Legislativo, reformando y/o adicionando los artículos 52, 53, 55, 56, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La instrumentación legal de las reformas y adiciones constitucionales que propusimos implican necesariamente la reforma y adición de varias leyes reglamentarias, en particular del COFIPE, sin embargo, la redacción de las adecuaciones de la legislación reglamentaria la reservamos para el momento en que se aprueben las reformas constitucionales, en virtud de que el procedimiento para la aprobación de unas y otras es distinto, además de que por razón natural las modificaciones que pudiesen ser aprobadas en el texto constitucional modificarían necesariamente la legislación reglamentaria.

Para llegar a ésta iniciativa hubo necesidad de tomar como referencia varias iniciativas y proyectos de decreto, así como varios trabajos de organizaciones sociales, incluyendo entre ellas a diputados, a diputadas que estuvieron trabajando en estas iniciativas.

No voy a dar lectura porque son muchos, desde 1999, hay en esta Cámara de Diputados varias iniciativas de organizaciones indígenas, como la ANICPA, que para poder llegar a un proyecto final tuvo que hacer cinco asambleas nacionales a lo largo y ancho del país.

Tomo también como referencia los Acuerdos de San Andrés también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el proyecto de Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, que ha sido trabajada desde hace 18 años en el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, y que en agosto de 1994 en la Subcomisión de Prevención y Protección de las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas, fue aprobada. Pero bueno esto está en su fase de discusión y todavía no acaban en la ONU.

Hasta aquí dimos una explicación preambular y sustentada en lo que el lenguaje parlamentario se conoce como exposición de motivos, para luego expresar con fuerza lo siguiente. Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados que firman al calce, sometemos a consideración de ésta soberanía lo siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma los artículos 52, 53, 56 y adición a los artículos 55, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único: Se reforman los artículos 52, 53 y 56 y se adicionan los artículos 73 con una fracción XXVII bis, y el 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52: “La Cámara de Diputados está integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 240 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales”. Lo que nos llevaría lógicamente al hacer números, a 540 diputados.

Artículo 53: La demarcación territorial...

Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas a fin de asegurar su participación y representación política en el ámbito nacional.

Para la elección de los 240 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. La sexta circunscripción electoral se integrará por aquellas entidades federativas en donde la población indígena, de acuerdo con el último Censo General de Población, sea superior al 2 por ciento de su población total.

Artículo 55: “Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos... el I, II y III no se modifican, hay una fracción que tampoco se modifica, un párrafo y en el siguiente párrafo que se introduce, diría lo siguiente:

Para poder figurar en las listas de la VI Circunscripción electoral, de representación indígena, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda esta circunscripción y ser indígena del pueblo indígena al que se aspira representar.

Sobre la vecindad no hay nada más que agregar.

El artículo 56- casi para finalizar: La Cámara de Senadores se integrará por 144 senadores, de los cuales en cada Estado o Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La Senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado segundo lugar en número de votos en la entidad que se trate.

Los 16 senadores restantes serán elegidos según el principio de la representación indígena, mediante el sistema de listas de candidatos indígenas votadas en una circunscripción indígena nacional, que se integrará con las dieciséis entidades federativas de la República con mayor porcentaje de población indígena, conforme a los resultados del último censo general de población. La ley establecerá las reglas y fórmulas para la integración de esta representación senatorial indígena”.

Artículo 73. Sobre las facultades no hay nada que agregar. En el poder público de los estados tampoco se agrega.

Sólo se agrega un párrafo en el artículo 116, que dice: Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las legislaturas de los Estados, por el principio de mayoría relativa, los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.

Hay artículos transitorios. Esto fue presentado aquí en el pleno de la Cámara de Diputados el 28 de abril del año pasado. Esperamos que después de que se aprueben los Acuerdos de San Andrés, sean retomadas varias iniciativas muy importantes.

**LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL ESTADO DE OAXACA.**

Lic. Cielo Reyes Cuellar*

El estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural sustentada en la presencia mayoritaria de los pueblos y comunidades indígenas que la integran, cuyas raíces se entrelazan con los que constituyen la civilización mesoamericana, hablan una lengua propia, han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; en ellos han constituido sus culturas específicas, que es lo que los identifica internamente y los diferencia del resto de la población del estado.

Dichos pueblos y comunidades tienen existencia previa a la formación del estado de Oaxaca y fueron la base para la conformación política y territorial del mismo por lo tanto, tienen los derechos sociales que la presente ley les reconoce. Artículo 2º de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca.

Agradezco la invitación para participar en este foro y aprovecho la oportunidad para reconocer el esfuerzo de los organizadores al propiciar este intercambio de experiencias, a fin de que los diputados y senadores integrantes de las Comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, cuenten con mayores elementos para la difusión de la iniciativa de reforma constitucional elaborada por la COCOPA y asumida por el Ejecutivo Federal.

Al preceptuar la iniciativa, los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, y con expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado Mexicano, para –fracción V_ acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación.

* Coordinadora de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

La iniciativa está considerando como un derecho de los pueblos indígenas de México, y comprendida dentro del ámbito de la autonomía, el derecho colectivo económico-cultural para la defensa u disfrute de sus recursos naturales existentes en las tierras y territorios de esos pueblos indígenas, tanto para fines productivos como de ... espiritual y para la satisfacción de sus necesidades.

Esta parte de la iniciativa ha sido sumamente polémica, a mi entender, por el desconocimiento que existe respecto del significado que para los indígenas tienen los conceptos de territorio y de tierra. Se han esgrimido dos argumentos en contra de dicha disposición: por una parte, afirman que al hacer referencia al término territorio se daría lugar a entenderlo como un ámbito espacial de validez, excluyente del resto del territorio nacional. Dicho de otra manera, quieren Balcanizar México.

También por otra parte, se ha sostenido que considerar que tal disposición tendría como consecuencia afectar las demás formas de propiedad previstas en la Constitución.

Uno de los reclamos indígenas ha sido la protección de sus espacios vitales, así, esta demanda internacionalmente la reconoció el Convenio 169 de la OIT. La respetó, se pactó, y lo mas importante: se firmó por la representación gubernamental federal y por el EZLN en los acuerdos de San Andrés. Todo esto con la finalidad de alcanzar la concordia y la paz con justicia y dignidad.

De esta manera, la tierra representa para los indígenas algo más que un medio de producción como parcela a cultivar. En la cosmovisión indígena, la tierra es la madre dadora de la vida, es vista como la raíz de la existencia, es nuestra madre tierra.

De esta manera, en el contexto cultural indígena la relación hombre-naturaleza tiene un significado especial y además particular, que sólo conviviendo con los indígenas, pero conviviendo con ellos entrañablemente y cotidianamente, nos podemos dar cuenta de ello, no viendo al indígena como el folklore o como sucede en el caso de la tierra, asistiendo a la Guelaguetza.

De esta suerte, con esta concepción que tienen los indígenas, para ellos el territorio va a ser un concepto mucho más amplio que el concepto tierra. El territorio es el espacio que necesita el grupo humano integrante del pueblo indígena para poder existir y desarrollarse, el territorio constituye un concepto más amplio que la tierra, pues como vemos lo comprende, está implícito en él; en el desarrollo libremente sus actividades religiosas, sociales, políticas, económicas, artísticas, para los pueblos indígenas, el mantenimiento de sus rasgos culturales presenta un especial énfasis y observémoslo, hace ratito hizo uso de la palabra el compañero y fíjense como se conduce, como se expresa, traigo unas palabras de lo que dice mi corazón. Es muy difícil en un mundo en un mundo como el nuestro, en una sociedad como la nuestra, en la que estamos acostumbrados y vivimos un humanismo cultural y también jurídico, en el caso de mi profesión, comprender estas cosas. Por eso es la propuesta del pluralismo, aceptar el pluralismo cultural y desde luego el pluralismo jurídico.

Por ello decía yo, los pueblos indígena con su particular énfasis que le ponen al territorio, lo consideran un espacio en donde el pueblo ejerce su propio poder, su propia cultura, su propia concepción del mundo y su propia concepción de la vida. De esta manera fue retomado por la ley de derechos de los pueblos y culturas del Estado de Oaxaca, la definición de territorio, porque estamos plenamente convencidos que no se fragmenta la unidad nacional, independientemente de que jurídicamente la unidad, el hablar, el término unidad nacional es un principio, nosotros los juristas lo consideramos como principios, y los principios no son de eficacia esencial obligatoria.

Decíamos, el territorio indígena es la porción del territorio nacional, constituida por espacios continuos y discontinuos, ocupados y poseídos por los pueblos y comunidades indígenas en cuyo ámbito espacial, material, social y cultural se desenvuelven aquellos y expresan sus formas específicas de relación con el mundo, sin detrimento alguno de la soberanía nacional, del Estado Mexicano ni de las autonomías del Estado de Oaxaca, ni de sus municipios.

Si nosotros vinculamos, y ésta es una técnica jurídica que emplean los estudiosos del derecho, y es lo que me asombra de quienes han vertido rabiosamente sus opiniones en contra de la inclusión del término territorio, es que si vemos la palabra, la palabra está vinculada a los recursos naturales y los recursos naturales están en ese concepto que les hemos manejado, que les hemos comentado del territorio como lo ven los indígenas.

De esta manera concluyo que lo que demandan los indígenas no es crear Estados Independientes o nuevas naciones, ellos demandan lograr el reconocimiento constitucional al espacio vital para el sostenimiento y desarrollo de sus culturas y sus pueblos, que eso es lo que nos va a identificar de todos los demás y por eso exigimos que haya unidad en México, pero en la diversidad.

DERECHOS HUMANOS Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA ENTRE LOS PUEBLOS INDIOS, UNA REFLEXIÓN DESDE LA MONTAÑA DE GUERRERO.

Abel Barrera Hernández *

A imagen y semejanza del Sistema Educativo Nacional, el Sistema de Procuración y Administración de Justicia ha provocado entre los pueblos indígenas un patrón sistemático de discriminación, injusticia, etnocidio y violaciones sistemáticas de los derechos humanos y colectivos.

El aparato de justicia está en manos de funcionarios mestizos que en su formación profesional nunca redimensionaron que los instrumentos legales, nacionales e internacionales están orientados a garantizar fundamentalmente la vigencia de los derechos humanos, a sancionar a quien atenta violar el orden constitucional y a afectar a las personas y sus bienes, pero sobre todo a comprender que la aplicación de la justicia debe considerar la realidad pluricultural de los ciudadanos.

* Comité Tlachinollan, Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la Montaña, A.C.

El espíritu de las leyes mexicanas tiene una visión unívoca sobre la justicia, prevalece obviamente y se impone hasta la fecha una concepción occidental del derecho. Sin embargo, los Sistemas de Naciones Unidas y el Interamericano, así como algunas legislaciones nacionales de América Latina han hecho florecer preceptos legales que poco a poco incorporan la visión jurídica de los pueblos indígenas, han hecho realidad el pluralismo jurídico.

A pesar de que el Estado Mexicano ha firmado tratados y convenios internacionales, en la práctica son letra muerta, primero porque no hay una cultura de la diversidad y del pluralismo jurídico, permean el racionalista positivista e individualista, existe una concepción demasiado mecanicista y mercantilista por parte de las autoridades que procuran y administran justicia, quienes viven en las tinieblas en cuanto al uso y manejo de los tratados internacionales para garantizar una justicia plena a los ciudadanos indígenas de nuestra nación.

Se hace tabula rasa de que los pueblos y ciudadanos indígenas son el cimiento de la diversidad cultural de nuestro país y que sus valores y cultura están indisolublemente mezclados en la identidad nacional. Se ignora su gran contribución en el enriquecimiento del patrimonio cultural y en la vitalidad jurídica, intelectual, artística, social y económica.

En las regiones indígenas las leyes nacionales han servido para remarcar con mayor crudeza la práctica del despojo, del abuso, del engaño y la violencia, logrando desarticular la vida comunitaria y sus sistemas normativos que los han colocado en una situación estructural de subordinación jurídica y de control político, negándoles la posibilidad de acceder a una justicia de manera eficaz y equitativa.

La demanda indígena de un pacto social incluyente de la diversidad y de la naturaleza pluricultural del país tiene como punto de partida el reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho.

Es impostergable que el gobierno mexicano emprenda una reforma constitucional, institucional y de políticas públicas, dicho proceso debe basarse en los instrumentos que el gobierno federal ha asignado con la comunidad internacional y en los compromisos políticos que el mismo ha tomado de cara a la sociedad mexicana de la cual son parte los pueblos indígenas.

La legislación interna en materia indígena es insuficiente. Como ejemplos, podemos mencionar el artículo 4º de la Constitución Federal, se circunscribe al reconocimiento de la composición pluricultural de la Nación, pero en términos formales y prácticos no tiene fuerza jurídica para garantizar y defender los derechos de los Pueblos Indígenas mexicanos. En el artículo 27 Constitucional que se refiere a la propiedad y la tenencia de la tierra, existen disposiciones que atentan contra la integridad de la propiedad social de las tierras y territorios indígenas, favoreciendo la comercialización y enajenación de las mismas y dando cabida a los grandes megaproyectos.

En cuanto a los artículos 14, 16 al 21, referentes al sistema de procuración e impartición de justicia estos no contemplan la diversidad cultural, no reconoce la jurisdicción de las autoridades tradicionales ni sus formas de resolución de conflictos internos.

Como efecto de éstas insuficiencias y limitaciones de la legislación general, las subsecuentes reformas a las constituciones locales y leyes secundarias han resultado en su mayoría contrarias a las necesidades y demandas indígenas planteadas en los Acuerdos de San Andrés y reconocidas en el Convenio 169.

Por otro lado, esta implicada la violación de los tratados internacionales que por efecto del artículo 133 de la Constitución, son ley suprema de la nación, como son el Convenio 169, el Convenio de Diversidad Biológica, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales entre otros.

El sistema de procuración e impartición de justicia no contempla la posibilidad de que sean las propias autoridades indígenas quienes puedan intervenir en la resolución y sanción de

los conflictos y en las entidades federativas donde haya algunos avances, como Oaxaca, las autoridades indígenas son relegadas a ser auxiliares de la procuración de justicia contrario a la demanda de los pueblos a aplicar sus sistemas normativos de la regulación y solución de conflictos.

Por otra parte, cuando los pueblos indígenas y sus integrantes tienen acceso a la jurisdicción del Estado, lo hacen en términos de desigualdad y discriminación y se encuentran ante autoridades judiciales que desconocen los derechos que tanto en las legislaciones nacionales como internacionales tienen reconocidos los pueblos.

Ante esta realidad socio-jurídica desfavorable para los pueblos indígenas, nos podemos imaginar la manera desigual como enfrentan un proceso legal que es ajeno a sus sistemas normativos y a la visión que tienen sobre los que es la justicia.

Por los que se refiere a las instituciones de administración pública en su gran mayoría carecen de espacios de interlocución con los pueblos y sus autoridades, circunscribiendo sólo al Instituto Nacional Indigenista los temas que deberían estar incluidos en las preocupaciones de otras Secretarías de Estado, como es la de Salud, Educación Pública, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, entre otras.

El gobierno mexicano ha concentrado en una sola institución todo lo referente a los pueblos indígenas, en lugar de desarrollar mecanismos donde todas las dependencias de gobierno tuvieran las perspectivas de la diversidad cultural y de género.

En el caso del Poder Legislativo, tanto a nivel federal, como local el monopolio de los partidos políticos ha excluido casi por completo la representación y participación de los pueblos indígenas en tareas de legislación, no solo en los que se les atañe, sino en el impulso de una cultura pluricultural del sistema jurídico, nacional y local.

En el terreno electoral los indígenas mexicanos se han visto excluidos en su participación política, si no es a través de la filiación a partidos políticos.

En aquellos donde se ha reconocido el derecho de elección de autoridades por usos y costumbres , tanto la legislación es insuficiente, como las instancias encargadas en ese terreno no tienen criterios, ni directrices que favorezcan la resolución cuando se presentan conflictos en este orden.

Propuestas: Reforma integral a la Constitución y a las legislaciones secundarias conforme al Convenio 169 de la OIT y otras leyes internacionales, así como de los Acuerdos de San Andrés.

Es necesario realizar una reforma integral de la Constitución Federal y del Sistema Jurídico Mexicano, en el sentido del reconocimiento del carácter colectivo y de diferencia cultural de los pueblos indígenas conforme a las disposiciones de la legislación internacional existente y como consecuencia de ellos el reconocimiento jurídico político como sujetos de derecho.

Es de vital importancia que la formulación de las reformas constitucionales y del orden jurídico en su conjunto observen el contenido de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena firmado entre el Gobierno Federal y el EZLN no solo porque representan la base del consenso nacional para la inclusión de los pueblos indígenas, sino también porque representan el camino para alcanzar la paz con justicia y dignidad.

Establecer los mecanismos de consulta y participación adecuada, suficiente y de buena fe en la elaboración de propuestas legislativas que involucren directa o indirectamente a los pueblos indígenas.

Reforma integral de las instituciones públicas a una realidad pluricultural. Demandamos la asesoría del Gobierno Mexicano, al Poder Judicial y al Poder Legislativo para establecer los mecanismos jurídicos y políticos que garanticen la real aplicación de los derechos indígenas

y la incorporación a la vida política nacional de estos pueblos como sujetos colectivos de derecho.

En el Poder Ejecutivo, una reforma a las dependencias e instituciones, para que cada una de ellas tenga una orientación pluricultural, una atención especial respetuosa de la perspectiva de género y de diversidad cultural, estableciendo programas de capacitación a las autoridades y funcionarios que tienen relación con los pueblos indígenas.

Es necesaria la creación de una institución pública en manos de los pueblos indígenas, que promueva su propio desarrollo económico, social y cultural coordinando las diferentes políticas públicas de educación, salud, vivienda, alimentación, promoción y fortalecimiento de las culturas indígenas, entre otras.

Al Poder Legislativo, exigimos asesore a nivel internacional para realizar la reforma constitucional y las legislaciones reglamentarias y secundarias para adecuar el orden jurídico en términos de la diversidad cultural, conforme a lo establecido en el Convenio 169. Es necesaria una reforma al Poder Legislativo que garantice la representación real, y no necesariamente partidista de los pueblos indígenas, en estas instancias de debate y decisión nacional.

Al Poder Judicial se requiere establecer el reconocimiento de las autoridades tradicionales, con la posibilidad de aplicar sus sistemas normativos internos, y que sean respetadas por las autoridades judiciales. En los casos en que los pueblos acudan a la jurisdicción del Estado, lo hagan ante autoridades, jueces y magistrados capacitados en la aplicación de los tratados internacionales firmados por México, así como la utilización de otras disciplinas que les ayudarán a realizar un juicio más completo.

Que las elecciones por usos y costumbres sean respetadas, que existan los mecanismos para resolver estos conflictos, que se fortalezcan los sistemas de cargos, reconocimiento integral del papel de las autoridades y las asambleas indígenas.

Diseño de políticas públicas que incluyan la perspectiva de la diversidad cultural y de género. Adoptar medidas especiales para salvaguardar a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, los usos y costumbres, las culturas y el medio ambiente.

Que en los estudios de impacto ambiental participen los pueblos indígenas y las comunidades interesadas garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño, planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de los programas de gobierno que de alguna manera los favorezcan o puedan afectarlos.

Establecer la constitución de la consulta con procedimientos apropiados y en particular a través de las instituciones representativas, tal y como lo establece el Convenio 169.

Otorgar la información veraz y completa sobre los programas que pretendan ejecutarse en los territorios indígenas, y que les puedan afectar. Garantizar la participación de las mujeres indígenas en la conformación de las políticas públicas, así como en los espacios de decisión. Muchas gracias.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS.

Dr. Sergio Sarmiento Silva*

Antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento el haberme invitado, y más que una ponencia formal, más bien yo quiero presentar ahora una serie de reflexiones en torno al momento que vive el país con relación a los pueblos indígenas.

Me parece que es un momento muy importante de la historia de nuestro país, porque finalmente la cuestión de los pueblos indígenas forma parte de la agenda nacional, y que no se puede obviar ni mucho menos negar.

* Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Para ello voy a hacer un breve recorrido sobre lo que ha sido el movimiento indígena en los últimos 30 años, desde principios de los años 70, en donde los indios comenzaron a ser visibles, comenzaron a ser sujetos políticos.

Ya lo decía el profesor Salomón Almata, en 1975, en Janitzio, Pátzcuaro, se constituye el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, producto de una política indigenista del aquel entonces Presidente Luis Echeverría, que puso todo el aparato del Estado para organizar a los indios que hasta ese entonces no tenían una instancia que les sirviera como interlocutores frente a los poderes públicos, pero los pueblos indios organizados por el mismo gobierno se revelaron, porque en ese, el régimen pasado de estilo corporativo, los quería incorporar al Partido Revolucionario Institucional.

Los indios no querían ser incorporados al PRI y lucharon contra la corriente durante muchos años, hasta que en 1985 en Amealco, Querétaro, finalmente el Gobierno de Miguel de la Madrid entierra y desaparece al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

Desde 1985 hasta 1992, justo se da un proceso de reorganización del movimiento indígena, que para ese entonces ya no existían organizaciones, sino de corte Priísta, como lo que quedó del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que era la Confederación de Pueblos Indígenas y la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, que también se diluyó al correr los años 80s. Y es en 1992 cuando a lo largo del continente se constituye toda una iniciativa social que cristaliza en la llamada Campaña Continental 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular.

En México se constituyó el Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, de manera independiente y en aquellos años, justamente en el régimen de Salinas, este gobierno nuevamente cae en la tentación de crear su propia estructura, dado que la Campaña 500 años tenía un gran peso político e ideológico y constituye en Congreso Indígena Permanente, de efímera vida pero que tiene una gran resonancia a nivel

internacional porque se alía al Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, que tienen su sede en Ottawa, Canadá.

Después de ésta Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular todo mundo ya sabe que en 1994 irrumpen los indígenas chiapanecos, agrupados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Lo interesante de éste proceso, que desafortunadamente no logra cristalizar varias de sus iniciativas es algo que nos debe poner a reflexionar sobre cuáles han sido los impedimentos de que, a pesar de que la mayoría de los actores se pronuncian y simpatizan con las iniciativas zapatistas, las propuestas de éste Ejército no han cristalizado en organizaciones, ellos lo plantean.

Ni la Convención Nacional Democrática, ni el Movimiento para la Liberación Nacional han cristalizado en el sentido que los propios zapatistas lo han planteado.

Entonces, ahora, en este año pasado, cuando yo estaba de Director en el CIESAS Oaxaca, organicé dos reuniones, una estatal y una nacional, con diferentes dirigentes de organizaciones indígenas tanto de Oaxaca y a nivel nacional.

Lo interesante de éstos dos eventos fue que la mayoría de los asistentes de distintos partidos, de distintas tendencias ideológicas coincidían en la necesidad de que el movimiento indígena, en este momento, a nivel nacional requiere de una instancia propia que le permita ser el interlocutor ante el Estado. Y me refiero al estado en el sentido más amplio, no solamente ante el gobierno.

Y esta instancia debe ser lo que algunos llaman la casa de todos, la de los indios, en donde entren todas las tendencias políticas y todas las corrientes ideológicas porque, sin lugar a duda, hay una de las debilidades de los pueblos indígenas es su gran dispersión, en su fragmentación y su atomización.

Los procesos desestructuradores del modelo económico neoliberal están desestructurando a las comunidades cada vez más y el gran reto es cómo reconstruir a esos pueblos y cómo generar organizaciones sociales fuertes que permitan construir un instrumento propio que haga de los pueblos indígenas el sujeto político que hoy requiere el Estado mexicano para efectivamente, reconocer a todos los sectores sociales.

Finalmente, yo quiero decir que hoy es el momento más importante para ponernos a imaginar cuáles pueden ser estos instrumentos o instrumento que ayude justamente, a tratar de crear espacios novedosos, de acción política nueva, imaginativa, que no se repitan los antiguos procesos que o fueron captados por el gobierno o que fueron manipulados por algunos partidos, o que por las iglesias también son motivo de atracción.

Cómo superar este tipo de situaciones. Cuáles son los interlocutores del movimiento indígena. ¿Son las instancias religiosas o estatales o son las comunidades aisladas indígenas, atomizadas en las distintas regiones de los estados en donde tienen presencia?

¿O también son los grupos que están organizados en California o en Canadá de los migrantes que también forman parte de esto que algunos hemos llamado el movimiento indígena mexicano?

Que construir, que hacer, que instancia formar. Yo creo que esto es algo que el movimiento indígena hoy se tiene que replantear para tratar de construir ese instrumento que le sirva.

Finalmente, déjenme terminar con dos cosas más; una es que es muy importante que la ley del COCOPA hoy esté en el Senado y posteriormente en la Cámara y que sea discutida por los representantes de la nación, el Poder Legislativo, pero a mi me parece que la legislación, por sí misma, no es suficiente. Y de ahí que el movimiento indígena debe contar con un instrumento fuerte y poderoso, porque ya hablaron hace rato dos colegas sobre lo que es la ley en Oaxaca, pero déjenme decir que la ley en Oaxaca, hasta ahora es letra muerta, porque los pueblos indígenas no han tenido la fuerza suficiente para poder

ganar un sólo juicio a través de esa ley o esas leyes, y que son muy adelantadas, para decirlo.

Por último ahora sí, a mi me parece que esa discusión que hoy se está dando en este recinto debe obligar al Poder Legislativo a convencer ya no a los indios de que tienen derecho, sino convencer a los no indios que reconocer los derechos de los pueblos indios no va en detrimento de los suyos, porque la simpatía se agotan cuando al reconocer los nuevos derechos pueden generar distorsiones sobre sus alcances.

Yo creo que en este momento a la sociedad no india debe convencerse de la oportunidad que está viviendo el país en este momento sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero sobre su reconocimiento como sujeto político.

LA REALIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Mario Ramírez Centeno *

Nuestra participación va en múltiples sentidos, aunque básicamente enhebrada en el terreno de la realidad de los pueblos indígenas y su relación con la iniciativa de la COCOPA y algunas reflexiones más en términos de la situación actual de la lucha indígena y su relación también con otros actores de la sociedad mexicana.

La realidad cultural de los pueblos indígenas, el estado de las culturas indígenas es de culturas en un estado de resistencia obligatoria y casi la extensión en algunos casos, a partir de una marginación y agresión sistemática real.

Parte del México extremadamente pobre es triple en su marginación, pues además de la pobreza extrema, han de resistir los embates de un mundo en globalización que nuevamente

* Fundación Arte, Cultura y Sociedad.

los margina en un proceso de internacionalización de culturas consideradas universales y que en la gran mayoría de las veces no son más que la llamada cultura de masas o cultura desechable y que ni siquiera son esas culturas que se pretenden universales.

Aparentemente detenidas en la historia, las culturas indígenas han sido congeladas en la interpretación de un pasado glorioso que no volverá, las que sin embargo han conservado conocimientos, normas y valores con una inestimable información de lo que fueron las culturas indígenas en su expresión plena en el pasado.

De ese manantial han bebido y explotado hasta la saciedad antropólogos, estudiosos, la medicina alópata, las revoluciones y muchos más, sin reconocer, en la mayoría de los casos, el aporte que han realizado al bienestar de México y de la humanidad.

En cambio, han sido vilipendiadas, arrasadas, perseguidas, trasplantadas y atacadas en una serie de verbos de la infamia.

Ciertamente, en el análisis histórico de su existencia podríamos decir que pertenecen a un México del pasado, pero pasado del cual los antecesores de los actuales pueblos indígenas y ciertamente una cantidad más imaginaria que real de los mestizos mexicanos fueron los legítimos soberanos. Su existencia nos echa en cara la realidad de un México imaginario y de un México profundo enfrentados en su contundencia racista y deplorable, pues nos indica que hemos fincado una nación sobre del lodo y paja en vez de castillos.

Hemos mandado a comer a la cocina al hermano más oscuro, una vergüenza oprobiosa que nos ofende más a los que nos quedamos a la cena en la mesa que al hermano que se recicla en resistencia, aunque en la extrema pobreza y la marginación.

No estamos hablando de la pequeña burguesía de una pseudo izquierda que ha confundido a la solidaridad con los pueblos indígenas con pretensiones de liderar su legítima lucha. Esta pequeña burguesía que se pretende marginada sólo porque no le dan el asiento más importante ocupado por la gran burguesía nacional e internacional, que ahora se maneja,

esta pequeña burguesía, en los medios de comunicación como parte en el conflicto, caracterizado este conflicto del EZLN contra el Gobierno Federal como pluriétnico y de los marginados y que pujarán por todos los medios posibles para quietar la interlocución a la comandancia Zapatista a los vendedores indígenas.

Estamos hablando de los pueblos indígenas reales, los que deben ser los interlocutores directos de este proceso, pues ellos son los que cenaron en la cocina hasta ahora, porque el México imaginario se avergonzó del México profundo y real y no esta pequeña burguesía que cambia de ideología como la ropa, pues cree que eso le permitirá sentarse en la silla principal, embarcando al país en una fantasía escolar dentro de la aventura de un supuesto frente nacional opositor sin sustento ideológico y en una unidad pragmática conveniente a esta pequeña burguesía racista y explotadora de la lucha indígena.

Urge por lo pronto un nuevo pacto del México que cene en la mesa y el México que lo hace en la cocina, cenando con las migajas que le dejan. Es urgente que ese pacto contenga a la totalidad de los pueblos indígenas, pues es una situación similar, sólo diferente en los matices como se manifiesta y en las latitudes distintas de nuestro territorio.

Hoy se levantan en armas quienes mayoritariamente son mexicanos indígenas pertenecientes a las culturas indígenas emparentadas con los mayas. Mañana lo harán otros si no se establece este pacto social que nos lleve por la vereda de la pluralidad, la multiculturalidad y el esfuerzo civilizatorio diverso.

En ese pacto deben de caber más cosas aún que las que contiene la Iniciativa de la COCOPA, nacida en un momento de consensos diferentes, con un Ejecutivo diferente, en una concepción del ejercicio del poder federal diferente, nacida con el interés de convencer a una parte gubernamental obstinada en no ceder nada más que por simple inercia.

La Iniciativa contuvo, a veces de manera soslayada, unos acuerdos de San Andrés logrados en un México cuestionada por su antidemocracia.

En la actualidad, con el logro histórico de tener las primeras elecciones incuestionables de su transparencia democrática, estamos en un país, para bien o para mal, revolucionado por este cambio.

La Iniciativa de la COCOPA es una bandera de la paz, pero ciertamente es sólo uno de los pilares de este gran pacto nacional con los pueblos indígenas de México.

De entrada, en términos culturales hace falta entrar al desarrollo de sus culturas, que se traducen en fincar más claramente la sistematización de sus memorias y su cosmogonía, así como definir y consensar la utopía indígena para, de esta forma, fortalecer su identidad y sus acciones y expresiones que tiendan a ser más acordes con los contextos de su realidad, pues de esa manera podrán emprender un esfuerzo civilizatorio más firme y eficaz, saliendo de la marginación tanto como de la extrema pobreza.

Históricamente, al acceso al poder federal no de una clase política, sino de una clase empresarial, una parte de la gran burguesía mexicana la de nuestro país para acceder a una necesaria y casi inevitable industrialización y el paso hacia un estadio más avanzado del capitalismo de nuestro país.

En términos culturales implica el arrasamiento y la marginación de las culturas indígenas, si se emprende sin la sustentabilidad ecológica y cultural, como se da con los mecanismos actuales de la expansión industrial, a lo que hay que oponer una industrialización alternativa que no lastime la creatividad indígena ni hiera la ecología o algún aspecto de las culturas indígenas, tan apegadas a la tierra y a la naturaleza.

Pero si seguimos dejando al México profundo en la cocina, se nos puede aguar la luna de miel, cuando los pueblos indígenas irruman en la mesa para tomar lo que les debió corresponder desde siempre, como mexicanos.

La insuficiencia de la Iniciativa de la COCOPA en el marco de la realidad cultural y del debate global sobre cultura y desarrollo. Voy a enumerar algunos puntos en torno a las culturas indígenas contenidas en los acuerdos de San Andrés Larrainzar y que no están

contenidos en la Iniciativa de la COCOPA. También algunos de los puntos recomendados por la Comisión de Cultura y Desarrollo de la UNESCO y no contenidos tampoco en la Iniciativa de la COCOPA. De igual manera puntos basados en convenios firmados por el Estado mexicano con la OIT y tampoco contenidos en la Iniciativa de la COCOPA.

Los Puntos son: Territorio, Desarrollo Cultural, Sistemas Normativos, Derecho Público, Caracterización de los Pueblos Indígenas, Autonomía, Identidad, Sujeto de Derechos, Instituciones Propias, Nuevo Marco Jurídico para la relación Estado-Pueblos Indígenas, Diálogo Intercultural, Derechos Femeninos, Derechos a la Libre Elección de Autoridades, Derechos a la Libre Elección de Representantes, Representación Indígena en Órganos Nacionales, Nuevo Federalismo, Nuevo Pacto Social, Erradicación de formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, Desigualdad y Discriminación, Derecho a la Diferencia cultural, Derecho al hábitat, Derecho al uso y Disfrute del Territorio, derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo, preferencia a las comunidades indígenas en el otorgamiento de concesiones para obtener beneficios de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, protección a tierras de grupos indígenas, formas de la propiedad indígena, regulación del fomento de cuestión cultural, Caracterización del territorio, Normatividad para el reconocimiento del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los territorios que ocupan, Caracterización de la sustentabilidad,

Promoción de las culturas indígenas, su reconocimiento;

El derecho a producir, a recrear y difundir sus culturas, la participación activa de la promoción y coordinación de las actividades e instituciones dedicadas al desarrollo cultural de los pueblos indígenas y su incorporación a los sistemas curriculares de la enseñanza pública y privada;

Derecho al libre acceso a los medios de comunicación,

Promover el desarrollo de los componentes de su identidad y patrimonio cultural,

Promover el desarrollo de sus lenguas culturas, tradiciones y costumbres,

La discriminación como un delito,

Rehabilitación de territorios,

Consulta a los pueblos indígenas en los casos de afectación por leyes de ser emitidas,

Educación integral bilingüe,
Asegurar educación y capacitación,
Diálogo permanente,
Descentralización democrática,
Sistemas electorales propios,
Fortalecimiento municipal,
Representación en el Congreso de la Unión,
Empoderamiento de los pueblos indígenas,
Sistematización de los componentes de la cultura,
Creación de instituciones autonómicas.

Todos estos puntos, de alguna manera son puntos que nosotros también proponemos para que se amplíe el debate acerca de todos estos puntos, porque no están contenidos en la iniciativa de la COCOPA y deben de formar parte del Pacto Nacional, con el nuevo Pacto Nacional con los Pueblos Indígenas.

Como parte también de la ponencia hay otros dos apartados: uno es acerca del desarrollo cultural. Desarrollo cultural se comprende con un proceso mediante el cual los pueblos indígenas fortalecen progresivamente su cultura en los diferentes aspectos que la conforman a través de acciones, estructuras e instituciones y formas específicas de los mismos pueblos indígenas o del Estado de México.

Estamos hablando de que si un pueblo indígena carece de una sistematización de su memoria oral y el proceso mediante el cual pueden emprender el diálogo cultural, es la versión estenográfica de la misma, entonces hace falta una institución o estructura o una acción que lleve a cabo la concreción de la misma.

Nada más para concluir, queremos plantear en lo general, el sentido de la iniciativa de la COCOPA, que ha pesar de que está incompleta la iniciativa de la COCOPA, es ahora o se ha conformado ahora, como una bandera para la paz totalmente importante, porque por un lado el Ejecutivo y las fuerzas castrenses desconfían del EZLN porque al parecer no le ven

techo a las solicitudes y teme que se convierta su marcha a la ciudad de México en actividad y subversión y desestabilización y a la vez sospecha esa pequeña burguesía oportunista.

Y por otro lado, el EZLN ve que de alguna manera el gobierno está cumpliendo de forma lenta en la solicitud de señales y también siente de alguna manera probablemente Vicente Fox no sea quien decida en el país, como ya ha sido afirmado, pero pensamos que ésta, la iniciativa de la COCOPA, es actualmente la bandera para la paz. Muchas gracias.

UNA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS.

C. Margarito Ruíz*

Los responsables directos inmediatos, son los grupos parlamentarios encabezados, desde luego por sus partidos.

No podemos seguir pensando y negar la demanda histórica de los pueblos indios durante más de cinco siglos. No es posible discutir si tenemos o no tenemos derechos, nosotros somos pueblo, siempre hemos sido y seremos pueblos.

Si logramos entender de que somos pueblos, entonces se actúe la legislación nacional para que estos pueblos realmente tengan todos los derechos como cualquier pueblo del mundo.

Más sin embargo, la aceptación de vivir y convivir en una sociedad, dentro de una sociedad racista es muy complejo. La raíz profunda de los pueblos originarios de este país ha logrado resistir durante todos estos siglos de despojo, de genocidio, de etnocidio de destrucción masiva, destrucción individual.

* ANIPA-Chiapas

Por eso podríamos pensar que en las primeras etapas visibles en las últimas dos, tres décadas, los pueblos indios organizados en grupos, en solicitantes de tierras y posteriormente en grupos, en solicitantes de créditos, se piensa que con eso sí combatir la extrema pobreza que cada vez se usa más en los diferentes discursos y se dice que también se invierte muchísimo dinero en territorios indígenas.

Creemos que la lucha de los pueblos indios ha sido por etapa.

Muchos de nosotros hemos participado en esa primera etapa de recuperación de tierra, nos llaman invasores, nosotros creemos que hemos venido recuperando poco a poco y pequeño espacio, superficie de los territorios que nos fueron invadidos.

Hoy por hoy, la demanda ya no es eso, la demanda es mucho más allá, es una demanda política; es una demanda a que se transforme esta sociedad nacional para que los nunca hemos sido vistos, seamos visibles pero en todas las instancias, no más discursos de combatir la extrema pobreza, nos sentemos-dije- nos pongamos de acuerdo cómo queremos caminar ahora pero todos y todas.

Es lamentable que los partidos políticos- todos- se queden en ese discurso, es tiempo ahora que avancen, que demuestren la capacidad, sobre todo la voluntad de discutir, si no entienden todavía de qué estamos hablando cuando estamos hablando de derechos políticos de los pueblos indios, pues nos sentemos a ponernos de acuerdo y a discutir, si quieren. Pero sin la participación indígena en esta dinámica, en este proceso, pues van a estar dando vueltas como disco rayado y no se ponen de acuerdo entre ellos, porque no hay una voluntad abierta, directa, plena, permanente en todas las instancias con la presencia y participación plena de los pueblos indios.

No basta en estos medios, en estos espacios, eso es importante.

Pero hay muchas reuniones pequeñas donde los pueblos indios, la representación de los pueblos indios ya no está ahí, es donde se transforman los acuerdos finales de los diferentes planteamientos.

Decía que vivir y convivir en una sociedad de esta naturaleza, es sumamente difícil, por eso mismo el planteamiento de una autonomía y libre determinación de los pueblos indios, es quizá, los conceptos y marcos jurídicos que permite para que una sociedad negada a su derecho durante siglos, pueda empezar a ejercer de manera plena.

Por eso mismo no es posible seguir planteando que autonomía o libre determinación, es lo mismo, secesión o separación, de dónde vamos, estamos de desde Sonora hasta la península, somos de aquí, donde nos vamos, lo que se necesita es que se transforme la legislación nacional de acuerdo con las demandas actuales y la autonomía que ejerza cada pueblo de acuerdo a su propia dinámica, cada individuo, cada familia, cada ranchería, cada comunidad, pueda, y de hecho hemos venido ejerciendo ese derecho, pero siempre dicen que estamos fuera de la ley, y nosotros decimos que si estamos fuera de la ley porque no han querido que estemos dentro y la lucha ahora, la lucha consensando de todo el movimiento indígena de éste país y del universo, es que estemos dentro de la ley.

Y los que ya se han sentido dueños de las leyes y de la ley, en este caso de la Constitución, pues sépase que está mocha, no estamos todos, necesitamos abrir para que estemos todos ahí.

Por eso tiene que ser una dinámica difícil y lenta. Por eso la autonomía y el ejercicio pleno de libre determinación no se da facto, ni solamente por decreto, se tiene que sumar grandes esfuerzos, sobre todo el movimiento indígena de crear las condiciones de un espacio común, respetando la diversidad y la pluralidad, no solamente cultural, sino ideológica y política de crear internamente este espacio de debate permanente para ir consensando los pasos, los pasos generales y los pasos particulares en cada una de las regiones, estados, municipios y comunidades del ejercicio del derecho sagrado de la libre determinación.

Por esto, se necesita pues que sumen esfuerzos, los legisladores de todo nivel, pero no solo, también los cristianos porque a veces son más políticos que cristianos, pero no solo, las ONG'S, los académicos que se discuten, que crean espacio privados impenetrable para que representaciones indígenas estén ahí no son esfuerzos comunes que vale la pena actualizarse ahora para llegar a un acuerdo poco a poco, que se crean los espacios de diálogo multicultural, multilingüe en esta composición tan riqueza de la sociedad nacional mexicana.

Si llegamos a eso, entonces, llegamos a crear, es crear esas condiciones, entonces la iniciativa de la COCOPA no tendrá mayor dificultad de pasar en esta Cámara, en este Congreso de la Unión.

Si se avanza, se queda en discusiones desgastantes, no va a llevar meses, años y no pasa. Lamentablemente estamos retrasando asuntos nacionales que algún día- si no es hoy será mañana, de todas maneras se va a dar- el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indios se va a dar y se está dando poco a poco.

En el seno de las Naciones Unidas, hace 20 ó 25 años era imposible llegar, tener presencia indígena ahí, hoy son cada año más de mil dirigentes indígenas del mundo, tiene presencia, habla, presenta.

En Washington, el Proyecto de Declaración Americana nos costó, pero se abrió las puertas, ahora tenemos sillas dentro del Salón de los Gobiernos, también ya tenemos pequeños espacios los pueblos indios.

Hoy, hay una reunión en Guatemala para darle continuidad a esa cuestión de manera cerrada, dirigentes indígenas, el 24, 26, 27, en la presencia de los gobiernos con dirigentes indígenas para seguir la discusión, para crear las condiciones y aprobar, si así se consensa, la iniciativa sobre el Proyecto de Declaración Americana y la iniciativa sobre el Proyecto de Foro permanente de las Américas de los Pueblos Indios.

Pero bueno, ¿qué pasa aquí? México ha sido cabeza en muchos momentos, sobre todo en la política indigenista, ha sido líder en la región para avanzar de manera “paternalista” quizá en muchos momentos, sin desconocer la parte positiva que hizo el indigenismo durante sus tres, cuatro o cinco décadas que estuvo presente en este país, hoy llegaron los tiempos de cambios, ya no más indigenismo, ni paternalismo; hoy es necesario crear también en paralelo a las reformas institucionales que está destinado para atender los asuntos de los pueblos indios; tienen que ser los pueblos que encabecen ahora la administración de sus instituciones, de las instituciones que se vayan creando.

Voy a terminar diciendo que el proceso de la participación indígena en estos tiempos de espacios en el Congreso de la Unión, ha sido sumamente difícil; yo estuve aquí en la LIV Legislatura, cuando se reforma el artículo 4º de la Constitución, yo presenté la iniciativa que ni siquiera se quiso discutir para transformar, reformar varios artículos, solamente se consensó en las últimas 24 horas que terminara nuestra misión, que se reformara el artículo 4º.

Hay una demanda que se debe de avanzar, crear las condiciones de la legislación nacional para que haya una plena representación de los pueblos indígenas en este recinto, sin que necesariamente sea vía partidos políticos, no nos cerremos, pero abramos para crear otras condiciones de la legislación para que se crea la sexta circunscripción o una circunscripción especial de pueblos indígenas para los pueblos indígenas como su presentación de este espacio. Gracias.

LA DEFENSA DEL INDÍGENA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

Mario Alberto Guzmán*

En su carácter de gobernador del Estado de Oaxaca, Benito Juárez señaló en 1848: “Restablecida la federación, los pueblos no sólo han recobrado sus ayuntamientos y repúblicas, sino el derecho de elegirlos conforme a sus antiguas costumbres, quedando así organizada la administración de las municipalidades de una manera que lejos de obstruir, expedita la marcha de la administración general del estado”.

Señores legisladores de la Comisión de Asuntos Indígenas, señoras y señores. Agradezco la invitación para participar en esta importante jornada que representa un mecanismo de expresión democrática para el análisis de los grandes problemas nacionales.

En el estado de Oaxaca, esta vía ya ha sido probada para avanzar en materia de reconocimiento de derechos indígenas y la legislación estatal.

La lucha por la defensa de los derechos indígenas se fortalece en México en 1990 con la ratificación del Convenio 169 de la OIT y en el estado de Oaxaca con la reforma al artículo 16 de la Constitución Política Local, para reconocer la composición pluriétnica de la población, inaugurándose así la presencia constitucional de los pueblos indígenas en el orden estatal.

En 1995 se aprobaron en el Congreso de Oaxaca, algunas reformas al Código de Instituciones y procedimientos Electorales, a través de los cuales se dio legalidad a las formas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales, por medio del procedimiento de usos y costumbres. Estas reformas aprobadas hace más de cinco años, han abatido de manera considerable el número de conflictos postelectorales en las elecciones de autoridades municipales.

* Procuraduría para la Defensa del Indígena de Oaxaca.

El avance más importante que se ha tenido hasta ahora en Oaxaca, la constituye la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas que tiene un fundamento histórico y sociocultural.

Oaxaca es el estado con el mayor número de grupos étnicos y casi el 70% de la población es de origen indígena.

Desde el punto de vista numérico, 15 grupos étnicos, las comunidades afro-mexicanas y los indígenas procedentes de otros estados, son beneficiarios de una nueva legislación, estatal, reglamentaria del artículo 16 de la Constitución política del estado Libre y Soberano de Oaxaca.

La primera condición general a destacar es que los pueblos y las comunidades indígenas adquieren un carácter jurídico de personas morales de derecho público y con ello todos los efectos que se deriven en sus relaciones con los gobiernos estatal y municipal, así como terceras personas.

En esa perspectiva social de avance, esta Ley recoge varios aportes de la ciencia y las teorías jurídicas y sociológicas más cercanas a este afán del hombre por la libertad y por la justicia.

Como medida estratégica, el gobierno del estado y el cuerpo legislativo para su aparición definieron los conceptos y términos más conflictivos o en el debate, tales como autonomía, territorio indígena, derechos individuales, derechos sociales, sistemas normativos internos, autoridades municipales y autoridades comunitarias. Se trata de crear un sistema de señales simbólicas para que pueda tenderse un puente de entendimiento entre el ser y el deber ser, entre las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas y las necesidades y expectativas del estado mexicano como legítimo conductor de la vida de la nación.

De manera específica, dados los niveles de conciencia étnica, histórica y cultural de los pueblos, se les reconoce el derecho para determinar libremente su existencia como grupo social y culturalmente diferenciados y se plantea a la Procuraduría para la Defensa del Indígena y al Poder Judicial del Estado, la facultad de aplicar esta ley, a fin de asegurar el respeto de sus derechos como se demanda en la iniciativa propuesta por la COCOPA, para todas las étnicas de la República Mexicana.

Entre otras importantes consideraciones, se pena el delito de etnocidio y la discriminación en cualquier parte de sus formas, se establece el derecho de desarrollar la identidad propia, vitalizar y desarrollar sus expresiones culturales a través de la educación formal e informal, se hacen esfuerzos de garantizar a los niños y niñas indígenas su acceso a la educación básica, formal, bilingüe e intercultural.

Para reforzar lo anterior, se ha creado la primera normal indígena para la formación de profesores de educación preescolar y primaria y el Centro de Lenguas Indígenas, dependiente del Instituto de Educación Pública Estatal.

También funcionan Telecobao's, que permiten ampliar la cobertura de educación media superior en las comunidades indígenas.

Por otro lado, como lo demanda la iniciativa propuesta por el titular del Ejecutivo de la Nación, en la Ley Indígena de Oaxaca, ya se reconocen las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas derivadas de sus tradiciones ancestrales, como reguladoras de la relación familiar y de la vida civil, dentro de las competencias expresamente señaladas en la propia ley, de la organización de la vida comunitaria y para la preservación y solución de conflictos al interior de cada comunidad siempre y cuando no contravengan la Constitución política del Estado, las leyes estatales vigentes ni vulneren los derechos humanos ni de terceros.

Desde luego se reconoce el derecho de las personas indígenas a presentar y a ejercitar su defensa en su propia lengua, así como gozar del apoyo del Estado por medio de la

Procuraduría para la Defensa del Indígena cuyos defensores de oficio tienen presencia en las ocho regiones del estado y a través de los cuales se vigila la eficaz protección de sus derechos; se revaloriza la dignidad de la mujer indígena y de la familia y se conviene la intervención de instituciones gubernamentales para la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, establece el compromiso del Estado para eliminar la desigualdad y toda forma de discriminación económica, social y cultural, procurando nuevas formas de relación entre las comunidades indígenas y entre estas y la sociedad global, así como incluir en forma expresa en sus programas y planes de desarrollo los acuerdos que establece con los pueblos, comunidades y asociaciones de municipios indígenas con estricto apego a su autonomía.

La ley tiene un amplio respaldo real en las políticas y programas sectoriales y prioritarios, como lo muestra la Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño recientemente creada por el actual gobierno del estado; también se opera el programa de Desarrollo Integral Comunitario mediante el cual niñas y niños indígenas en edad escolar reciben todos los días a través de cocinas comunitarias, desayuno y comida para mejorar su situación nutricional.

En materia de Registro Civil existen oficialías itinerantes que hacen su trabajo directamente en los pueblos y comunidades indígenas.

En lo que se refiere a la autonomía municipal, se establece que los ayuntamientos oyendo el parecer de los pueblos y comunidades indígenas, dictarán medidas legales para que los recursos económicos se distribuyan con un sentido de equidad entre las comunidades que integran sus municipios. Así mismo los ayuntamientos de municipio no indígenas de los que forman parte una o varias comunidades indígenas, promoverán la creación de regidurías de asuntos indígenas.

Los nuevos retos:

Si bien es cierto que en Oaxaca se han dado importantes avances en el pleno legislativo en materia indígena, también existen nuevos retos como salvar la distancia que hay entre el deber ser de la ley y el ser de la realidad.

Es necesario profundizar su conocimiento y vigencia para que se conviertan en sus baluartes para la lucha de valores fundamentales y en este caso de sus valores que son también de los oaxaqueños y de la nación; avanzar en lo social representa dignificar la vida de los pueblos y comunidades indígenas abriéndoles mayores espacios de participación en la conformación de la sociedad nacional, es decir, reivindicar el derecho de los indígenas a la diferencia social y cultural; también seguir luchando por una auténtica educación bilingüe e intercultural, acorde a sus características sociolingüísticas; avanzar en lo cultural significa fortalecer sus expresiones artísticas, culturales, lenguas, costumbres, tradiciones, valores, símbolos y cosmovisión; avanzar en lo político es asegurar la representación indígena en los diversos órganos de toma de decisión de nuestra sociedad para que estos, de manera directa y sin intermediarios, planteen sus demandas, expresen sus expectativas y tengan plena participación en la definición del rumbo que tome la vida nacional, sobre todo se debe consolidar el respeto de sus derechos humanos a Estado y la sociedad civil. Este esfuerzo da sentido a una de las batallas legítimas en el mundo contemporáneo y alivia las tensiones que la desigualdad y la diferenciación social y política generan.

El gobierno del estado ha planteado una transición seria y responsable de una política indigenista a una política indígena transformadora e incluyente que no sólo recoja las demandas y aspiraciones más sentidas de los pueblos indígenas sino que se traduzca en acciones concretas de gobierno a través de un verdadero programa de desarrollo integral que año con año atienda a más municipios indígenas marginados.

Por lo anterior, mi propuesta concreta es que el Honorable Congreso de la Unión tome muy en cuenta en lo que resulte aplicable el contenido de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca para enriquecer el contenido de la iniciativa de ley recientemente enviada por el Titular del Ejecutivo. La idea fundamental es articular los esfuerzos institucionales con verdadera voluntad política y compromiso social para que los tres órdenes de gobierno asuman la deuda y el desafío de superar la injusta marginación y pobreza en la que los pueblos y comunidades indígenas se han debatido durante siglos.

DERECHOS A LA AUTONOMÍA.

Lic. Dolores González Sarabia*

Quiero hablar un poco el derecho de la autonomía de los pueblos indios.

Como Decía Margarito al iniciar su ponencia, yo creo que ahora estamos y tenemos que reconocer en este debate porque el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de definir en los próximos meses la forma en que habrán de plasmarse los derechos indígenas en nuestro marco jurídico nacional.

Pero esta tarea parlamentaria debe reconocerse como un proceso histórico de elaboración y movilización de los pueblos indígenas en la construcción y significación de sus propuestas para llevarlas al terreno legislativo y reivindicar sus derechos fundamentales. Por eso esta tarea parlamentaria requiere considerar dos aspectos: Por un lado efectivamente como se ha venido haciendo a lo largo de la mañana un profundo examen de los contenidos jurídicos que responden a la compleja problemática de los pueblos indios.

Pero por otro considera también la trayectoria de la iniciativa de la Ley COCOPA, que es materia central de esta discusión. y en ese sentido es necesario también plantearse y recordar como a pesar de una larga lucha por los derechos indígenas, el alzamiento

* Servicios para la Paz A.C.

Zapatista de 94 descubrió casi por primera vez a los ojos de todos, la profunda injusticia y exclusión en que han vivido los pueblos indígenas durante siglos, los niveles de miseria, violencia estructural y política, discriminación cultural, quedaron expuestos en ese momento como explicación de las causas del conflicto armado, provocando un movimiento de conciencia nacional que asumió como intolerable esa realidad y exigió corregirla.

En este contexto diversos movimientos indígenas desarrollaron un proceso intenso de discusión, articulación, que logró plantear los consensos básicos sobre las necesidades y contenido de la agenda indígena, cuya expresión más significativa se da en el marco de los diálogos de paz que culmina con los acuerdos de San Andrés y posteriormente con la iniciativa de ley que elaboró la COCOPA. Creo que esto es importante porque la Ley COCOPA, los Acuerdos de San Andrés, contienen una legitimidad construida a lo largo de muchos años por un movimiento indígena que logró construir una agenda conjunta, un proyecto común y que eso tiene un valor muy importante y a ser considerado por los legisladores.

Y por otro lado en relación a los contenidos, me gustaría decir que-si bien los acuerdos consideran de manera integral los diferentes aspectos de la problemática indígena, el proyecto localiza en la esfera de las reivindicaciones políticas, la vía para trascender la exclusión de los pueblos indios, asumiendo en principio dos premisas básicas a las que se han referido aquí varios de los ponentes anteriores:

uno, el reconocimiento de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indios.

Segundo.- el reconocimiento de que los pueblos indígenas son sujetos de derecho a la libre determinación y como expresión de ésta a la autonomía que se convierte en el elemento sustantivo de la nueva relación que se establece como propósito fundamental de los Acuerdos de San Andrés y para valorar su sentido de implicaciones es necesario recuperar lo que quiere decir la autonomía. Yo sé que sobre esto hay muchas definiciones, pero me gustaría aportar algunas ideas:

La autonomía se refiere al derecho de los pueblos para seleccionar sus valores, medios y fines de acuerdo al orden jurídico pero también de acuerdo a su cultura, su modo de vida e intereses.

Los pueblos indígenas constituyen identidades y comunidades socioculturales específicas y diferentes. De hecho la reivindicación de los derechos indígenas se ha convertido durante los últimos años, en un movimiento emblemático del reconocimiento de la diversidad... sobre esto hay muchas definiciones y a mi me gustaría aportar nuevas ideas.

La autonomía se refiere al derecho de los pueblos para seleccionar sus valores, medios y fines, de acuerdo al orden jurídico, pero también de acuerdo a su cultura, su modo de vida e interés. Los pueblos indígenas constituyen identidades y comunidades socioculturales específicas y diferentes.

De hecho, la reivindicación de los derechos indígenas se ha convertido, durante los últimos años, en un movimiento emblemático del reconocimiento de la diversidad en el país.

En este sentido cabe recordar las palabras de Díaz Polanco cuando señala que el régimen de autonomía responde a la necesidad de buscar formas de integración política del Estado Nacional que estén basadas en la coordinación y no en la subordinación de sus colectividades parciales.

La autonomía no busca satisfacer los intereses y aspiraciones de las comunidades parciales solamente, sino que paralelamente pretende asegurar una adecuada integración de la sociedad nacional.

Así pues, la autonomía es la búsqueda de la máxima congruencia entre la pluralidad y la unidad en la integración política.

La autonomía es un tema que se discute en todo el mundo y para diferentes realidades. Hoy el mundo vive una tensión muy fuerte entre la globalización y la defensa de las identidades culturales distintas. Por eso se han convertido en un tema de este siglo, y creo que es importante recuperar lo que se ha dicho en muchas declaraciones internacionales al respecto.

Se definen ellas, en varias de ellas, a la autonomía como el derecho y la capacidad de las colectividades locales para orientar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia bajo su propia responsabilidad y en función del interés local. Es decir, las entidades autónomas se configuran como poderes públicos del Estado Nacional, sin contraponerse a su soberanía ni erigirse como rechazo a su dominio sobre determinado territorio, pues reconocen la supremacía del imperativo nacional.

Las facultades y competencias de la autonomía local están establecidas -o deben estar establecidas- en la legislación general y se dirigen a la gestión de los intereses públicos de las colectividades correspondientes. Su límite máximo se determina por los intereses que no lo son propios y su límite mínimo esta definido por su ámbito de competencia garantizado institucional y legalmente.

La autonomía es un derecho colectivo, integrador y democrático que permite a los individuos y a las comunidades identificarse con el poder público constituido garantizando el derecho efectivo y real de los derechos de participación y representación, haciendo posible su influencia real en el proceso de toma de decisiones sobre sus formas de convivencia, condiciones de vida y trabajo y de su entorno.

Permite una aplicación más transparente y eficaz de los recursos porque es en este ámbito donde las acciones públicas pueden ser llevadas a un nivel de desagregación para ser comprendido, evaluado y fiscalizado por comunidades que comparten territorio, visión y proyecto de futuro.

La autonomía representa, entonces, una lógica política que articula la afirmación de nuestras identidades culturales con la construcción de una ciudadanía que en el ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales sea capaz de vincularse, desde sus propios valores y aspiraciones, en los procesos nacionales de transformación que le son necesarios para una vida digna.

La autonomía requiere condiciones para hacerse realidad. 1. El reconocimiento en el marco jurídico constitucional de este derecho y para el caso de la ley que hoy se discute como el derecho de los pueblos indígenas al ejercicio de la autonomía en la comunidad, a partir de reconocer a ésta como entidad de derecho público en municipios y en la facultad de estos para asociarse regionalmente cuando reconozcan su pertenencia al pueblo indígena.

Determinar un campo de competencia para las entidades autónomas quiere decir que no basta con reconocer solamente lo que ya se hace, que sería bastante, pero sí fortalecer estas entidades autónomas, delimitando un campo de materias, atribuciones, facultades, políticas, administrativas, económicas, sociales, culturales, educativas, judiciales de manejo de recursos y protección de la naturaleza. Es decir, una verdadera transferencia de funciones y capacidades de poder público hacia las colectividades indígenas, reconociéndoles para ello una jurisdicción territorial.

Jurisdicción y facultad normativa. Reconociendo sus sistemas normativos para dirimir sus controversias internas y la potestad para expedir ordenamientos jurídicos de carácter obligatorio en su ámbito territorial, en tanto no sean contrarios a las garantías constitucionales y los derechos humanos.

Auto desarrollo y transferencia de recursos. Disposición de recursos suficientes y la libertad para aplicarlos sin más limitaciones que las que imponga la ley en función de sus propias estrategias de desarrollo en los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera.

Acceso de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos que correspondan al dominio de la nación.

Autogobierno. Integración de los órganos representativos bajo los mecanismos que los pueblos decidan y la libertad para organizar las tareas de gobierno bajo las formas que consideren más adecuadas, de acuerdo a sus prácticas tradicionales. Es decir la conformidad de entidades autónomas de los pueblos indios, más allá del reconocimiento y respeto de sus formas de organización social, económica, política, implica una redistribución de atribuciones de poder, competencia y recursos públicos en su ámbito territorial que les permita contar con los recursos y capacidades suficientes para superar efectivamente sus situación de pobreza y marginación.

Los componentes de la autonomía que se plantean en la iniciativa, Reformas Constitucionales de la Ley COCOPA se orientan en este sentido y se establecen en el texto del artículo 4°. Cuando se señala que la autonomía será para decidir sus formas internas de convivencia, organización, aplicación de sistemas normativos, elección de autoridades de ejercicio de formas de gobierno propias, fortalecer su participación y representación política, de acuerdo a la especificidad cultural de cada pueblo, acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad, adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.

Igualmente , se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos que hagan valer su autonomía, reconociendo a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, dando facultad de asociación entre comunidades y municipios para coordinar sus acciones.

Transferencia coordinada y ordenada de recursos para que ellos mismos administren los fondos que se les asignen y que las legislaturas estatales determinen las funciones y facultades que puedan ser transferidas. Es decir, la Ley COCOPA atiende a esta posible concreción y viabilidad de la autonomía en el sentido de que la autonomía se convierta efectivamente en un instrumento poderoso de cambio para los pueblos indios.

La construcción de una nueva relación con los pueblos indios pasa, efectivamente, por lo que hoy discutimos. Un nuevo marco jurídico que reforme la Constitución y legislaciones secundarias de acuerdo a la iniciativa de la Ley COCOPA y el convenio 169, pero también por una reforma del Estado que impulse una redistribución del poder público hacia los ámbitos locales a fin de dar viabilidad a las diversas modalidades de autonomía indígena y el rediseño de las instituciones a fin de garantizar la participación de los pueblos indígenas, la integralidad de las acciones públicas y capacidad de respuesta frente a la problemática que vive la población india del país. Pero sobre todo, asumir el carácter pluricultural de la nación, desterrando mentalidades, actitudes y comportamientos discriminatorios y desarrollando una cultura de pluralidad y tolerancia.

Termino diciendo que el reto está en transformar las relaciones políticas y sociales hacia un planteamiento en el que el poder esté distribuido de tal modo que cada individuo y cada colectivo puede satisfacer sus necesidades para un desarrollo pleno.

DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE OAXACA.

Baruc Alavez Mendoza *

Para hacer estas reflexiones yo también arranqué de la cita de Juárez. De hecho, yo creo que los oaxaqueños, cuando pensamos en cuestiones que tienen que ver con el pueblo, pensamos primero en Juárez.

Entonces yo también—y esperando no ser repetitivo, sino al contrario, complementario—me permito decirles que en esa cita del 2 de julio de 1848, cuando Benito Juárez era Gobernador del Estado, expuso que desde el establecimiento del sistema federal los pueblos del estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismos a los funcionarios

* Diputado del PRI en el Congreso Local de Oaxaca.

que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la paz y de la administración de los fondos comunales.

Esta costumbre benéfica robustecida por el sistema federativo, otorgándose a los pueblos la facultad de elegir a los miembros de sus ayuntamientos y repúblicas y reglamentándose las obligaciones y derechos de estas corporaciones.

Por este motivo, el sistema republicano, representativo, popular, fue bien recibido por los pueblos del estado y el sistema central que abolió aquellas corporaciones causó un gran disgusto universal que contribuyó a la caída del sistema que nos fue tan fatal. Sigo citando, por supuesto a Juárez.

Restablecida la federación, los pueblos no sólo han recobrado sus ayuntamientos —y esta es la parte a la que citaba el licenciado Castresana— sino el derecho de elegirlos conforme a sus antiguas costumbres.

Esta cita del Benemérito de las Américas nos muestra que el tema sobre los derechos indígenas tiene ciertamente muchos años en el centro de la discusión. Pero además tiene el valor de arrojar una luz sobre el espíritu real del federalismo que establece sus bases no en el control del centro sobre los pueblos de la periferia, ni mucho menos el sometimiento o la renuncia a las particularidades regionales, no sólo de carácter sociológico, incluso normativas, a la homogeneidad de un gobierno nacional, o en términos jurídicos, al principio de la generalidad de la ley.

El Federalismo, para Juárez, tiene como fundamento precisamente la otra punta del razonamiento. Esto es, en la posibilidad de que los estados y los municipios —y hoy podríamos agregar— los pueblos y las comunidades no sólo conserven, sino fortalezcan su capacidad de autogestión y autogobierno, cediendo sólo parte de su soberanía al Gobierno Federal, sin demérito de ejercer su autonomía.

Oaxaca han conservado esta visión. Desde siempre las autoridades municipales de sus ayuntamientos indígenas han sido, en la realidad, electos bajo el sistema de usos y costumbres y sólo para guardar las formalidades constitucionales durante muchos años del siglo pasado se disfrazó bajo el ropaje de los procesos electorales de carácter occidental, lo que ya había pasado por la voluntad del pueblo en asambleas y lo que todos conocemos.

La primera gran reforma fue reconocer en nuestra Constitución la existencia de una realidad distinta, pluriétnica y pluricultural y reconocer asimismo, como validar las elecciones realizadas bajo el esquema de las tradiciones democráticas de los pueblos.

Esta reforma constitucional fue posteriormente aterrizada en el capítulo cuarto del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, que estableció los principios y las reformas para declarar la validez de dichas elecciones bajo las normas del derecho consuetudinario .

Entre esos principios se instituyó la no participación de los partidos políticos en la postulación que las de candidatos a los cargos de concejales, la duración del ejercicio del cargo por el tiempo que las costumbres y las tradiciones lo establecieran, siempre que no fuesen superiores a 3 años, la libertad en el procedimiento de elección, el establecimiento de las fechas de celebración de las asambleas comunitarias a criterio de la propia comunidad, así como su organización y desarrollo.

La experiencia que hemos tenido me parece que es preferible también exponerla a la luz de los resultados concretos.

Primero: dos procesos electorales. El primero renovó 412 ayuntamientos, presentándose conflictos por no aceptación de los resultados en menos de 10 municipios y por la integración de concejales de representación proporcional en cerca de 60.

Y el segundo proceso renovó 418 ayuntamientos, presentándose conflictos por no aceptación de resultados en aproximadamente 14 municipios.

En menos de 30 hubo conflictos por la integración de los concejales de representación proporcional. Hubo 3 elecciones extraordinarias, una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún estando equivocados, por no aceptación de resultados en aproximadamente 14 municipios. En menos de 30 hubo conflictos por la integración de los concejales de representación proporcional. Hubo 3 elecciones extraordinarias. Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún estando equivocados, en este caso el Tribunal o la resolución del Tribunal. Histórica por ser la primera que resolvió una controversia de derecho consuetudinario, amén del reducido gasto que esto ocasiona.

El segundo gran capítulo legislativo en materia indígena fue la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el año de 1998. Esta Ley no otorga derechos a los pueblos

TERRITORIOS INDÍGENAS

Guillermo Morales Hernández*

He hecho el saludo en náhuatl a mis hermanos indígenas de diferentes estados, pero seguro de que los no indígenas que son representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se interesaron a estar aquí con nosotros no me iban a entender.

El Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Oaxaca que me honro en presidir nos permitimos realizar una ponencia que esperamos contribuya a ese gran trabajo que se está realizando en este lugar. El tema que escogimos es Territorios Indígenas.

En una sociedad como la nuestra, donde la relación social entre los pueblos indígenas con el resto de la sociedad es abrumadoramente desventajosa para los primeros, abordar el tema

* Consejo Indígena de Oaxaca.

relacionado con los territorios indígenas resulta por demás delicado, complejo y hasta conflictivo.

Delicado, porque existen normas legales sobre este asunto. Aunque los pueblos indígenas como propietarios originales del territorio nacional estuvieron al margen de las instancias de deliberación que tomaron decisiones para la elaboración y la aprobación de las leyes agrarias en particular, así como de las demás leyes y normas vigentes en nuestro país.

Complejo, porque las mismas leyes y los intereses económicos además de propiciar la extinción de los derechos primordiales de los pueblos indígenas sobre la tierra, los territorios y sus recursos naturales fomentaron prácticas de desposesión, expropiación, confiscación y dominación de nuestras tierras, nuestros territorios y recursos.

Los desplazamientos y la reubicación forzada de pueblos indígenas hacia lugares inhóspitos y alejados de sus raíces, etcétera, además de la sobreposición de límites territoriales que mantienen en conflicto a muchos pueblos hermanos.

Conflictivo, porque necesariamente tenemos que referirnos al territorio nacional, donde convivimos no solo los descendientes de quienes fueron propietarios originarios de lo que es ahora México. Ahí están como ejemplo los hermanos kikapú, de Coahuila, que emigraron a nuestro territorio en el siglo XIX. Los hijos de los indígenas guatemaltecos, que en el siglo pasado se refugiaron en nuestro país u otros pueblos étnicos, como los habitantes de Chipilo. Además dentro del territorio mexicano ¿qué podremos decir acerca de los derechos territoriales de nuestros hermanos indígenas de Chiapas?

Si esta entidad no figura el acta constitutiva de la federación firmada en 1824. Esta es la realidad de Oaxaca y de todo el país, donde los propietarios originales del territorio se debaten en la pobreza extrema, que lacera sus derechos más elementales. Situación que ha sido bandera de grupos y partidos políticos, así como la justificación de instituciones y burocracias que en vez de coadyuvar a la solución de ancestrales injusticias han fomentado el paternalismo y la dependencia, negando la participación directa de los indígenas en

cuanto a las decisiones relacionadas con la posición, uso y usufructo de sus territorios y los recursos naturales.

Quizás porque los políticos y los servidores públicos ignoran que el territorio es la base natural de nuestra nacionalidad mexicana y la expresión pura de la unidad indisoluble tierra-hombre. Y que nuestro país sin los indígenas dejaría de ser México.

México ha tenido el mérito de ser pionero en materia de indigenismo. Sin embargo, nuestra realidad, los avances tecnológicos, la globalización, los actuales momentos políticos, en una palabra, la modernización, dentro del contexto de justicia y dignidad exigen como una de las prioridades fundamentales la preservación de los territorios de los pueblos indígenas como base de su desarrollo material y cultural, reformando las bases jurídicas de la legislación agraria de la nación, tomando en cuenta las normas tradicionales aplicables a las diversas formas de tenencia, posesión y usufructo.

Para saldar en parte la deuda histórica que México tiene con los pueblos progenitores de su entidad, emitimos las siguientes propuestas para la reforma constitucional.

1. Establecimiento de un sistema de identificación, registro y control público de la tenencia de la tierra y posesión territorial de las comunidades indígenas en todas sus modalidades, operado conjuntamente por las instancias competentes y una representación de los Consejos Indígenas reconocidos plenamente por las comunidades involucradas.

2. Resolver de inmediato los conflictos agrarios que persisten en áreas indígenas a través de la conciliación agraria, auspiciada por los Consejos Indígenas como instancias consultivas de opinión sabida en los usos y las costumbres de las comunidades involucradas.

En los casos de enajenación de territorios indígenas debe persistir la obligación del Estado de otorgar la contraprestación e indemnización en beneficio de quienes tengan la posesión territorial. Esta práctica se da en Oaxaca. Sin embargo carece de recursos para hacerla más eficiente.

3. Revisar el marco jurídico para crear mecanismos institucionales que aseguren la preservación de los recursos naturales de las comunidades indígenas, es decir, para evitar la contaminación de nuestros ríos, lagos y mares, la explotación inmoderada de nuestros montes, la caza y pesca indiscriminada, la explotación irracional del subsuelo, en general la degradación de suelos y la destrucción de ecosistemas.

4. De igual forma establecer bases jurídicas para garantizar que las comunidades indígenas como propietarios originales tengan exclusividad en la explotación y usufructo de sus recursos naturales y el entorno eco lógico. Asimismo que, en su caso, utilicen la vía de la asociación con otras empresas, cuando así lo decidan ellas mismas.

5. Que sean consultadas nuestras comunidades sobre proyectos que puedan afectar directa o indirectamente sus territorios, mantos acuíferos, etcétera, y tengan un porcentaje de participación sobre los recursos que generen, por ejemplo, las carreteras de cuota, aeropuertos y el petróleo.

6. Propiciar el rescate, desarrollo y difusión de los conocimientos indígenas, las formas de trabajo y la productividad indígena para su aprovechamiento en la explotación productiva, sustentable y equilibrada de los recursos naturales.

Los indígenas ya no queremos ser solamente objetos del desarrollo ni espectadores del progreso y la modernización del país. Contamos con la enorme riqueza de nuestros territorios, la inmensa variedad de nuestros recursos naturales, la presencia milenaria de nuestras culturas y sobre todo con la fortaleza espiritual de nuestra gente.

Hermanos indígenas y no indígenas:

El tema indígena está de moda y ha sido bandera de muchos, que les ha traído beneficio a los no indígenas y hasta a los extranjeros.

Con esa desconfianza acudimos a congresos, a foros como en este caso. Sin embargo, tenemos la esperanza de que la civilidad y madurez de la sociedad vayan avanzando y empezemos con gran seriedad a retomar la problemática que nos lacera a los indígenas.

Con esa situación me permito manifestar dos cuestiones, y esto va directamente a los Legisladores: los indígenas no nada más es el Ejército Zapatista ni está en Chiapas. Tampoco son los que vienen en los plantones o en las marchas. Los indígenas verdaderos están allí en el zurco trabajando. Los indígenas están haciendo el cargo de topil, de mayordomo, haciendo el tequio. Esos son los indígenas en su mayoría estamos conscientes de todo lo que se da y no estamos durmiendo, pero tampoco nos hemos levantado. Por ello quiero que los que estamos aquí tomemos con seriedad porque para los indígenas y para todos los que estamos involucrados en luchar en este sentido debemos entender que pobreza, exclusión, es sinónimo de violencia, pobreza, exclusión es sinónimo de rebelión. Por ello el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Oaxaca invita a todos los representantes indígenas del país a luchar por un verdadero desarrollo con dignidad y justicia.

EL DERECHO A LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN

Saúl Vicente Vázquez*

Hermanas y hermanos, reciban un saludo de sus hermanos los indígenas Zapotecas que habitamos el territorio del istmo en Juchitán.

En los últimos años los pueblos indígenas hemos vivido momentos de gran intensidad política, teniendo como momento cúspide la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el Ejecutivo Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional signados en 1996.

* Derechos Humanos del CEN del PRD.

En la mesa de diálogo que se instaló para este fin, se lograron importantes acuerdos los cuales constituyeron un avance considerable para el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas y que como de todos es sabido, el gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo incumplió. Sin embargo ha quedado en el ambiente la impresión de que estos acuerdos constituyen la demanda máxima del movimiento indígena cuando en la mesa del diálogo expresamos la necesidad de un mayor reconocimiento de derechos. Pareciera que se ha olvidado que se aceptó la firma de estos acuerdos en aras de posibilitar el camino de la paz con justicia y dignidad, lo cual no significó la claudicación en la lucha por el reconocimiento integral de los derechos de nuestros pueblos indígenas. De esta voluntad de diálogo y búsqueda de acuerdos, algunos sectores de la sociedad que mantienen una política integracionista hacia los pueblos indígenas, no solamente quisieran desconocer que los Acuerdos de San Andrés son un primer piso de reconocimiento de nuestros derechos, sino además quisieran disminuir estos derechos, como lo pretendió hacer Ernesto Zedillo o como pretende al Partido Acción Nacional con las observaciones hechas recientemente a la iniciativa de ley que la Comisión de Concordia y Pacificación elaboró a partir de los acuerdos de San Andrés y que fue aceptada por el Ejército Zapatista y por el movimiento indígena.

Por esta razón me parece importante que en este recinto parlamentario se recuerde a los actuales legisladores, que los Acuerdos de San Andrés constituyen la demanda mínima del movimiento indígena nacional en la búsqueda por el reconocimiento de los derechos plenos de nuestros pueblos indígenas; que aún quedan pendientes diferentes derechos que el gobierno federal no quiso aceptar y que en aras de llegar a un acuerdo, el Ejército Zapatista y el movimiento indígena, aceptamos como un primer piso de derechos que habrá de contener la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que los derechos que quedan aún pendientes, son el siguiente paso de nuestra lucha en la construcción de una patria multicultural y pluriétnica.

A continuación señalaré brevemente algunos puntos de la agenda que han quedado fuera de la Ley COCOPA, solicitándole al Congreso de la Unión si inclusión dentro de la reforma

constitucional que habrá de realizarse por esta legislatura, dejando claro que no se trata de abrir los Acuerdos de San Andrés para disminuirlos por debajo de estos, nada.

Nuestra lucha tiene como demanda central el derecho a la libre determinación entendida como el ejercicio de la autonomía de nuestros pueblos que va más allá de la posibilidad de asociación de los municipios como lo establece la ley mencionada. Nuestra demanda es por el reconocimiento de la autonomía comunal, municipal, regional en donde se reconozcan a nuestras autoridades, nuestras formas propias de gobierno y nuestras normas jurídicas, que estos niveles de gobierno sean parte constitutiva del estado nacional.

Junto a la demanda del reconocimiento de la autonomía en sus deferentes niveles, queda pendiente el reconocimiento de las normas jurídicas vigentes en nuestros pueblos indígenas, que se reconozca el derecho a la coexistencia de un derecho nacional con los derechos colectivos de nuestros pueblos.

Con el reconocimiento de los gobiernos propios se posibilita tener plena jurisdicción sobre el territorio y con ello la auténtica autonomía y libre determinación, donde nuestros pueblos decidan sobre sus propios asuntos disfruten de garantías para el desarrollo de nuestras culturas, donde la educación se aplique en nuestras lenguas y desde nuestra propia visión del mundo, donde tomemos parte para el desarrollo económico y social y participemos auténticamente en la vida tanto local como nacional, lo cual implica reformas constitucionales a los artículos 3, 43, 73, 115 y 116 de la Constitución.

Otro de los aspectos centrales para la existencia de nuestros pueblos indígenas, es el territorio, componente esencial de nuestra vida espiritual y cultural considerado éste como la totalidad del hábitat en donde se asiente un pueblo indígena, como fuente de nuestra identidad y no parte de nuestra propiedad individual, como el espacio donde nuestros pueblos pueden libremente practicar y desarrollar su cultura sin que nadie la interfiera ni prohíba.

Por la importancia que el territorio nacional tiene, es que debe de reconocerse nuestro derecho de propiedad y posesión colectivas sobre las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado nuestros pueblos indígenas.

Junto con este reconocimiento es necesario que se realice una reforma que recupere en el artículo 27 de la Constitución, el espíritu de lucha del General Emiliano Zapata, y se incorpore en su ley reglamentaria, las normas establecidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Queda pendiente además el acceso de nuestros pueblos a los medios de comunicación, el reconocimiento de nuestras mujeres indígenas en su triple condición que han sido como mujer, como marginadas y pobres y como indígenas, de tal forma que se garantice una asignación especial administrada y manejada por ellas y su plena participación en todos los ámbitos de la autonomía.

Asegurar el derecho de nuestros pueblos a la protección de nuestros sitios sagrados y centros ceremoniales, el uso y protección de plantas y animales considerados sagrados o medicinales y el reconocimiento de conocimiento indígena como valor académico y espiritual lo cual además de reformas constitucionales implica, y hago aquí la propuesta a los legisladores, la revisión de convenios internacionales como el Convenio Sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo Sobre el Derecho de Propiedad Intelectual.

Con la aprobación de la iniciativa de la COCOPA que otorga derechos mínimos como hemos podido observar, quedan aún demandas pendientes fundamentales de los pueblos indígenas.

No obstante, es para nuestros pueblos indígenas necesaria la aprobación de la ley, lo que permitía la construcción jurídica de un México plural y un marco legal para la transformación de las instituciones que atiendan a los pueblos indígenas desde nuestra propia perspectiva y desaparezca cualquier forma y tentación neoindigenista que ha demostrado su inviabilidad histórica.

Recordemos además que existe una recomendación al gobierno de México solicitando la implementación de los Acuerdos de San Andrés emitida por la señora Ericka Irene Daes, Director Coordinador del Grupo de Trabajo Sobre Poblaciones Indígenas de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el documento E/CN.4/SUB.2/2000/CRP.1 durante su visita a nuestro país el año pasado y que los Acuerdos de San Andrés se dieron en el marco de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República en el año de 1991 y que ahora cumple sus diez años.

Nuevamente propongo a los legisladores del Senado, asuman su responsabilidad histórica con nuestros pueblos y ratifiquen nuevamente este Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo.

Por otra parte dado que los resultados de los Acuerdos de San Andrés son de orden constitucional, las negociaciones entre el Ejército Zapatista y la federación tendrían que llevarse a cabo en el Congreso de la Unión para abordar justamente la reforma constitucional, es decir, la aprobación integral de la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA y presentada ahora por el Ejecutivo Federal a este Congreso de la Unión.

Asimismo las negociaciones sobre el entorno político particular del estado de Chiapas y otras demandas de los rebeldes zapatistas, deben realizarse con el gobierno federal y con el gobierno del estado de Chiapas hasta concluir con un acuerdo general completo que garantice la paz con justicia y dignidad. Esto debe darse en el marco del cumplimiento de las tres señales demandadas por el Ejército Zapatista.

Además de lo señalado anteriormente, propongo que al mismo tiempo que se aprueba la iniciativa de la COCOPA se inicia la revisión y los cambios en los ordenamientos jurídicos que tienen relación con cada uno de los artículos de dicha iniciativa, así' como la formulación de la ley reglamentaria del Artículo 4to . constitucional, de tal forma que se tengan las condiciones mínimas de su aplicación y no se repita la historia del actual Artículo 4to. que después de varios años se ha hecho imposible su aplicación.

Esta legislatura tiene ante sí la responsabilidad histórica de crear las condiciones políticas y jurídicas para crear una auténtica transición democrática donde los pueblos indios y sus organizaciones participemos activamente en este proceso y lograr el reconocimiento de nuestros derechos indígenas contenidas en esta ley, contribuir en la pacificación de Chiapas y sentar las condiciones necesarias para el desarrollo y la participación política sin discriminación de los pueblos indígenas del país, recordando a los propios legisladores que el principio de la no discriminación es fundamental en las normas de derechos humanos y aparece, entre otros instrumentos, internacionales, en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2 y 7; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2 párrafo 1; en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 2 párrafo 2 y en la Convención Internacional Sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Aprovecho el viaje por último, para decirles y proponer nuevamente a todos ustedes, que los hoy participantes en este espacio de reflexión y diálogo y los organizadores de este evento, nos convirtamos desde este momento en convocantes de próximos foros que se realicen en todo el país hasta antes que inicie el próximo período de sesiones para hacer llegar todas las propuestas que surjan de nuestros hermanos y hacerlas llegar a este Congreso de la Unión.

Esperamos que cada uno de estos actos cumpla con la responsabilidad que le corresponde y el compromiso que han asumido. Muchas gracias.

AUTONOMÍA INDÍGENA: CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA EL ESTADO MODERNO MEXICANO.

Vicente Marcial Cerqueda*

Abordaré el tema de autonomía Indígena, como una condición indispensable para la modernización del estado mexicano en este nuevo siglo que inicia; tomando en cuenta algunas ideas que definen al estado como un pacto entre individuos que se unen libremente, en una voluntad general. Asimismo, haré una somera descripción de la constitución del estado mexicano, producto de una imagen creada por un grupo de criollos ilustrados, sin la inclusión de los pueblos originarios de México. Finalmente, hablaré de los últimos acontecimientos que permiten vislumbrar la modernización al estado mexicano a través del reconocimiento de su composición pluricultural y de la autonomía de los pueblos indígenas de México.

Concepto de Estado-nación

El estado es invento reciente de la historia de occidente, y es concebido como un poder político, una unidad de mando, una estructura de autoridad permanente que se crea para garantizar el orden al interior de una sociedad y la defensa frente al exterior (1).

Las revoluciones democráticas de occidente, en los siglos XVIII y XIX configuraron de manera más sólida su concepto de Estado-nación, es concebida como una unión de individuos autónomos que se asocian libremente que convienen hacer suya una voluntad general, un pacto, un contrato social. Para su cabal composición el estado requiere que los individuos se despojen de sus cualidades específicas, no importan sus rasgos físicos y biológicos, color, tamaño, sexo; ni sus características étnicas y culturales, tampoco su procedencia social, todos comparten una sola cualidad, la de ser ciudadanos.

Además, el modelo de Estado-nación impone un solo orden a toda la diversidad que lo compone, por sobre la heterogeneidad realmente existente impone una tendencia hacia la

* Centro de Investigación y Desarrollo Binnizá A.C.

homogeneidad de toda la sociedad, a través de una legislación homogénea, de una administración central como poder único por sobre todo lo diferente.

Si se impone la homogeneización por sobre la diversidad de la sociedad existente ¿de dónde sale esa visión única? Los Estados-nación modernos surgen del programa que deciden impulsar un sector social que se propone el cambio del sistema feudal arcaico para formar una nueva con una visión única, surge de la imposición de intereses de un sector emergente. El establecimiento del Estado-nación moderno consolida la presencia y el dominio político de un sector de la sociedad.

El surgimiento del Estado-nación corresponde a un modelo social y económico históricamente determinado, corresponde a las necesidades de expansión del capitalismo moderno; que requiere romper con la fragmentación del Estado feudal y monárquico para impulsar la homogenización de todo. El modelo capitalista necesita para su establecimiento la uniformidad de pesos y medidas, la tendencia hacia la moneda única, la uniformidad de reglas de intercambio y propiedad, la uniformidad jurídica y administrativa, la conformación de un mercado uniforme; pero sobre todo, la unidad de lengua y cultura.

La uniformidad de cultura se desarrolla a través de la imposición de una visión determinada a través de una sola lengua; esta imposición cultural se realiza a través del establecimiento de un sistema educativo único. El surgimiento del Estado-nación mexicana

El establecimiento de lo que se conoció como la Nueva España, se logró gracias a la destrucción de los estados precolombinos, el exterminio de los príncipes y sacerdotes, las élites gobernantes, la desaparición de muchos libros de sabiduría, las ciudades y templos monumentales arrasadas y demolidas. En fin, la carnicería y el genocidio más impresionante de la historia mexicana.

Sin embargo, a pesar de los tres siglos de dominación española muchos pueblos indios siguieron fiel a su tradición y cultura; conservaron muchas formas de organización social que provenían del pasado, conservaron su forma comunitaria de relacionarse con su madre tierra, a través de un creativo sincretismo lograron preservar sus rituales religiosos a través del cristianismo, sus instituciones y derechos incluso fueron reconocidos por las Leyes de

Indias, muchos de sus trámites legales las realizaron a través de sus lenguas que lograron preservar durante siglos. Muchos de sus rasgos se conservaron a través de la comunalidad, la "República de indios" fue su principal refugio.

En la Nueva España, la idea del Estado-nación no surge de las naciones indígenas oprimidas, tampoco surge de los potentados peninsulares, se origina en el pensamiento de un sector de la población criolla ilustrada.

Quienes reivindican la creación de una nueva nación son los criollos y mestizos, que no tuvieron cabida en los puestos claves acaparados por los peninsulares, tampoco se identificaban con las poblaciones originarias.

El Estado-nación mexicana surge así, logrando su independencia de la metrópoli y desligado de los pueblos indios, quienes solo sirvieron de carne de cañón en las revueltas por la independencia. La plebe que siguió al padre Miguel Hidalgo y al Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, fueron en su gran mayoría compuesta por indígenas.

Es preciso decir, que el establecimiento del México independiente se logra gracias al derramamiento de mucha sangre india, aunque en el nuevo Estado-nación no son tomados en cuenta; la Constitución de 1924 se elabora sin el concurso de las grandes mayorías de las naciones existentes, los pueblos originarios no fueron reconocidos en la estructura política y en los preceptos legales del nuevo Estado Mexicano.

La construcción del nuevo Estado se realiza bajo la óptica de la asimilación de la multiplicidad de culturas en una sola, se impone con la fuerza de la ley y la fuerza la visión del criollo mestizo.

La nueva nación emergente no tiene antecedentes; habría que construirla, y se construye a través del programa liberal que comprende, en lo jurídico, la vigencia de un estado de derecho bajo una ley única; la democracia representativa como forma de organización política; y en lo económico el desarrollo capitalista.

Nuestro país se sume en un largo proceso de asimilación que aún no acaba, el sometimiento de la multiplicidad cultural es interminable. La fragmentación de las naciones indias a través del federalismo corresponde más a cotos de poder que a formas de organización de las sociedad reales. La división administrativa obedece más a intereses políticos que a las delimitaciones regionales de las nacionalidades indígenas.

Cada pacto federal que se realiza en las revoluciones sucesivas, agregan más la discriminación y el exterminio de las comunidades originarias; aún así, en cada revuelta la sangre india sirve como tributo a la construcción de la nación mexicana.

La Modernización del Estado Mexicano

En este nuevo amanecer, con este siglo que inicia, crece con mayor fuerza el reconocimiento del pasado milenario de los pueblos y culturas indígenas, un pasado que se hace presente en miles de hombres y mujeres que aún conservan muchas de las costumbres y tradiciones que les legaron sus abuelos. El reconocimiento a sus derechos cada vez va ganando voluntades, en el plano nacional e internacional. La modificación al Artículo Cuarto Constitucional de nuestra República y el Convenio 169 de la OIT, así lo confirman. La modificación Constitucional cobra importancia porque reconoce que "la nación mexicana tiene una constitución pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas", lo que constituye un derecho reconocido, no otorgado, lo que permite el reconocimiento legal de la libertad de decisión de los pueblos indígenas de asociarse con otros para constituir un estado multicultural.

El Convenio 169 de la OIT (México y Noruega lo ratifican en 1990), por su parte, priorizar los conceptos básicos del respeto y la participación. Respeto a las formas culturales, a la religión, a las formas de organización social, económica y a la identidad propia de cada pueblo; dicho convenio sustituye la idea de la disolución e integración de las culturas indígenas que contempla el Convenio 107.

Contempla además, que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar acciones que permitan la protección a los derechos de los pueblos indígenas, así como garantizar el respeto a su integridad.

El Convenio logra, además, aclarar de manera contundente la utilización del concepto de "pueblos indígenas" que no tiene implicación alguna, en lo que atañe a derechos, con el que se confiere al derecho internacional. La salvaguarda de las personas, las instituciones, bienes, trabajo, culturas y medio ambiente de los pueblos interesados (Art.4.1) se da en el marco de los Estados independientes.

Finalmente, las Nuevas reformas Constitucionales que se promueven para el reconocimiento de los derechos y las culturas indígenas, permiten modernizar a nuestro Estado, en la medida que permite la constitución de un estado plural y democrático, en una unidad de pueblos, de regiones, de etnias que comparten un fin común.

El reconocimiento de la autonomía indígena, nos llevaría por el camino más idóneo para la modernización del Estado mexicano.

Parafraseando a Luis Villoro "en vez de subordinar la multiplicidad de culturas a una sola manifestación de la razón, comprender la razón en una pluralidad inagotable de culturas".

LOS SISTEMAS NORMATIVOS

Teresa Sierra*

Gracias por esa invitación, yo al igual que los ponentes anteriores considero y espero que esto sea un inicio de sesiones de este tipo de foros dentro de este recinto y que realmente esto apunte a analizar y discutir la Ley de Cultura y Derecho Indígena elaborada por la COCOPA y para convencerse de que es la propuesta que ha logrado consensar los puntos de vista que se están planteando aquí, pero sobre todo que es la expresión de una propuesta de diálogo y de paz, en la cual está involucrado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las organizaciones y los pueblos indígenas y también el estado mexicano.

Yo quiero hablarles sobre un tema particular que tiene que ver con las jurisdicciones indígenas, en especial el tema de los sistemas normativos. Antes de entrar a este tema, rápido nada más quería mencionar que justamente lo que se busca con esta propuesta de la COCOPA con los acuerdos de San Andrés es construir una nueva relación entre el estado mexicano y los pueblos indígenas, basados como bien se ha dicho aquí en el principio de la pluralidad, la diferencia y la tolerancia, estos ejes, esta nueva relación sin duda es un elemento central para construir la democracia y para consolidar estos proyectos

* CIESAS

democráticos que tanto estamos discutiendo en el país y también para la reforma del estado en la cual estamos involucrados. Es decir, si no se contempla el principio de la diferencia cultural en estas discusiones sobre hacia a dónde apunta la democracia, si no se contempla que hay ciudadanos diferentes, que hay sujetos de derecho sujetos que remiten a organizaciones colectivas, a derechos colectivos, no se va a lograr realmente consolidar un proyecto democrático basado únicamente en la idea del individuo, del ciudadano como sujeto de derecho.

Estamos efectivamente ante ciudadanías culturales, multiculturales o étnicas, como se les ha dado en llamar a eso.

Entrando al tema que yo quiero tratar, yo lo que quiero argumentar es que estamos ante sistemas normativos, contemporáneos, es decir, no son usos y costumbres nada más, son realmente verdaderos sistemas jurídicos que de alguna forma son una columna vertebral de la demanda de las jurisdicciones indígenas y de la autonomía.

Este tema ha causado mucho escozor en el debate que se ha dado en los medios y también en diferentes foros, porque se piensa que el reconocer a estos sistemas normativos llamados usos y costumbres, se van a vulnerar principios básicos justamente de la democracia, de las libertades individuales y se abre el espacio a la violación de los derechos humanos.

Estas visiones en realidad reproducen ideologías excluyentes, yo podría decir también de corte muchas veces racistas, generalmente basadas en un desconocimiento de las realidades indígenas y de sus procesos.

Se suele identificar usos y costumbres con violación de derechos y construir visiones esencialistas y folclóricas de las culturas indígenas, como si se tratara de sociedades inmutables cerradas en sí mismas. Como les digo yo, sostengo y no nada más yo, tenemos quienes conocemos las sociedades indígenas, las propias organizaciones y los pueblos que estamos ante sistemas normativos contemporáneos, dinámicos y no son estas expresiones de sobre vivencia prehispánica, sino que estos sistemas se han debido adecuar a las

realidades, a las situaciones de dominación en las que han vivido, sin duda en relación con el derecho del estado, los derechos dominantes, los derechos hegemónicos y son por tanto producto también de una historia de dominación ante la cual han tenido que responder, adaptarse o también resistir. En ese sentido han debido cambiar y adecuarse a las situaciones contemporáneas sin por ello dejar de reproducir lógicas y modelos culturales que las caracterizan y que remiten a matices culturales que son también históricas.

Entonces, yo creo que hay que reconocer que se trata de sociedades históricas, de sistemas normativos que son expresiones de cambios, de transformaciones que no son sistemas que están suspendidos en el tiempo y que en ese sentido han tenido que adecuarse a las necesidades de las propias sociedades.

Sin duda estos sistemas han tenido también que incorporar elementos de la sociedad dominante, del derecho del estado y también del derecho internacional. Entonces, digamos, es esta capacidad que tienen los sistemas normativos por el hecho mismo tal vez de ser derechos orales, no son derechos escritos, lo que no significa que no se puedan escribir, pero es esta capacidad de adecuarse lo que les ha permitido, como lo señalaba Gustavo en la mañana, de reproducir tradiciones y de construir nuevas tradiciones, no por eso dejan de ser sistemas indígenas, incluso lo que nosotros hemos visto y hemos registrado en diferentes lugares, por ejemplo en Guerrero, con el caso de los policías comunitarios, como han surgido nuevos sistemas normativos y como se recuperan en estos sistemas normativos elementos de tradiciones, muchas veces ya perdidas pero que adquieren un sentido nuevo ante las necesidades que tiene la gente de organizarse y de administrar justicia ante también la incapacidad del estado para hacerlo.

Entonces yo creo que esto es un rasgo muy importante que realmente hay que tomar en cuenta para poder argumentar si son sistemas contemporáneos. Y yo en ese sentido creo que el término usos y costumbres no le da justicia a lo que son estos sistemas, son sistemas jurídicos en toda la extensión de la palabra, efectivamente no están escritos, nos remiten a un concepto de derecho en un sentido amplio, como regulador de la vida social, con regulación con la naturaleza y sin duda con una cosmovisión y que esto implica un elemento de

identidad y que sin duda también tienen una diferencia central con el derecho occidental, hay diferencias por eso estamos tratando de discutir estos temas, si no hubiera diferencias entonces no había estos problemas, ni tampoco hubiera conflicto.

Ahora, en un sentido más estricto, si hablamos de sistemas jurídicos como sistemas que tienen normas, que tienen autoridades, que tienen procedimientos particulares para resolver conflictos, esto lo encontramos en las poblaciones indígenas con más o con menor fuerza, digamos no encontramos sistemas normativos únicos, hay una gran variedad, no es lo mismo el derecho huichol de los huastecas, como seguramente nos hablará Samuel o en el caso de los arámburis o en el caso de los zinacantecos, son derechos históricos particulares que in embargo hay ciertas lógicas que de alguna forma comparten y esto tiene que ver con ciertos principios generales, con el hecho de ser derechos en donde lo colectivo efectivamente juega un lugar central y aquí está uno de los puntos centrales, esta relación entre lo individual y lo colectivo en estos sistemas normativos.

La organización de estas sociedades se base en mucho en la categoría de la membresía, el auto identificarse como parte de una colectividad por lo cual se tienen derechos y ese ejercer derechos implica compromisos y obligaciones que son también los garantes del ejercicio de los derechos individuales. No es que haya necesariamente una contraposición entre el ejercer un derecho individual en las comunidades y el derecho colectivo, pero sí hay jerarquías y yo creo que esto hay que entenderlo por lo que en relación a la sobrevivencia misma de estas colectividades en donde lo colectivo adquiere una dimensión particular, se toman decisiones efectivamente en asambleas de manera consensual, no porque se impongan, hay una gran negociación, yo creo que hay que conocer cómo se dan estas dinámicas locales de toma de decisión para poder entender cuál es el sentido de lo colectivo, no es cierto nada más que los individuos que no están de acuerdo se les excluya, hay muchos mecanismos que se tienen en estas comunidades, que con mecanismos culturales que son históricos, que hay que entender porqué se dan y cómo en cierta medida efectivamente hay individuos que puedan no estar de acuerdo y bueno sin duda aquí hay situaciones de conflicto que se atienden además.

Este es un punto que me parece clave porque a menudo también se deslegitima cuando se dice por ejemplo que el derecho de los pueblos indígenas de elegir sus autoridades de acuerdo a lo que se llama sus usos y costumbres, a sus prácticas normativas, efectivamente en muchos de ellos, como lo vemos en el caso de Oaxaca, que ya se ha reconocido, esto se hace a través de asambleas, pero también porque quien ocupa los cargos no es nada más cualquier persona, una persona que es reconocida y que ha mostrado su compromiso con la comunidad.

Entonces, hay que entender cuál es el sentido de lo colectivo, yo creo que muy fácilmente trasladamos nuestra visión occidental para entender a estas comunidades, sin dar la posibilidad de ver porqué se toman de una o de otra manera las decisiones.

Por otro lado, sin duda en la propuesta en la Ley COCOPA, como parte de las negociaciones y bueno porque eso se está discutiendo también en las comunidades indígenas, se habla de los derechos humanos y se habla de la cuestión de género, que este es otro asunto muy importante.

Entonces, el tema de los derechos humanos que además está ya reconocido como un principio en la Ley COCOPA, sigue sin entender qué es lo que esto está significando en las comunidades, además este tipo de preferencias normativas están ya siendo incorporadas por las propias comunidades. Yo creo que lo que no se vale es que simplemente nosotros o el estado desde fuera digamos, es que ahí se violan los derechos humanos, sin tratar de entender la lógica desde adentro y cómo desde estas comunidades se están apropiando de estos conceptos.

Lo mismo sucede con el tema de las mujeres, que es un tema muy controvertido y que sin duda se están dando cambios enormes en las comunidades, las mujeres mismas lo están reivindicando, están apuntando a una visión crítica de costumbres que sin duda las afectan, pero no por eso están negando su pertenencia a su comunidad y a sus pueblos, entonces se están dando dinámicas de cambio muy interesantes en las comunidades y yo creo que esto también nos apunta a comprender que cuando estamos hablando de reconocer

jurisdicciones, de reconocer autonomías, no quiere decir que vamos a reconocer sistemas cerrados, sistemas normativos, aislados, sino que están teniendo procesos internos en donde quienes se sientan afectados encuentran también canales dentro de sus mismas sociedades para confrontar estos problemas y yo creo que esto hay que comprenderlo bien y hay que tal vez apoyar a que se den esos procesos de discusión de temas, de conflicto cultura y de cómo desde adentro se están manejando la conflictividad interna, pero respetando también sus lógicas, respetando también sus tiempos. Y bueno ya se me acabó el tiempo, pero yo quisiera nada más decir cuatro razones por las que yo creo que reconocer el derecho indígena, los sistemas normativos es un elemento central para enriquecer a la sociedad en su conjunto. Yo creo que sin duda es un elemento de justicia social, digo no nada más los sistemas normativos, sino la demanda de autonomía, los pueblos indígenas, es un elemento de justicia social porque se trata de reconocer derechos históricos de los pueblos indígenas y de alguna forma de hacer, de darle cuerpo a un mandato constitucional que está en el artículo Cuarto ya reconocido, reconocer a México como un país pluricultural, esto hay que llevarlo en serio hasta sus últimas consecuencias, reconocer la vigencia de derechos y de los pueblos indígenas.

Yo creo que también al reconocer estos sistemas normativos, estas jurisdicciones estamos apostando a que se reduzcan situaciones de violencia y de conflictividad social porque sin duda en estos espacios se resuelven conflictos de una manera mucho más adecuada que si todos los tiene que estar resolviendo el estado, lo que pasa es que si no se les da legitimidad a las instancias locales de toma de decisión, como sucede hoy en día, las autoridades locales no tienen la legitimidad, las acusan de abuso de autoridad, entonces no se da la posibilidad de que estas decisiones realmente tengan su efectividad.

Yo creo que también estamos hablando de que la sociedad en su conjunto se enriquecerá al reconocer estos sistemas normativos y que sin duda puede ser también un ejemplo para que este tipo de modelos de resolución de conflictos pueda darse en otras situaciones, no necesariamente dentro de los pueblos indios, abrir espacios de negociación en donde se busque el acuerdo, en donde no nada más estén imponiendo decisiones o se esté valorando desde un punto de vista unilateral los conflictos.

Por último, creo que asumirse como nación multicultural implica efectivamente profundizar la democracia en este país y consolidar un proyecto de nación, yo diría ejemplar en el contexto mundial y en el contexto de América Latina.

NUESTROS DERECHOS, RESULTADO DE UN CONSENSO.

Samuel Salvador Ortiz*

Buenas tardes, hermanos, hermanas. Buenas tardes Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.

Más que de la Universidad de Guadalajara, vengo en representación del pueblo Irrárica, la nación huichol de los estados de Nayarit, Durango, Jalisco y Zacatecas, y en especial está el estado de Jalisco.

La historia de México desde hace más de cinco siglos ha sido la historia permanente entre quienes pretenden encauzar el país en el proyecto de civilización occidental, y quienes resisten arraigados en mantener formas propias ancestrales de espíritu mesoamericano. Esta historia del México profundo y del México imaginario, como lo definió el célebre antropólogo Bonfil Batalla, ha sido desigual.

La sociedad occidental imaginaria ha afirmado ideológicamente ser superior en todos los órdenes de la vida, y en consecuencia niega y excluye la existencia de los pueblos indígenas. La visión colonizadora del México imaginario califica a lo indígena como lo atrasado, lo bárbaro, lo carente de cultura y civilización.

Para los grupos de poder, se trata de alcanzar el desarrollo, el primer mundo, el progreso y la modernidad, sin cuestionarse jamás sobre el porqué, el para qué y hacia dónde va la

* Universidad de Guadalajara

modernización. Esta historia injusta la hemos vivido los pueblos indígenas en las diferentes etapas de la República.

Ejemplos de lo anterior se tiene en el Constituyente de 1824, que no incluye de manera profunda la existencia de los pueblos indígenas, salvo algunas frases líricas.

Durante la restauración de la República Federal en 1867, los liberales emprendieron una feroz guerra contra la institución de la comunidad indígena, que influyó formalmente en la abolición de la tierra comunal y de los sistemas locales de autoridad. De manera concomitante, se reforzó la carga negativa del término indio, que incluso fue borrado del lenguaje forense.

Si bien ciertos discursos oficiales ensalzaban el glorioso pasado prehispánico y condenaban el fanatismo virreinal para legitimar el gobierno independiente, los indígenas vivos no se concebían como factor de identidad nacional. Para nacionalizarse, los indígenas tenemos que castellanizarnos, tenemos que convertirnos en propietarios particulares, tenemos que participar en el mercado nacional y aceptar que nuestra comunidad no era la local, sino la de la Nación Mexicana. Es decir, que todos tenemos que ser parejos ante la ley.

El Constituyente de 1917 en su artículo 27 reconoció la comunidad comunal de la tierra, gracias al esfuerzo realizado por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, que lucharon al lado de los antepasados.

Fue hasta la década de los años 40 cuando se empieza a retomar el asunto indígena, pero esta vez para reafirmar la teoría de los historiadores de aquel tiempo, entre ellos José Vasconcelos, que decía que los indígenas tenemos que ser igual que los mestizos.

Manuel Gamio y Aguirre Beltrán, impulsó desde el Instituto Nacional Indigenista, propusieron que era importante incorporar al indígena a hacerlo dar lo mejor de nosotros. Había que culturalizarlo para construir una cultura nacional única que fuera la mestiza.

Últimamente, como todo mundo sabe, y más en especial los pueblos indígenas, por primera vez en la historia de México, apenas en la década pasada, el Gobierno de México por primera vez nos reconocieron a nosotros como indígenas. Eso está contemplado en el artículo 4º constitucional, que dice que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, pero en ese artículo solamente se vio la cuestión social y cultural, nunca se trató el asunto de tierras y territorios, autonomía, sistemas normativos, etc., a pesar de que había un instrumento jurídico internacional, ya que había ratificado el Senado de la República y anteriormente también el Gobierno Mexicano lo había firmado.

Dos años después de la modificación del artículo 4º, en la madrugada del primero de enero, como todo mundo sabe también, justo en la entrada del Tratado de Libre Comercio, los indígenas del sureste mexicano agrupados en el Ejército Zapatista, se levantaron en armas reclamando su dignidad y respeto como colectividades diferenciadas, y exigían un respeto a su autonomía para decidir libremente ser reconocidos como diferentes al resto de la nación.

Posteriormente, como todo mundo sabe, a raíz del cese del fuego vino el diálogo, del diálogo vinieron los acuerdos de San Andrés de los pobres, en materia de derechos y cultura indígena, que fueron firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Ejército Zapatista y el Gobierno Mexicano, y éstos reconocen esencialmente la autonomía y la libre determinación ejercido bajo el Estado Mexicano, los sistemas normativos –como ya lo comentaba Teresa Sierra- las espiritualidades, la educación intercultural y otros aspectos.

Desgraciadamente estos acuerdos después de haber sido aceptados, fueron desconocidos por el Ejecutivo anterior, que fue el detonante para que el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal se suspendiera. A causa de esta actitud del Ejecutivo del señor Zedillo, actualmente no se cuenta con una Ley Nacional que reconozca nuestros derechos fundamentales.

En esta ocasión, en este nuevo gobierno del Presidente Vicente Fox, al parecer se están abriendo nuevos cauces, hay posibilidades para que el diálogo dé inicio, para que se retome

el diálogo, debido a que por una parte ya se están cumpliendo las demandas que está poniendo el ejército, en el sentido de que el Gobierno Federal tiene que retirar a los militares que están en las comunidades zapatistas, y por otra parte también ya algunos presos políticos zapatistas han salido. Y lo más importante es que el Ejecutivo de Vicente Fox ha presentado ante el pleno del Senado de la República la propuesta de reformas constitucionales de la COCOPA.

En esta ocasión toca a los Diputados y Senadores de este H. Congreso de la Unión, resarcir la deuda histórica que se tiene hacia los pueblos indígenas. Entonces, esta tarea, esa enorme tarea que tienen es la de que tienen que sacar adelante la iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA.

Los Diputados y Senadores de este H. Congreso tiene que dejar atrás el miedo injustificado que han tenido hacia los acuerdos de San Andrés y la reforma de propuestas constitucionales de la COCOPA, en el sentido de que nuestras demandas de autonomía y libre determinación, de ninguna manera se circunscribe dentro de la demanda de soberanía.

No es cierto que queramos separarnos de la nación, no es cierto que queramos balcanizar a México y de que queramos hacer otros estaditos, como en algunas ocasiones mencionó el jurista Burgoa. Nos sentimos más mexicanos, este país es patria nuestra.

Ya otros estados-nación, como Colombia, Ecuador y Nicaragua, han reformado sus constituciones para el reconocimiento de los derechos indígenas, y están avanzando en el combate de la pobreza y la marginación.

Con esto no quiero decir que la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena vaya a ser la panacea que nos vaya a resolver todos os problemas; debe de haber también una reforma institucional y una participación activa de todos nosotros.

Finalmente, los indígenas no necesitamos de leyes impuestas, maquilladas rasuradas. En esta nueva relación entre el Estado y nuestros pueblos que pretendemos construir, es

necesario que el reconocimiento de nuestros derechos sea resultado de un consenso, y ese consenso precisamente son los acuerdos de San Andrés Sacanchén, y así nuestro texto constitucional será una efectiva norma de convivencia.

LA AUTONOMÍA NO ES INDEPENDENCIA: COMPROMISOS PARA LOS PUEBLOS INDIOS DE LA NACIÓN.

Natividad Gutiérrez*

El trabajo que yo he preparado es una breve discusión sobre la autonomía y la libre determinación como partes claves para armar aquello que se ha denominado la nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado.

El propósito de esta intervención es contribuir a entender porqué la autonomía no significa independencia, y de qué forma había que entender este mecanismo auxiliar en un proceso de transformación que enfrenta el Estado o nación a fin de reconocer la diversidad.

Para abordar esta cuestión voy a enlazar dos partes: primero voy a intentar definir porqué autonomía no es independencia, aunque ya esto se ha manifestado de distintas maneras, y en la segunda parte, cuál es uno de los impedimentos históricos más contundentes que tenemos por delante, como es el de reconocer la etnicidad fragmentada de Mesoamérica. Esto involucra desde luego dificultades de implementación y aplicación muy importantes, que superan las propuestas y las voluntades políticas.

Voy a tratar de concluir con la responsabilidad histórica que en todo este proceso tienen los pueblos indios y cómo lograr que esta reforma del Estado de verdad actúe en beneficio colectivo.

* Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Desde luego que estas reflexiones las estoy pensando al igual que muchos de ustedes, desde un punto de vista que supera solamente aquellas medidas de carácter desarrollista que piensan que los problemas que enfrentan los pueblos y las comunidades indígenas son solamente de pobreza.

Entonces, si seguimos pensando con esta visión lineal de que es un asunto de pobreza, esta reforma del Estado que está empezando a cuestionarse, que está empezando a discernirse en foros como éste y en muchos otros, no podrá contemplar todas aquellas medidas que son mucho más profundas, que tienen que ver con la historicidad de la nación, y en donde tienen que intervenir dos políticas rectoras del Estado, que solamente el Estado, por el costo que ello implica, puede realizar. Esto es, la educación pública y los medios de comunicación.

La autonomía, como sabemos, no es un vocablo nuevo en la terminología del Estado-nación y en todas partes donde se ha tratado de implementar hay autonomías concretas, hay experiencias de autonomía, varios países tienen esta experiencia de organización. Han estado siempre sumidas en un intenso debate que puede ser, hasta cierto punto, útil de tener en cuenta.

Toda experiencia de autonomía concreta, es decir, no solamente la discusión de las ideas o las propuestas, sino las autonomías concretas que se construyen día a día, que han sobrevivido hasta la fecha—unas han desaparecido, otras se han transformado en espacios de representación política mayor, que han operado desde Nicaragua hasta China. En China también hay una experiencia de construcción de autonomías muy interesante, que podría semejarse, incluso, a las propuestas que aquí en México podrían someterse a discusión.

Toda autonomía opera dentro de un marco jurídico y legal de estados unitarios. Esto es una manera; muchos gobiernos lo han utilizado como un mecanismo auxiliar justamente para mantener la unidad y la seguridad que, como sabemos, son principios inviolables del Estado-nación.

Esto, desde luego, ha suscitado una conceptualización y un debate teórico muy profundo, muy largo. Desde 1920 sabemos del concepto de autonomía y cómo se ha malinterpretado con el otro concepto que es de autodeterminación.

Aquí se ha tratado, como decían anteriormente, de comparar la autonomía con la balcanización, que significa un desmoronamiento de pequeños Estados y que ésta es una situación que se ha visto que es una exageración para el caso mexicano.

Entonces es posible afirmar que casi todos los gobiernos que han recurrido a la autonomía como una medida para lograr la coexistencia étnica de varios grupos, de forma más o menos pacífica y ordenada. Esto es, tampoco las autonomías son modelos de perfección, involucra desde luego, tener en cuenta que lo más difícil es cómo se va a aplicar.

La idea de autonomía en sí no es difícil, es decir, si todos estamos entendiendo que autonomía es una manera para contener la diversidad dentro de una unidad. Lo difícil es, decía yo, como ponerla en práctica.

En algunas regiones, por ejemplo, en algunos países extensos donde hay una diversidad étnica muy pronunciada, que coexiste con una mayoría dominante, como es el caso de China, se han tratado de poner diversos pisos, diversos tipos de autonomía que corresponden a la forma, al número de población y a la coexistencia que hay entre varios grupos. Y esto ha dependido también de una reorganización del espacio.

Así que uno de los resultados más importantes que podemos aprender de los ejemplos concretos de aplicación de autonomía es que esta política multicultural, que tiene su tradición más importante en la tradición socialista, después de incorporan otros modelos multiculturales, liberales o comunitarios, pero su forma más conocida es la autonomía que han aplicado países de régimen socialista y estos resultados no pueden medirse por igual.

Así, por ejemplo, la autonomía ha ayudado a revitalizar a grupos que estaban al borde de la extinción y, por otra parte, ha frenado en gran medida las aspiraciones político-culturales de

grupos que son más compactos y con una historia de liberación y de independencia más sostenida. Por ejemplo, los tibetanos y los mongoles, de quienes seguramente ustedes habrán sabido de sus reivindicaciones y de cómo la autonomía en esos casos no es suficiente.

Ahora, si bien la autonomía, como decía, es un mecanismo auxiliar, esto habría que tomarlo muy en cuenta al reconocer el aspecto decisivo que a mí me parece es lo más difícil. Cómo enfrentar la etnicidad fragmentada, es decir, sabemos que esta diversidad cultural lingüística, cultural y religiosa no se expresa en forma de bloques o sectores más bien definidos.

La etnicidad a la que nos estamos refiriendo es una microetnicidad, es una microetnicidad que tiene una historia tan antigua como, es una historia muy antigua, en algunos casos es una sobrevivencia, incluso, de organizaciones de tiempos prehispánicos.

Esta sobrevivencia de pequeños grupos, de grupos de pequeñas localidades ha impedido que se formen grupos compactos y para formar grupos compactos hay que tener en cuenta que se requieren mecanismos de transmisión de la memoria. Normalmente son la educación y los medios de comunicación y sabemos que estos dos recursos han estado fuera del alcance de los pueblos indígenas, tanto de México como del mundo.

Entonces el asunto es cómo enfrentar. Los pueblos indios tienen la realidad de cómo enfrentar su propia microetnicidad. Algunos datos revelan que hay 156 mil 62 localidades y cómo agrupar todas estas localidades, que son los hábitats de los pueblos indígenas en zonas que pudiesen acceder a diversos grados de autonomía.

Voy a concluir diciendo que el principio de la nueva relación que ha acordado el EZLN y el Ejecutivo Federal es el de libre determinación. Aquí quiero decir que no se trata de autodeterminación, que se interpreta como el derecho a que una etnia o nación se gobierne por sí misma. La libre determinación, que es el acuerdo que se ha logrado, es aquel derecho en donde se pueden decidir las formas de gobierno propio. Mientras que sólo los Estados-

nación soberanos tiene derecho a gobernarse a sí mismos, el derecho de libre determinación es elegir a sus propios gobernantes.

Pareciera ser que es lo mismo, pero no lo es. Entonces, la autonomía no es independencia porque los pueblos indios no han creado sus propios nacionalismos, y esto nos llevaría también a una larga discusión que yo espero que en el futuro empiece y que veamos exactamente cuál es entonces la aspiración a futuro de los pueblos indígenas.

La organización de la microetnicidad es un asunto pendiente y también está pendiente el hecho de evitar la ubicación de que todos los movimientos o de que el movimiento indígena en sólo uno; existe una profunda diferenciación y si no existe esta conciencia de autorecuperar lo tzotzil, lo tzeltal o lo tejolobal quedará la condición impuesta y genérica de indios que, como todos sabemos, es una categoría colonial y los esfuerzos por lograr autonomía quedarán cada vez más lejanos.

EL PEREGRINAR DE LOS PUEBLOS INDIOS DE MÉXICO

Irineo Rojas Hernández*

Es incuestionable que los diversos pueblos indígenas de México, a partir de la conquista, no fueron atendidos ni en lo más fundamental. Mucho menos durante toda la época de la Colonia.

Muy por el contrario, éstos fueron vistos solamente como fuerza de trabajo para satisfacer las necesidades de producción de los conquistadores y más tarde de los encomenderos. Colonizadores y encomenderos. Por lo que todas las culturas, en su conjunto, fueron consideradas inferiores y, por lo tanto, vistas con desdén y menosprecio.

* Centro de Investigación de la Cultura Purépecha, Universidad de Michoacán.

De tal naturaleza que al iniciarse el movimiento de independencia muchos indígenas creyeron que con esto lograrían una posición diferente en la escala social del país. Sin embargo, en la mentalidad de la población mexicana y en especial de los criollos que al ir consolidándose en la independencia, éstos asumieron el poder y siguieron la misma pauta de trato a toda la población indígena en general.

Más tarde, con el movimiento de Reforma, se pensó que las cosas cambiarían. Inclusive en este movimiento participaron personas de ascendencia indígena que desafortunadamente no asumieron el papel de defensa de las culturas autóctonas, sino más bien se acrecentó el desprecio hacia éstas, llegando al extremo de que a finales del siglo XIX, en las discusiones que hubo en el Congreso de la Unión, se cuestionó en varias ocasiones si era en verdad necesario o no atender a estas culturas o más bien seguirlas aceptando como fuerza de trabajo, a lo que ya habían sido sometidas desde la llegada de los europeos.

En esas discusiones se vertieron conceptos en el sentido de que los indígenas en realidad habían nacido para jugar el papel de la fuerza de trabajo y no era necesario atenderlas en sus necesidades primordiales, como fueron los aspectos de educación, salud, justicia social, vivienda, entre otros.

En estas circunstancias de conceptualización positivista acerca de la problemática indígena, se gestó el movimiento de la Revolución de 1910 en el que también los indígenas jugarían un papel importante protagonizado en la figura indomable de Emiliano Zapata y de otros líderes naturales que han permanecido olvidados en la historia mexicana.

As raíz del reclamo social sobre la restitución de las tierras, la libertad y la justicia social, así como las necesidades de educación y salud, entre otros, se iniciaron, a finales de los 20 y principios de los 30, los procesos incipientes de atención a las comunidades indígenas, pero con el firme propósito de integrarlas a la sociedad nacional para que estas culturas autóctonas poco a poco fueran desapareciendo como tales en el territorio mexicano.

Con este proceso de educación integrativa se ha trabajado durante toda la época posrevolucionaria, con excepción hecha durante la administración del Presidente General Lázaro Cárdenas, durante la cual se fundaron múltiples internados de diferentes niveles educativos para dar albergue a los hijos de las cuales rurales campesinas e indígenas en nuestra República Mexicana.

Desafortunadamente, estos internados en la década de los 60 fueron clausurados, muchos de ellos definitivamente, obstaculizando y minimizando así el proceso educativo en la población indígena nacional.

Sin embargo, con el esfuerzo personal de algunos miembros de las poblaciones indígenas, se ha logrado que muchos integrantes hayamos encontrado los caminos necesarios para la superación en diferentes profesiones y así se ha ido conformando paulatinamente una infraestructura de recursos humanos altamente capacitados.

En el caso de nuestro estado de Michoacán, de profesionistas que poco a poco han recuperado su identidad y que han estado dispuestos a defender nuestra cultura, sobre todo en las últimas décadas del siglo, en las que se ha analizado y discutido profundamente el valor de la misma y se ha llegado a la conclusión de que solo revitalizando todas las manifestaciones culturales de cada pueblo indígena se podrá tener un estado mexicano diferente, basado en su pluralidad cultural y lingüística, y obviamente estructurado en regiones y territorios de acuerdo a su población de origen, y también tomando en consideración que esta fuerza vital vendría a reforzar el carácter de la población mestiza y fincar así el desarrollo de nuestro estado con fundamento en esa pluralidad en donde los indígenas seamos tomados como sujetos activos del desarrollo de las propias regiones y consecuentemente toda la inteligencia indígena tenga que intervenir en forma determinante en la planeación y programación del desarrollo de cada comunidad.

Lo anterior obedece al proceso de desarrollo que México ha tomado y que hemos visto todos los profesionistas indígenas que en él solamente se ha tomado en cuenta a una élite de la población y ésta ha considerado que el camino del progreso del país se finca en la

condición de integrar al indígena a la cultura occidental y éste se olvida de todos los conocimientos culturales de su étnica y en especial de su lengua.

Por esa razón, al hablar en mi lengua materna, quise hacer énfasis de que es una columna vertebral para nosotros y hemos luchado porque las lenguas indígenas sean reconocidas a nivel nacional, sean oficializadas, para que todas las regiones indígenas podamos hablar nuestras lenguas maternas y al mismo tiempo aprender el idioma nacional.

En concordancia con el contenido de las disposiciones del Convenio 169 que ya se ha mencionado de la Organización Internacional del Trabajo, en las que están resumidas casi todos los reclamos que los indígenas hemos venido presentando sistemáticamente ante las autoridades estatales y federales de nuestro país. En consecuencia ahora lo hacemos en forma sucinta para todas las personas interesadas, en forma especial a los Legisladores en turno, en la solución del problema que aqueja a los pueblos indios de México, haciendo ver que dichos reclamos son similares a las diferentes regiones de la República Mexicana, porque solo cumpliendo con estas nuevas regiones se llegará a atender por fin las necesidades primordiales de cada una de estas regiones importantes de nuestro México profundo.

Entre las necesidades primordiales más sobresalientes que se deben de atender, son las siguientes:

Recursos Naturales. En este rubro ha habido una explotación indiscriminada, tanto en los recursos renovables como nos no renovables. En la gran mayoría de los casos por personas ajenas a las culturas indígenas, por ejemplo, en la región costera de Michoacán se está entregando la explotación de los recursos minerales a empresas transnacionales, sin consultar para nada a los miembros de la cultura náhuatl, que según el Convenio 169 debería de consultarse previamente a los habitantes de esa región.

En las regiones boscosas pertenecientes a la región purépecha, también se sigue explotando los recursos forestales renovables por parte de compañías madereras ajenas a la región, que

como es natural su único interés es saquear los recursos naturales sin instrumentar para nada los planes de reforestación que son necesarios para conservar el ciclo biológico de los bosques.

Lo anterior, solo para mencionar algunos casos. Por lo que es necesario y urgente se nos consulte a todos los indígenas que tenemos conocimiento histórico ancestral de la conservación de estos recursos y que podamos intervenir ante las comunidades indígenas para hacerles entender la forma racional de la explotación de éstos, los que nos proporciona nuestra madre naturaleza, sobre todo tomando en consideración el criterio de cosmovisión para mantener el equilibrio de la misma, el que nos ha heredado nuestros antepasados en el sentido de respeto irrestricto a la madre naturaleza, de la cual nosotros formamos parte.

Salud. En este rubro las autoridades de la Secretaría de Salubridad, el IMSS, el ISSSTE, el INI, solamente nos han ofrecido programas de salud que según la concepción centralista de las autoridades son los que deben de implementarse, para lo cual ni en lo más mínimo se nos ha consultado sobre nuestras necesidades que tenemos para que nos atiendan adecuadamente. Por ejemplo, las autoridades sanitarias han establecido las clínicas rurales en las cuales se debería en la mayoría de los casos hacerse cargo de ellas. A pasantes que van a hacer su servicio social, éstos naturalmente no tienen la preparación necesaria ni la experiencia suficiente para atender los casos de enfermedad que se presentan en las comunidades.

Y si lo anterior le agregamos el desconocimiento completo del idioma indígena, estos pasantes se encuentran frente a una barrera de comunicación insalvable, ya que los pacientes al no dominar completamente el idioma español se ven obstaculizados de no poder explicar sus dolencias en la forma concreta y versátil. Y los pasantes, y en algunos casos, algunos médicos jóvenes responsables de estas clínicas, al no conocer el idioma de la región no pueden diagnosticar eficazmente a los enfermos, por lo que su actividad solamente se concentra a tratar de cumplir superficialmente su trabajo en estas comunidades indígenas.

Por todo lo anteriormente expuesto es indispensable que se consulte a los profesionistas altamente preparados de las regiones indígenas, los que en la mayoría de los casos se han tenido que pasar por estas penalidades, para que ellos sean los que determinen con base a un diagnóstico bien preparado sobre las necesidades más apremiantes de la población indígena y así poder establecer el tipo de programa y centros de salud que requieran las regiones indígenas de nuestro estado y del país.

De no hacerse así, solamente se seguirá simulando el que se atienden a la población indígena en el área de la salud.

Al hacer un análisis del proceso educativo que se ha ofrecido a las regiones indígenas de nuestro estado, nos encontramos con la triste realidad de que los programas que se han implementado en este rubro se han elaborado en gran parte de ellos en la ciudad de México, tendientes todos a tratar de integrar al indígena a la cultura nacional. Haciendo hincapié que los valores de la cultura occidental son los mejores que los de las culturas indígenas, lo que en la realidad no es cierto.

Esto ha conducido a que gran parte de los profesionistas indígenas al concluir su formación profesional se afrentan de su origen indígena y naturalmente no desean regresar a servir a sus comunidades.

Lo anterior, basado en el proceso educativo integracionista que se implantó en toda la República Mexicana con la escuela rural, la que tenía como misión principal castellanizar a toda la población indígena de México y unificarla en un sistema educativo único.

En el caso de nuestro estado de Michoacán, en 1965 se fundó el Centro Coordinador Indigenista en el Municipio de Cherán, mi pueblo natal, pueblo donde nací; y paralelamente a esta fundación se instrumentó el Programa de Promotores Bilingües en las Zonas Indígenas. También con el firme propósito de continuar el proceso de castellanización de la escuela rural anteriormente mencionada.

Para implementar este programa de educación se captaron a jóvenes indígenas que recién habían concluido su educación primaria. Es decir, se inició otro proceso de improvisar a los recursos humanos en el campo de la educación indígena y este proceso continuaría durante todo el final de la década de los 60's y toda la década de los 70's; improvisando sistemáticamente cada año los futuros profesores que ingresarían a este sistema educativo.

En 1978 se funda a nivel nacional la Dirección General de Educación Indígena y se empieza a cuestionar el programa de educación en las zonas indígenas. Sin embargo, dicho cuestionamiento no fue atendido por las instancias de la Secretaría de Educación Pública, solamente se trató de introducir la elaboración de algunos materiales didácticos en lenguas indígenas, esto como una especie de paliativo para que no se pensara que no había interés en una educación en zonas indígenas.

También se ha tratado por todos los medios posibles de sensibilizar a las autoridades de educación de nuestro estado y del país, para que recapaciten y rectifiquen los programas de educación bilingüe, toda vez que se sigue improvisando hasta la fecha en la captación de los futuros profesores, a través de los cursos de inducción que se les ofrece a los jóvenes que han terminado su educación media, la preparatoria o el bachillerato.

Por todo lo anterior, no es justo que a fines del siglo que acaba de terminar y principios del que iniciamos no se haya pensado en establecer centros de formación y capacitación profesional del futuro profesor bilingüe y poder así cumplir ampliamente las necesidades de educación en las zonas indígenas, lo que conduciría naturalmente a regionalizar la educación indígena de acuerdo a cada una de las culturas indígenas existentes en nuestro estado y de esta manera valorar todas las manifestaciones de las culturas indígenas y equipararlas con las manifestaciones de la cultura occidental.

Con este proceso se llegaría a una verdadera revaloración de lo propio, aceptando únicamente lo positivo que tiene la cultura occidental. Mientras no se instrumente una verdadera educación bilingüe intercultural en nuestro país corremos el riesgo de estar

simulando que se imparte una educación bilingüe con personal improvisado, como se ha hecho hasta la fecha.

Todos los profesionistas que estamos interesados en nuestra cultura indígena hemos visto con sumo interés la importancia que tiene el conocer vivir en dos culturas diferentes, que naturalmente nos enriquece en la concepción de los valores humanos que existen en cualquier parte del mundo.

Consecuentemente es necesario e imprescindible hacer un balance exhaustivo de lo que se ha hecho en el campo de la educación indígena en México, para así poder implementar programas con fundamento en los diagnósticos de las necesidades de cada región y esto lo podrá realizar un grupo interdisciplinario, de profesionistas de origen indígena de cada región de la República Mexicana.

Y así podría seguir extendiéndome en otros aspectos, como en el campo de la artesanía, en el campo de la situación de la representatividad de los diversos órganos de gobierno en estas Cámaras, la creación de una Secretaría de Atención a los Pueblos indígenas. Y así sucesivamente.

Por eso, en 1985, en el mes de octubre, cuando el Ejército Zapatista nos convocó a analizar el problema indígena, estuvimos allí presentes. Se aprobaron los Acuerdos de San Andrés allá, pero acá se rechazaron. Todos los indígenas estamos de acuerdo con esos acuerdos que se firmaron en la sierra de Chiapas. No es un problema local el problema de Chiapas. ¡Entiéndanlo bien, señores Diputados: el problema es de México, el problema es de los pueblos indígenas de México! ¡Y lo que queremos es que nos escuchen y valoren lo que somos todos los hombres preparados que somos de origen indígena y que estamos dispuestos a asumir el reto! Y como dijo el Comandante Marcos: ¡Nunca más un México sin nosotros!

LA AUTONOMÍA INDÍGENA.

Cirilo Maya Cruz*

Los Mazahuas no luchan para obtener beneficios propios, sino pelean porque se reconozcan los derechos históricos, para sanar nuestra dignidad que sigue herida, en el olvido, en la miseria, en la marginación, que hemos venido padeciendo.

A nosotros los indios nos impusieron el atraso, el subdesarrollo, la ignorancia, el analfabetismo, desde la época de la colonia hasta nuestros días.

Así como los gobiernos del México independiente del siglo XIX, unos lo denominan La Segunda Conquista Hacia los Pueblos Indígenas. Y unos afirman que esto ya no fue resultado de una invasión europea del otro lado del Atlántico, sino se dio en nuestra propia casa, impulsada por una minoría de ilustrados de liberales criollos.

Nos rechazaron. Se avergonzaron de nosotros. Nos negaron. Construyeron una nación a su semejanza, a su imagen, al modelo europeo. Se auto identificaron como la identidad nacional.

Veían al hombre blanco como la civilización, la empresa, la modernización. Creador de riqueza, audaz, clase superior y que poseía rasgos de intelectualidad, que era vencedor de todo tipo de obstáculos.

En cambio creían a los indígenas que era obstáculo del desarrollo de este país. Tantos masacraron y tantos, colgaron a tantos indios que quisieron limpiar étnicamente a este país, sin indios.

* Unión Mazahua A.C:

Con la participación de los miles de indios, dando el triunfo de la Revolución Mexicana, los gobiernos revolucionarios nuevamente dan continuidad de la política indigenista del Siglo XIX del México Independiente, pero ahora con un método diferente, pacificación y que tendría que ser a través de la integración cultural, ya no sería violenta esta integración.

Construyeron nuevamente un modelo de nación de carácter homogéneo, ilusionándose con una sola raza de identidad, una sola lengua, al castellano y una sola cultura nacional que sería a través del mestizaje.

Y que los remanentes étnicos deberían de integrarse cuanto antes a ella, e impulsan la primera política indigenista, llamado el incorporacionismo de aquel gran hombre, llamado Manuel Gamio, con su tesis de “Forjando Patria”, integrar culturalmente a los indios a través de la educación, enseñándoles un solo Himno Nacional, un solo símbolo de patria y que realmente el indio debería de integrarse en una sola escuela integral y que debería de convivir con el hombre blanco.

pero esta tesis falló en la década de los 30, con el cardenismo llega y les dice: “no, aquí no hay cultura inferior ni cultura superior, aquí todos somos iguales. Los pueblos indígenas tiene cultura y su cultura es de talla universal; lo que necesitan los indígenas es asistencia técnica, lo que necesitan los indios son tierras, los indígenas lo que necesitan es darle toda la asistencia del apoyo económico del Estado.

Esta segunda política indigenista del cardenismo con el integracionismo duró únicamente un sexenio.

Con la década de los 40, se funda el Instituto Nacional Indigenista en 1947; nace como una unidad e investigación, conocer bien, investigar bien para destruir mejor a los pueblos indios.

Llegamos en la década de los 60, lanzan su primer laboratorio social con su tercera política indigenista as través del aculturacionismo.

En 1962, impulsan el primer centro coordinador indigenista del Instituto Nacional Indigenista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la idea es llevarle desarrollo regional a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas de San Cristóbal de las Casas, que finalmente los resultados fueron un éxito, romper el aislamiento indígena, acabar con aquellos llamados regiones de refugio, acabar con las formas de gobierno, acabar con toda esta interacción de cohesión social de las redes y de lazos de solidaridad social y ayuda mutua en las comunidades.

Llegamos a los 70, en los 70's el Echeverrismo es que realmente acepta este primer éxito de este laboratorio social en los 60, les fundan un Centro Coordinador Indigenista, una por cada etnia, con el argumento de acabar con la pobreza en los pueblos indígenas, cuando el verdadero objetivo era acabar con las instituciones de cohesión social de los pueblos indígenas.

Efectivamente lo lograron, todos los recursos del Poder Ejecutivo Federal se centraron en esta política.

Por otro lado veían que habían acabado con el aislamiento indígena y decían, pues ahora que le hemos enseñado a leer y a escribir a los indios, ahora los tenemos que corporativizar, tenemos que cuidarnos de ellos porque ya saben leer y escribir. Les fundan su Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, a través de la CNC y del Partido Revolucionario Institucional. ¡Ah! Eso sí, aquellos Presidentes de los Consejos Supremos vivían bien, les iba bien, incluso les ofrecieron varias diputaciones.

Al llegar a la década de los 80, todavía está el espíritu del estado, todavía de la integración cultural de los pueblos indios, todavía era válido para la década de los 80's, pero ya los finales le dieron golpe de estado a ese corporativismo que habían creado el Consejo Nacional de Pueblos indígenas, en su quinto Congreso, en Amealco, Querétaro, así nació en el 75, por Decreto Presidencial, así también muere en 1987, en la Ciudad de Amealco, Querétaro.

De 1994 a 1997 el Estado no quiso saber nada de Instituciones Indígenas, menos en las filas del Partido Revolucionario Institucional, quería saber de movimientos Indígenas, empezaron a desincorporar a todas aquellas instituciones llamadas movimientos indígenas en el sector del movimiento oficial.

El camino era llegar al primer mundo, sin conflicto étnico. Pero eso sí, cómo en realidad fue un segundo estado en el mundo, ratifican después de Noruega el Convenio 169, y cómo en 1992 nos dan una letra muerta que hoy en nuestros días no funciona, no tenemos ni herramientas jurídicas, que es el artículo cuarto constitucional.

Hasta 1994 el partido se quedó cojo sin movimiento indígena. Con el estallamiento del EZLN en Chiapas en 1994-1996 el Estado pierde el debate, ¿cómo el Estado todavía decía, a ver quién me va a legitimar atrás de mí?, muévase a ver dónde están esos grandes movimientos indígenas. Se habían quedado cojos, sin brazos, nada, se quedaron solos, pero había que ser un movimiento indígena independiente muy fuerte y sólido.

Hoy en día estamos en el debate, lo que es la autonomía indígena, y todavía se espantan algunos autores que todavía dicen: ¿cómo es posible que la libre determinación?, tanto la han manipulado que a los indígenas les han dicho, es que quieren crear sus estaditos, es que se quieren separar del Estado. ¡No!, lo que nos asiste es un derecho histórico.

Aquí se ha hablado mucho de la autonomía indígena. Tanto en los países capitalistas y del socialismo altamente desarrollado, han tenido experiencia de la autonomía étnica, y parece ser que en México se asustan de la autonomía, pero los que se asustan son porque aquellos son intereses económicos muy fuertes que les estamos trastocando.

En este país es necesario impulsar la autonomía indígena, que no es nada nuevo ni ajeno para el país. También lo podemos ver en el corte capitalista en Canadá, ¿cómo viven nuestros hermanos Mohau?, bien, entonces, ¿porqué asustarnos de la autonomía indígena?.

Cuando se legisle el 4° constitucional, el 18, el 26, el 53, el 73, el 115, y el 116, en ese momento vamos a caminar con el Estado en una armonía en el conjunto del desarrollo económico, no en la integración cultural que han fallado.

LA PROPUESTA DE LA COCOPA, CULTURA Y EDUCACIÓN

Juan Ramón Manzanilla Dorantes*

La iniciativa de reforma constitucional en materia indígena formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación, y presentada al Congreso de la Unión por el Presidente Vicente Fox, es una propuesta que debe ser considerada en toda su magna dimensión, su discusión y su posterior aprobación permitirá saldar deudas históricas con los indígenas que habitan la Nación Mexicana.

Después de seis años de incertidumbre sobre el futuro y de múltiples obstáculos para el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas, hoy existen señales que nos permiten percibir esperanzas de que serán escuchadas las voces de los indígenas mexicanos. La reforma constitucional a los artículos 4°, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 reconoce la dimensión histórica que ha caracterizado la conformación de nuestra nación como una entidad pluricultural. Así, la iniciativa enviada por el Presidente de la República es una adecuación de la Carta Magna a la realidad histórica de México.

Por consiguiente, el presente trabajo hará referencia al artículo 4° con relación a la cultura y la educación de los pueblos indígenas, así como a la modificación propuesta para el artículo 115.

Siguiendo a Magdalena Gómez Rivera, la iniciativa propone derechos, no así competencias, no crea nuevos niveles de gobierno; consigna el reconocimiento de derechos colectivos a

* Universidad Pedagógica Nacional-Yucatán

un nuevo sujeto jurídico, constituido por cada pueblo indígena, derechos de naturaleza diferente a los individuales, derechos fundamentales que no se cuestionan y a los que no renuncian los integrantes de los pueblos indígenas.

En este sentido, la propuesta establece que los pueblos indígenas tiene el derecho de decidir y ejercer sus formas de organización social, política y cultural, así, la iniciativa de reforma constitucional promueve la participación de los indígenas en todos y cada uno de los asuntos que son de su incumbencia.

De esta manera se garantiza la posibilidad de fortalecer su representación política y su participación en los órganos del Estado Mexicano, con respeto a sus tradiciones y garantizado la plena vigencia de sus propias formas de gobierno.

Otro de los puntos de la iniciativa que merece resaltarse es el relativo a la aprobación de sus procedimientos para designar a sus autoridades y la aceptación de sus sistemas normativos para la solución de los conflictos internos, con respeto a los derechos humanos, y en esa intención cobra relevancia el respeto irrestricto a los derechos, la dignidad y la integridad de las mujeres indígenas.

Por otra parte, el aspecto de los derechos económicos se considera que los indígenas deberán desarrollar sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo, con el fin de mejorar y aumentar sus niveles de producción. Para tal efecto, los gobiernos de los diversos niveles: Federal, estatal y municipal, así como los congresos estatales, deberán establecer los mecanismos administrativos y políticos para que los pueblos indios tengan participación en la elaboración de los programas de desarrollo con base en sus propias necesidades y particularidades culturales. Esto refiere a la búsqueda de una mayor equidad en la distribución de la riqueza social y del respeto a la pluralidad cultural de la nación.

Históricamente para las élites dominantes y para muchos mexicanos inclusive, decir indio o indígena ha significado decir pobres, marginados, tontos, ignorantes, enfermos, analfabetas,

flojos, tramposos, bandoleros, borrachos y otros muchos adjetivos peyorativos. Algunos han llegado a la idea de que había que acabar con ellos.

Ante esos signos de discriminación y de racismo, no pocos indígenas: unos por protección, otros por vergüenza y por pretender “ascender” en la escala social, ocultan o niegan su origen y su lengua materna indígena. Seguramente que esta situación no es privativa de un solo pueblo indígena, y en esta perspectiva la iniciativa propone como un derecho de los pueblos indígenas el preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura e identidad. Así, el Estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus haberes, tradiciones y formas de organización y que también promueva la revalorización de su cultura.

Como indica el proyecto de reformas, el Estado mexicano a través de sus autoridades educativas federales, estatales y municipales, deberá definir y desarrollar programas educativos integrales que tengan como propósito garantizar la reproducción y el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas en un plano de respeto y de acuerdo a sus intereses y demandas. Este tópico resulta de singular importancia pues los mayores niveles de deserción escolar, reprobación y analfabetismo, se encuentran entre los indígenas, está llamado al establecimiento de diversos programas compensatorios que han costado mucho y han sido poco eficientes. Esto se puede entender porque aún cuando en los discursos pedagógicos y en las políticas educativas se habla de la importancia del reconocimiento de la diversidad cultural y de los derechos políticos y sociales, en la práctica dichos discursos han sido muy poco significativos para necesidades, perspectivas y demandas de los pueblos indígenas. En ese sentido, es urgente la legislación sobre derechos y cultura indígena a fin de que a partir de la obligatoriedad constitucional, exista la posibilidad de pasar de los dichos a los hechos, esto es, garantizar una educación que revalorice las culturas indias a través de la participación directa de los propios sujetos.

Sin embargo el sentido de la redacción del artículo 4°. Fracción VII de nueva cuenta supedita a las instancias de gobierno el derecho de los pueblos con relación a la elaboración de programas educativos.

Esta fracción VII dice en su tercer párrafo: “Las autoridades educativas federales, estatales y municipales en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional en los que reconocerán su herencia cultural.”

Aquí existe una franca contradicción. La palabra “consulta”, entra en contradicción con la definición que se hace en el segundo párrafo del artículo 4° y en la fracción I de este mismo artículo. Dicho párrafo estipula que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano.

La contradicción continúa cuando en la fracción I se afirma que los pueblos indígenas tienen autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. De esta manera el concepto “consulta” deberá ser sustituido por otro que exprese la participación directa de los pueblos indígenas en la definición de la política educativa de la que son sujetos.

En la mañana uno de los ponentes hizo la propuesta de que también debería de modificarse el artículo 3° constitucional insertando algún elemento que pudiera garantizar el acceso de los grupos indígenas a influir en los procesos educativos.

La otra opinión que introduzca, se refiere al tercer párrafo de la citada fracción VII del mismo artículo 4°. La alusión es cuando se dice que las autoridades definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional en los que reconocerán su herencia cultural. En esa expresión subyace una visión que caracteriza al indígena como la manifestación de una cultura estática, casi arqueológica y una visión limitada de educación entendida sólo como reproductora. Esa visión de la cultura y de la educación ha conducido a serias limitaciones en la política educativa que se expresan en la elaboración de los objetivos y contenidos de los principales proyectos y programas. Así por lo regular se parte de una concepción folclórica y únicamente se enfatiza sobre la tradición en las costumbres. Es decir, sobre los aspectos pintorescos, vestidos, fiestas, marchas, artesanías, etcétera. Excluye o casi nunca se integran contenidos que tengan que ver con las instituciones

sociales, la organización política, la visión del mundo, los haberes comunitarios y las prácticas comunicativas de los pueblos indígenas.

Por tal razón esta redacción deberá de ser modificada. En primer lugar porque la cultura es dinámica, revitalizadora, innovadora y transformadora de la vida, no sólo es herencia ni únicamente refiere al pasado.

En segundo lugar la educación debería de ser entendida como un proceso a través del cual los elementos culturales pasados y presentes se vinculan, se socializan, se transforman y contribuyen el fortalecimiento de los derechos y a la preservación y la reproducción de la cultura de los pueblos indígenas. Así en ese espíritu deberá de ser modificado el párrafo de referencia.

De este modo se propiciaría que la educación parta de las propias perspectivas culturales de los pueblos indígenas y que en los programas a desarrollar se introduzcan contenidos que promuevan y fortalezcan la autonomía, orienten eficazmente el pleno goce de los derechos humanos y comprendan el conocimiento sobre los derechos al territorio, al desarrollo de la lengua materna y a la socialización de sus valores. Todo esto tendría que integrarse con el aprendizaje de la cultura universal y al conocimiento social, político y cultural de la constitución histórica y de lo que es hoy nuestra nación. Esto es lo que en esencia sería una auténtica educación intercultural bilingüe.

Podemos afirmar que las reformas sobre derechos y cultura indígena tiene que pasar necesariamente por una renovación que lleve al fortalecimiento del sistema federal y por tanto a una descentralización democrática. Por eso la reforma al artículo 115 constitucional que propone esta iniciativa, resulta imprescindible para evocar la educación intercultural a la que he hecho referencia. Esta reforma ayudará a solucionar muchas de las dificultades que se crearon cuando en enero de 1992 se reformó el artículo 4° constitucional.

Uno de los problemas centrales fue la actitud asumida en las diversas entidades federativas ante la reforma al artículo 4°. Algunos de los estados no incluyeron modificaciones a las

constituciones estatales para adecuarlas a la federal, como el caso de Yucatán, otras la hicieron pero nunca las reglamentaron ni las llevaron a la práctica y hubo casos en que contravinieron el espíritu de las reformas de 1992.

Así el reconocimiento de la pluralidad se quedó sin vigencia. De esta manera dados los limitados alcances de esas reformas, fue posible que se dieran dinámicas contradictorias en que la Constitución Federal y las leyes federales, entre la Constitución Federal y las estatales, entre las constituciones estatales y las leyes reglamentarias. Esta es una idea de Pablo Enrique Llanes Rizo.

Por tal circunstancia a través de la reforma al artículo 115, se deberá establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el estado.

Como señal a la iniciativa, esta nueva relación garantizará el derecho de participación de las comunidades y de la población en general en los diversos ámbitos de la vida estatal y municipal, en los programas de desarrollo económico y social y en los procesos políticos y en los procesos de desarrollo cultural. Por eso es importante referir que esta reforma al 115 deberá establecer no sólo la consulta a los pueblos indios sobre los asuntos que les concierne, sino que deberá garantizar su participación directa como ejercicio democrático, que haga realidad los principios de libre determinación y autonomía.

Esperamos que pronto se pueda dar este paso de gran trascendencia histórica como un acto de justicia y de búsqueda de un nuevo proyecto de nación que sea incluyente, no sólo para los grupos indígenas sino para todas las minorías que integran este país.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDIOS DE MÉXICO, COMO SUJETOS POLÍTICOS PLENOS.

José del Val*

Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este importante y trascendente foro, en torno a los derechos de los pueblos indígenas y su necesaria, urgente y previsible inserción en nuestra estructura constitucional.

Son muchos los aspectos a partir de los cuales podríamos tratar de dirigir nuestra atención o intervenir en esta discusión, en esta reflexión conjunta desde una perspectiva muy clara en mi caso, que es el reconocimiento y apoyo definitivo a la iniciativa elaborada por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), para que sea establecida en el marco jurídico constitucional.

Pero creo que debemos tener un marco general a partir de cual ver esta discusión, porque si no, podemos caer en una situación de discusión, de detalles jurídicos, de formulaciones específicas, etcétera, etcétera... que si bien son necesarias, puede esconder un poco la problemática o el marco en el que se debe dar esta discusión y que está detrás de esta iniciativa.

Primero que nada una afirmación, que es... la firma de los acuerdos de Larráinzair; significa la derrota del modelo de Estado homogéneo autoritario que predominó en nuestro país durante el siglo XX. Con la firma de los acuerdos, se firma la capitulación de la sociedad mestizocrática; ése es, digamos, el resultado de esta terrible guerra cultural de finales del siglo XX, político cultural.

Ahora bien, ¿cuál es el contenido medular de esta nueva situación que subyace en los acuerdos de Larráinzair? Uno fundamental, a partir del cual se derivan los demás; el reconocimiento -que no el otorgamiento- el reconocimiento de los pueblos indios de

* Instituto Indigenista Interamericano

México, como sujetos políticos plenos; ése es a mi juicio en esencia el núcleo duro de los acuerdos de Larráinzair, el núcleo duro de la iniciativa y a partir del cual no debe estar sujeto de... jaloneos o regateos en ese sentido.

Si nosotros reconocemos a los pueblos indios como sujetos políticos plenos, deriva de manera natural e inmediata, su derecho inalienable a la autodeterminación como pueblos, en la forma autonómica al interior del Estado Nacional, al ejercicio de su autonomía.

Su reconocimiento como pueblos también supone e implica necesariamente el derecho al disfrute de su territorio, bajo la concepción de territorio cultural, como el espacio físico para el desarrollo de su proyecto. De igual manera, el del reconocimiento de los pueblos indios como sujetos políticos plenos, deriva el derecho a definir su organización política y las formas específicas en que ésta se lleve acabo.

De igual manera, de su reconocimiento como sujetos políticos plenos, deriva su derecho específico a establecer una normatividad de usos y costumbres, o una normatividad jurídica que garantice su desarrollo armónico específicamente.

Ahora bien, debe quedar claro que es en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos, del que derivan todos estos otros derechos; no debemos considerar, que una cosa es reconocer a los pueblos indígenas, otra cosa es reconocer el derecho de autodeterminación y autonomía, otra cosa es reconocer el disfrute al territorio, otra cosa es reconocer su derecho de organización política, un derecho madre, un derecho matriz, del cual derivan todos los otros derechos.

Entonces, esto nos queda claro de que no puede estar sujeto de ningún regateo político de ninguna naturaleza, el reconocimiento pleno de los sujetos políticos como los pueblos indígenas de México –en este específico.

No como un otorgamiento, no es que la sociedad mexicana les va a otorgar la categoría de sujetos políticos, sino va a reconocer su condición de pueblos indígenas, su condición

histórica, su condición presente; y de manera particular -y después me referiría yo con más detalle- su condición futura de pueblos indígenas.

La COCOPA, de la LVII Legislatura, con la premura y el rigor que implican estas consideraciones en medio de una situación de conflicto, de una guerra, de una negociación, formula una propuesta legal en base a esos acuerdos, en un ejercicio de consenso político inusitado en nuestro país de todos los partidos políticos, y formula una propuesta legal que garantice un poco la concreción o la cristalización jurídica de los acuerdos, cuyo eje es la concreción de tales supuestos. Sin embargo y desde el primer momento, los rescoldos – digamos- del autoritarismo mestizocrático, intentan escamotear la profundidad y el significado del derecho de los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos, bajo una coartada, la coartada de las precisiones jurídicas; y esto debemos tenerlo muy claro.

Sin duda alguna, la iniciativa de COCOPA es perfectible, puede ser objeto de precisión en algún caso y puede ser sujeta también a eliminar algunas ambigüedades que contiene en su redacción; resultado un poco de la forma en que fue redactada, de la presión con que fue redactada, de los tiempos que fue redactada, en el contexto en que fue redactada; esto sin duda es así. Lo que no podemos caer en la trampa un poco, es en entrar en esta discusión y regateo de precisiones jurídicas, que para algunos significa la puerta trasera para robar los derechos que fueron conquistados en la firma de los acuerdos; es como la contra –vamos a decir- es la contra.

Derrotados en los acuerdos de Larránzair, buscan un espacio como bandas para ver si pueden reencontrar espacios para delimitar lo más posible estos acuerdos.

Entonces, Yo sí quisiera llamar la atención de todos, de manera particular a los señores diputados, a los señores legisladores, en el sentido de que detrás de un poco, de las presiones jurídicas, detrás de diversas interpretaciones, existe indudablemente la intención - se ve clara en algunos casos, en otros no se ve tan clara un poco- de quitarle a la iniciativa de la COCOPA, a partir un poco de la coartada –como decía yo- bajo el supuesto de

precisar jurídicamente algunas cuestiones, el contenido duro de la propuesta, que es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos.

Y esto es importante, porque lo que se intenta un poco con éstas, a veces precisiones jurídicas, o aclaraciones, o restar ambigüedades, es que haya un aparato, una estructura de reconocimiento jurídico legal de los pueblos indígenas, pero que no signifique un instrumento de cambio de ninguna naturaleza.

Y yo lo que quiero decir es realmente y es en serio, el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos, va a cambiar las cosas, les va a permitir entrar en la discusión nacional, verdaderamente. Sentarse a la mesa de la disputa por la nación.

Miren ustedes, lo que eufemísticamente se ha denominado durante este periodo, es rezago histórico con los pueblos indígenas, lo que se llama rezago histórico, no es mas que una forma de enunciar el saqueo, el saqueo sistemático.

Si nosotros considerábamos que demográficamente los pueblos indígenas les correspondería el 10% de los recursos del Estado nacional –ojo- antes del pago de la deuda, por supuesto, antes del pago de la deuda, no después del pago de la deuda. Si les considerara el 10% de los recursos antes del pago, de los recursos del Estado antes del pago de la deuda; y si considerábamos que dos o tres puntos más en términos reparatorios para acortar los espacios que han tenido un poco de saqueo, y si además considerábamos que los recursos de sus territorios provocan, promueven gran parte de los recursos del Estado nacional, digamos que estuviéramos hablando del 15%, por decir algo de alguna manera u otra.

Si nosotros analizamos y evaluamos el presupuesto del 2000, para los pueblos indígenas contando todo, hasta las autopistas que pasan por su territorio que se les asignan como que ese es dinero dado a regiones indígenas –contando todo eso- parece ser que no alcanzaríamos a llegar al 5% de los recursos.

Entonces hoy en el presupuesto del año 2000, hay un despojo de 10 puntos para los pueblos indígenas, este despojo sistemático, año con año en el presupuesto nacional, es la razón de lo que llamamos después rezago histórico; no es un rezago histórico, sino es el resultado de un despojo sistemático en la estructura formal de la elaboración de presupuestos. Y esto debemos tenerlo claro, mientras los pueblos indígenas no sean sujetos políticos plenos y tengan la posibilidad de sentarse en la mesa de la discusión y del debate nacional como pueblos, pues estarán al margen un poco de lo que se discuta, o discutan otros por ellos; y entonces no podrán decir: “A ver señores, vamos a ver una cosa; que por lo menos se acabe el despojo a partir de este momento, que por lo menos los recursos que vamos a tener para el desarrollo de los pueblos indígenas se corresponden en un Estado republicano democrático”.

Bien.

Es inaceptable que se intenten con propuestas alternativas o precisiones jurídicas, modificar la sustancia de los acuerdos; reitero el carácter perfectible, el eliminar algunas ambigüedades que puede tener la propia iniciativa, etcétera. No es un asunto del todo razonable, discutible, se puede analizar. Lo que no podemos permitir, es que ésta sea la coartada para quitarle a la iniciativa, el contenido, la sustancia efectiva del reconocimiento de los pueblos indígenas, que permitan izar el viraje de la sociedad mexicana, el viraje del cambio efectivamente; y no un cambio simulado, no un nuevo derecho inaplicable, ingarantizable.

Yo no sé, la Constitución Mexicana señala que somos un pueblo con una cantidad de derechos increíble, tenemos derechos a la salud, derecho al techo, derecho a la educación, derecho a todos los derechos... a un medio ambiente limpio; tenemos derecho a todo, pero la característica es que generamos en nuestra estructura constitucional derechos que el Estado es incapaz de cumplir, es incapaz de llevarlo a cabo; y la población no tiene instrumentos para exigir su cumplimiento.

Entonces, sería un cinismo descomunal incorporar todo un operativo, un aparato de derechos culturales de los pueblos indígenas en la misma medida, que se convirtieran desde el primer momento en derechos incumplidos, derechos inalcanzados, derechos a lograr en unas futuras generaciones.

Por otro, hay la tendencia a suponer un poco, que la iniciativa de ley es un primer paso y que será perfectible después, etcétera, etcétera... yo digo tengamos cuidado en esto también. La ley que se establezca ahora tardará mucho tiempo en que vuelva a modificarse.

Entonces, debemos tener absoluta responsabilidad en que lo que ahora quede va a garantizar; yo calculo que por lo menos durante dos décadas, va a ser el modelo general a partir del cual se va a desarrollar la estrategia.

El último punto que quería mencionar es éste. Probablemente algunos de los aspectos más problemáticos que puede tener la iniciativa, es que no hemos esclarecido algo que es perfectamente claro.

El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos, no se está fundamentando en la historia, no va a reconocer que en Mesoamérica había pueblos indígenas, y que el proceso colonial los destruyó, y que el proceso independiente los siguió destruyendo, etcétera, etcétera... y que ahí están. No va a reconocer la existencia, que hoy existen pueblos indígenas, ya que los 500 años de subordinación, fragmentación y acoso, han impedido la construcción de estos pueblos, su constitución, su estructuración real como pueblos efectivamente.

Lo que reconoce la ley, es el derecho de los pueblos indígenas a su reconstitución; entonces, los pueblos indígenas no están en el pasado de México, los pueblos indígenas están en el futuro de México... los pueblos indígenas con estas leyes recogen los instrumentos jurídicos necesarios para reconstruirse como pueblos; como pueblos nuevos, como pueblos del futuro. No la restauración de pasadas glorias, no la restauración de

modelos de funcionamiento que de la resistencia duran tantas épocas, sino la reconstrucción y construcción de una nueva lógica, los pueblos mexicanos, los pueblos del futuro.

EN LA FRONTERA DE LA NACIÓN: INDÍGENAS NATIVOS Y MIGRANTES EN BAJA CALIFORNIA

Laura Velasco Ortiz*

Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo estoy un poco preocupada por el tiempo, porque creo que por más que he recortado el trabajo que traía preparado, no logra tal vez ajustarse; entonces, tal vez ustedes escuchen una lectura un poco desestructurada porque ha sido ajustada a estos diez minutos.

Yo les voy a presentar un poco el marco de la existencia de los grupos y los pueblos indígenas en Baja California, y un poco el reto que implica pensar esta nueva discusión sobre el proceso de autonomía en una realidad como la que vive Baja California.

En Baja California existe un conjunto de grupos indígenas que pueden distinguirse por su origen cultural, algunos proceden de la región de Aridoamérica, y otros de lo que se conoce como Mesoamérica.

Los primeros poblaron la parte superior de la península bajacaliforniana, antes de la llegada de los españoles; a ellos se les reconoce como pueblos indígenas nativos, y su reproducción social se basó en el seminomadismo, la caza y la recolección. Los indígenas de origen mesoamericano, llegaron como migrantes en la segunda mitad del presente siglo, procedentes del centro y sur del país; a diferencia de los primeros, la reproducción social de los indígenas mesoamericanos, se fundó en el sedentarismo y las prácticas de la agricultura.

* Investigadora del Departamento de Estudios Culturales. Colof.

Es difícil tratar de construir un retrato conjunto de grupos indígenas que poseen historias y formas de reproducción social y cultural tan distinta, sin embargo, en la actualidad tienen algo en común, dividen un territorio política y administrativamente constitutivo del estado de Baja California. Este hecho, arbitrario sin duda, ha definido en las últimas décadas, la dinámica de la reproducción de los cinco grupos nativos: Los quilihua, los paypay, los cumial, los cohimie, y los cucapá; así como de los grupos migrantes entre los que sobresalen por su número: Los mixtecos, los zapotecos, los triques, y los purépechas.

Pensando precisamente, si podemos nosotros hablar en el estado de Baja California, de pueblos, el concepto de pueblo indígena, pensaría en algunos elementos que se conjugan en esta definición que deriva un poco de los acuerdos de San Andrés.

Un primer aspecto, un primer elemento, sería la idea de un pueblo como una colectividad que participa de una unidad cultural, es decir una lengua, creencias básicas y comunes, ciertas instituciones sociales propias y formas compartidas, formas de vida compartidas; otro aspecto que se reconoce a sí misma como unidad; un tercero que comparte un proyecto común, con una voluntad de seguir comunidad y tener un futuro; y otro elemento que está relacionando esta colectividad con un territorio específico.

De este conjunto de elementos, los que considero más problemáticos para definir a los indígenas en Baja California como pueblos precisamente, son el proyecto común, es decir, la existencia y el empuje de un proyecto étnico y el concepto de territorio.

Como se muestra en el documento -y tal vez no alcance a exponer- el asunto del territorio define de manera problemática, tanto a los indígenas nativos como a los migrantes por diferentes razones. Los primeros han sido despojados paulatinamente de sus territorios originales, confinándolos en zonas empobrecidas y aisladas; los migrantes en tanto, están fuera de sus territorios de origen y aunque se han ido estableciendo como colonos en diferentes puntos del Estado, no se puede considerar o se tendría que plantear en forma novedosa, estos terrenos individuales como un territorio indígena propiamente dicho.

En general, la sobrevivencia de los pueblos indígenas en Baja California, ha sido asociado a tres factores, que bien define la realidad regional; el desierto, la migración y la frontera nacional.

La cultura del desierto define el conjunto de grupos indígenas nativos con su experiencia de emigración temporal, intraregional y transfronteriza; muchos de estos grupos eran transfronterizos desde antes, eran pueblos que estaban asentados y que fueron divididos al establecerse la frontera.

En el caso de los migrantes, también se modificó, eso se modificó y afectó, porque esta situación de frontera hizo que ellos se establecieran en una región que es colindante con un Estado nacional distinto.

Para esta inmigración de indígenas a Baja California, iniciada a mediados de este siglo, asociada con el desarrollo de las regiones agrícolas, los centros urbanos del estado y el desarrollo de la agricultura californiana en Estados Unidos, ya se tiene noticias de oaxaqueños que trabajaron bajo el programa de braseros de la década de los 40 en California, así como también la llegada de los primeros indígenas migrantes al Valle de San Quintín, en la década de los 50.

La presencia de indígenas migrantes en las ciudades del Estado, es más reciente y se ubica a principios de los 70, sobre todo en actividades como la venta ambulante asociada al turismo, el servicio doméstico y trabajo de jardinería.

De esta situación, de esta realidad, digamos- que enfrenta, un escenario de vitalidad étnica muy distinto, no sólo por el número que implica para cada tipo de pueblo indígena, unos los nativos, otros los migrantes; nosotros podríamos revisar a grandes rasgos, un escenario a cerca de cuáles son las políticas y el futuro de estas poblaciones.

El escenario indígena en Baja California, presenta un gran desequilibrio entre la vitalidad étnica de las poblaciones indígenas y nativas y las migrantes, asentadas en el Estado; la

población migrante indígena, es aproximadamente el 96.7% de toda la población indígena, es decir, si ustedes piensan solamente cerca del 4% son nativos, en número aproximadamente, se considera que hay 2 mil migrantes indígenas nativos distribuidos en estos 5 grupos étnicos; es decir, hay un número demográficamente, es una población en algunos casos en peligro de extinción. Entonces, esto marca una diferencia en términos de vitalidad étnica muy fuerte, pero no solamente en términos demográficos, sino también en términos de sus recursos, los recursos que han sido minados; y también de la forma como están expresando sus proyectos étnicos, que yo los he revisado a través de la existencia de organizaciones indígenas.

Entre los grupos nativos solamente existen 3 organizaciones indígenas, en tanto que en los grupos indígenas existen cerca de 25 organizaciones indígenas; esto también marca una diferencia de vitalidad étnica.

Como les decía, si bien esa vitalidad étnica no puede reducirse al número de población que integra a las comunidades indígenas nativas, su cuantía sí puede indicar tal vez, una difícil capacidad de resistencia y de agencia histórica para reproducirse no solo culturalmente, sino físicamente; así como la ausencia de interés en los gobernantes de este Estado, antes territorio en lo que fueron sus primeros pobladores.

Lejos de lo que se pudiera pensar, la llegada masiva de indígenas migrantes, tanto a zonas agrícolas, como urbanas del Estado, no sólo ha presionado la reorientación de las políticas gubernamentales hacia los indígenas bajacalifornianos, sino también ha estimulado el resurgimiento étnico de los nativos, al presentarse como una discusión discursiva de un indígena mexicano y como agentes de competencia ante el gobierno estatal y federal; pero esto no sólo ha derivado en una revitalidad étnica, sino también en espacios de conflicto por recursos entre los indígenas migrantes y los indígenas nativos, puesto que esa diferencia demográfica ha hecho que los indígenas migrantes tengan mucho más recursos y obtengan a través de sus movilizaciones mucho mayores logros.

Así parece que se abre un escenario conflictivo en ciertos espacios de coincidencia de los indígenas, dada por la competencia de estos recursos y por constituirse también como voceros ante las instancias gubernamentales. En forma diferenciada, parecen abrirse por lo menos dos líneas políticas estatales; el problema, el de la restitución de tierras y solución de conflictos alrededor de este bien común, a diferencia de los migrantes, para el caso de los nativos este elemento define la continuidad cultural de los indígenas nativos ligadas a los territorios de la península bajacaliforniana y la alta California. No resolver esta fuente de conflicto puede derivar en una desarticulación plena de las formas de reproducción social y cultural de estos grupos, tanto a los indicadores de salud, como de escolaridad, señalan en la necesidad de una política integral con las comunidades indígenas nativas, ya que las bajas tasas de escolaridad y los problemas de salud se asocian con la pobreza y el aislamiento geográfico cultural de estas comunidades.

Es paradójica la acción del gobierno estatal que enarbola un discurso bajacaliforniano, con un énfasis en el valor del pasado, y a la vez en la práctica derivado en el más hondo abandono de los representantes más antiguos de la Aridoamérica.

Es menester, por otro lado, reconocer la importancia de las corrientes migrantes indígenas, como fuerza de trabajo prioritaria para uno de los sectores más desarrollados de Baja California, como es la agricultura comercial, en especial en el municipio de Ensenada, donde se encuentra la región agrícola exportadora de mayor importancia en todo el país. El proceso de residencia de los migrantes indígenas durante las dos últimas décadas, ha iniciado a plantear retos de atención y participación de los gobiernos en sus diferentes instancias, con la aparición de un gran número de núcleos residenciales, tanto en el Valle de San Quintín, como en el Valle Maniadero, como en los puntos urbanos de Ensenada, Tijuana y Mexicali.

Estos nuevos residentes demandan terreno, vivienda y servicios, además de las necesidades culturales como la reproducción de sus tradiciones y su lengua original. Si bien, el territorio bajacaliforniano, tiene un sentido simbólico, distinto, para estos indígenas; el proceso de residencia establece una nueva relación con el territorio, que antes sólo era lugar

de trabajo y ahora se plantea como un lugar de vida y de permanencia de estos pobladores, cuyos hijos están naciendo y creciendo en este Estado fronterizo.

Entre las organizaciones de migrantes indígenas, existe una polémica muy importante, que está ahorita en este momento debatiéndose, que es acerca del retorno o la residencia, es decir, qué significa para estas grandes... grandes números de comunidades indígenas migrantes, seguir pensando en que van a retornar a sus territorios originales, o si para... precisamente para poder defender mejor sus derechos en este nuevo lugar, tienen que orientar su proyecto étnico, ya no a hacia los lugares del origen, sino hacia los lugares de emigración, ¿para qué? Para que puedan ser reconocidos plenamente como ciudadanos en el estado de Baja California. Esto es una polémica, una polémica muy fuerte, que yo creo que tiene que ver con estos procesos de autonomía y que plantea un reto para este foro.

LOS SUEÑOS AJENOS QUE SE VUELVEN PESADILLAS

Marcos Sandoval Cruz*

Bueno, les quiero decir que yo soy triqui, de San Andrés Chicahuaxtla, formo parte de un pueblo muy antiguo. Vivimos desde tiempo inmemorial muy cerca de las nubes, entre niebla constante, remontados en una de las muchas sierras de Oaxaca: Allá no han podido doblegarnos ni los colonizadores, ni los desarrollistas. Allá hemos podido mantener nuestra cultura y nuestras formas de gobierno contra todo y contra todos.

Desde que se tiene memoria, nos hemos gobernado a nosotros mismos, no siempre lo hicimos en forma pacífica y armoniosa, no siempre tomamos decisiones sabias y justas; pero siempre encontramos en nosotros mismos, en nuestra historia y nuestra cultura, las fuerzas morales y las habilidades políticas para enfrentar nuestros predicamentos y restablecer formas sensatas de convivencia; y la grave violencia que hemos padecido los

* Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca

triques en el último siglo, una violencia que se enfrenta continuamente hermanos con hermanos y parece no tener fin, se asocia claramente con un hecho decisivo.

Se nos divide y enfrenta desde afuera, por agentes económicos y políticos, se atizan nuestros enconos y se les lleva a una escala inmanejable y se desconocen continuamente nuestras propias capacidades, nuestra autonomía, las únicas fuerzas que pueden traernos la paz.

Mi pueblo ha sido continuamente zarandeado desde afuera, particularmente por partidos, gobiernos, iglesias u organizaciones no gubernamentales, que se acercan con la intención declarada de ayudarnos, con buena o mala fe; esas instituciones siguen dañando nuestra dignidad y autonomía.

En un tiempo en mi pueblo era un municipio. Creíamos que así podríamos articularnos mejor, con las estructuras del gobierno, hacer que esa instancia fuese como un gozne de nuestra relación con ella; acaso por la medida en que logramos así expresar dignamente nuestra autonomía, nuestra manera propia de hacer y de pensar, se nos despojó de ese carácter. Se nos convirtió en una agencia de un municipio de cabecera lejana y ajena, que desde luego no puede gobernarlos, pero tampoco nos deja que lo hagamos en paz.

Antes que mi voz, quisiera hacer oír la de mi pueblo. En 1994, cuando llegaron hasta nuestras tierras las noticias de lo que pasaba en Chiapas, discutimos muchas noches y días, por semanas lo que eso significaba para nosotros. Escuchamos todas las opiniones, obtuvimos más información y reflexionamos largamente sobre todo lo que oíamos. Finalmente, después de mucho pensarlo, escribimos una carta que en marzo enviamos a los zapatistas; les decíamos en ellas muchas cosas, pero quisiera citar aquí algunas ideas que seguimos acariciando desde entonces, y me parecen pertinentes para este foro.

Tenemos una lucha común, le dijimos, luchamos con ustedes por la libertad, la justicia, la democracia; con nuestros medios, con todo lo que tenemos, cultivando nuestros recuerdos, respetando a nuestros muertos y a nuestros viejos, renovando a los jóvenes, estamos y

estaremos con ustedes; queremos ser libres en nuestras propias comunidades -les dijimos también- queremos tener la libertad de hacer las cosas a nuestra manera conforme a nuestras tradiciones y nuestras esperanzas.

No queremos la libertad de los individuos y los intereses, para que los poderosos puedan hacer lo que quieran por todas partes, queremos la libertad que se da entre personas reales, entre hombres y mujeres que se conocen unos a otros en auténticas comunidades; y queremos que nuestras comunidades se relacionen libremente unas con otras con plena autonomía, queremos tener democracia en el país -les informamos. Una democracia capaz de respetar nuestra autonomía, nuestras decisiones y nuestro propio sistema de gobierno; queremos que un gobierno mexicano, democráticamente elegido, sea capaz de entender sus propios límites, para que no venga a imponernos lo que deciden sus burócratas. En nombre de cualquier ideología o para el programa que en cualquier sexenio se pone de moda, queremos que en ese gobierno estén representados nuestros pueblos, pero no para que nos gobiernen desde ahí; no para que sean usados para dar una apariencia de legitimidad a las acciones de gobierno, queremos que estén ahí para que nuestra voz sea escuchada, para que se detengan las intervenciones que no queremos, para que podamos plantear nuestros predicamentos cuando haga falta y podamos concertarnos con otros cuando sea conveniente.

Queremos como ustedes, la justicia -les dijimos- estamos ya cansados de las acciones y programas que en nombre de la justicia vienen a invadirnos y a imponernos prácticas e instituciones que nos son ajenas; queremos una justicia que surja de nosotros mismos, de las comunidades, para enfrentar juntos con dignidad y vigor, las mil caras de la opresión, de la explotación, de la violencia que los poderosos y gente común no indígena ejercen constantemente contra nosotros.

Ha llegado el tiempo nuestro, el tiempo de los pueblos indios -les dijimos entonces y seguimos diciendo ahora- pensamos que no hay prioridad más alta que la dignidad de los pueblos indios, que es hora de que la sociedad mexicana se conozca a sí misma en sus propias raíces y deje de padecer la vergüenza de hacer con nosotros lo que ha estado

haciendo desde que se fundó este país; respetar nuestra dignidad y nuestra autonomía será respetar la de todos los mexicanos. Desde que celebramos la reforma del artículo cuarto de la Constitución, cuando se reconoció que México está formado por diversas culturas, nos dimos cuenta de que no bastaba, ponía a los pueblos indios en el pasado pero no en el presente, y mucho menos en el porvenir del país; vimos como una amenaza a las reformas del artículo 27, guiada por obsesiones que desconocía nuestra realidad y nuestras esperanzas; en esa ocasión, como en muchas otras, nos preguntamos por qué nos seguíamos sintiéndonos mexicanos, tan mexicanos como el que más, a pesar de que los gobiernos de México y buena parte de su sociedad nos han ignorado y hostilizado siempre.

De esas reflexiones salió otra vez una conclusión clara, como expresión de nuestra cultura, nos sentimos responsables por el territorio que heredamos de nuestros ancestros, nos duele todo lo que lo hiere y tratamos de cuidarlo y hacerlo florecer.

Una de las cosas que le ha pasado a ese territorio, es ser México; lo que le pasa al país nos duele en carne propia, es tan nuestro como ese territorio; también debemos de ocuparnos de él, nuestros pueblos no quieren aislarse y mucho menos formar estados independientes; queremos existir a nuestra manera, en armonía con muchos otros mexicanos indios y no indios, que tampoco están satisfechos con el régimen político que se ha impuesto a todos, desde arriba y desde afuera.

Vimos siempre con ambivalencia la empresa educativa nacional, nos atraía su promesa de enriquecernos con las visiones y experiencias de otros, como siempre hemos hechos; pero también veíamos que llegaba con doctrinas que nos descalificaban y empezaba a socavar nuestra cultura desde la infancia, desde los primeros aprendizajes de nuestros niños.

Nada ha sido más dañino para Chicahuaxtla que la escuela, no acabaría nunca si empezara a contarles lo que nos ha hecho, nos educan llenando de edificios escolares, de cosas materiales nuestros espacios, sin satisfacer nunca las necesidades del espíritu del sentimiento.

Las escuelas han llegado a convertirse en la negación de nuestro conocimiento y valores, y en una nueva forma de sometimiento; en muchos casos, sólo llenan de imágenes y necesidades ajenas, la cabeza de niños y jóvenes para empujarlos lejos de la comunidad y exponerlos así a todo tipo de humillaciones y discriminaciones.

Tampoco acabaría si empezara a contarles todas las iniciativas que hemos tomado para reducir o compensar los años en la escuela, aprovechar cualquier elemento positivo que nos traiga, y satisfacer de maneras distintas, formales e informales, letradas o legas, con medios sencillos o instrumentos electrónicos, nuestra hambre interminable de saber.

El caso de la educación ilustra bien lo que queremos todos los pueblos indios, no buscamos crear nuevas divisiones administrativas o formar nuevas instancias dentro de la estructura del gobierno general, como parece que se ha hecho a otros países en relación con los pueblos indios.

Queremos que se reconozca que los pueblos indios tienen formas propias de gobierno, de vida, de administración de justicia, que corresponden a visiones filosóficas y políticas distintas a las del Estado nacional, pero que no están en contradicción con él; estamos convencidos de que podría coexistir adecuadamente esa pluralidad de visiones dentro de un régimen general común. Si se establecen con claridad los límites y ámbitos de cada régimen, existen condiciones de mutuo respeto.

Seguimos con atención los diálogos de San Andrés, participamos de las negociaciones que llegaron los acuerdos, y encontramos que nuestras voces se habían quedado reflejadas en ellos, por eso los hicimos nuestros.

Estudiamos también y analizamos con cuidado el texto de la Cocopa, para hacer con los acuerdos una reforma constitucional, participamos en debates y movilizaciones por meses y años, para valorar con cuidado sus términos; hemos examinado también otras propuestas. Con toda serenidad y firmeza, queremos decirles señores diputados, que en ese texto están bien reflejados lo que ahora queremos; no es todo lo que queremos, pero es un buen punto

de partida para que este país al que pertenecemos y que nos pertenece, no siga pretendiendo que no existimos para que nunca más se pretenda hacer sin nosotros.

Confiamos en que esta legislatura logre estar a la altura de su enorme responsabilidad y sepa al fin, escuchar a sus pueblos indios; el estado mexicano nos ha negado por casi 200 años, ha llegado el momento en que al reconocernos pueda verse así mismo, a los mexicanos, en vez de seguir obsesionado con sueños de afuera que siempre se nos convierten en pesadilla.

EL PROCESO DE AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA CUESTIÓN DE GENERO.

Tomasa Sandoval Ceras*

Organización Purépecha Zapatista, Michoacán, México. El título de la ponencia o de la plática, el proceso de autonomía de los pueblos indígenas y la cuestión de género; presenta Tomasa Sandoval Ceras .

Como primer aspecto, tenemos una especie de introducción que dice así: Pareciera ser ocioso, pero consideramos necesario volver a insistir en que a más de 508 años de invasión europea, la sobrevivencia de los pueblos indígenas, se mantiene en condiciones de miseria, marginación, explotación, manipulación, discriminación y opresión históricas, que se reflejan actualmente en la existencia de las relaciones asimétricas y de desigualdad entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional dominante.

Este proceso también se ha caracterizado como un proceso de genocidio, etnocidio, contra los pueblos originarios del continente, conocido como América Latina. Es decir, a raíz de la conquista colectiva, incluyendo a los... incluyendo a hombre y mujeres, hemos sido incluidos... hemos sido excluidos de los grandes proyectos de nación, ni en la colonia, ni

* Organización Nacion Purepecha Zapatista

en la dependencia, ni en la reforma, ni en la Revolución Mexicana, ni en el actual proyecto neoliberal, ha habido un lugar digno y justo para los pueblos indios de México. Sin embargo, este proceso de exterminio, no ha logrado acabar con nuestros pueblos, por el contrario, la historia... la historia no oficial, registra muchos momentos de resistencia, de lucha y rebelión, como en el caso de 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

De los pueblos indígenas, por más de 500 años en contra, de la invasión del esclavismo, del colonialismo, del liberalismo, del capitalismo y del neoliberalismo; no sólo para defenderse del trabajo forzado y de los despojos como antes; no sólo para recuperar las tierras arrebatadas o luchar contra los tributos y los altos impuestos, sino actualmente para demandar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas.

Como segundo aspecto, tenemos los pueblos indígenas y el derecho de autonomía.

La autonomía es parte del conjunto de derechos que le corresponden ejercer a los pueblos indígenas como lo establece el convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, que se complementa con otros derechos como el de la tierra y territorio; sistema normativo propio, etcétera... El derecho de la autonomía es una demanda centrada el movimiento indígena nacional y del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional; que nosotros y nosotras consideramos tiene su fundamento en el principio... en los principios jurídicos.

El primero, que señala que es un primer... el primero que señala, que el que es primero en tiempo, es primero en derecho; razón que le corresponde a los ahora llamados pueblos indígenas, por existir mucho antes de la conformación de las sociedades nacionales, derivadas de la invasión europea.

El segundo principio, es de la libre determinación que se expresa de manera concreta a través del ejercicio de distintos niveles de autonomía y autogobierno, de sociedades específicas denominadas pueblos indígenas.

Para ser más precisos, la autonomía es la facultad que tienen los pueblos de decir su propio destino, considerando su pasado y previendo su futuro; o como se estableció en el foro nacional indígena, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en enero de 1996, la autonomía

es una distribución de competencias entre distintos ámbitos de gobierno, que van desde lo comunal, municipal y regional; y debe ser reconocido como una diversidad de modelos, niveles, de acuerdo, a las necesidades y condiciones de cada pueblo; integrado el derecho a la territorialidad, al autogobierno, al ejercicio pleno de nuestros sistemas jurídicos, al desarrollo económico, social y cultural, y el control de nuestra seguridad interna; o como se establece en los acuerdos de San Andrés, Sacanchem de los Pobres, Chiapas; firmado entre el gobierno federal y el acuerdo... y el EZLN, en febrero de 1996, en que reconocidos los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho.

El derecho a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, asegurando la unidad nacional, podrán en consecuencia decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente.

Posturas similares competentes... posturas similares comparten el Congreso Nacional Indígena y muchas organizaciones indígenas del país.

En este sentido, es infundado el temor de algunos sectores de la sociedad nacional en un supuesto separatismo de los pueblos indígenas, y una supuesta fragmentación de la unidad nacional.

Tercer aspecto, la autonomía y la cuestión de género. Señalábamos al principio que se observa relaciones asimétricas entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, caracterizadas por una enorme subordinación de los pueblos indígenas hacia la sociedad dominante o nacional, ésta relaciones de desigualdad permean a las comunidades indígenas y repercuten más negativamente en las mujeres, al grado de expresarse en lo que se caracteriza como una triple opresión; en el momento actual las mujeres indígenas viven en condiciones de extrema pobreza, trabajo no remunerado, alto grado de analfabetismo, insalubridad, violencia intrafamiliar, prácticas y costumbres patriarcales y lesivas a su condición de mujeres, negando todo valor a su actividad y dando mayor reconocimiento al trabajo del hombre. Hoy hemos tomado conciencia de que ésta situación es injusta y se requiere construir nuevas relaciones con trato justo y digno para todos y todas. Hoy

alzamos nuestra voz, para reclamar que también tenemos derechos específicos dentro de la sociedad, porque somos a la vez, amas de casa, agricultoras, artesanas, comerciantes, cuidadoras de ganado, cuidadoras de los escasos bienes, cuidadoras de los hijos, transmisoras de la cultura, depositarias de valores, hasta jefas de familia, al quedarnos solas por la migración o el abandono.

Por eso, insistimos en que una nueva relación en que haya autonomía para las mujeres indígenas, que nos permita ser escuchadas en las asambleas comunitarias, asumir cargos, tener derecho a la tierra en forma directa, tener derecho a la capacitación en todos los aspectos; a construir espacios propios y a la organización como mujeres para caminar conjuntamente con nuestros compañeros en la construcción de nuevas relaciones con equidad y justicia. Por ello, nos unimos al llamado que hace en los mismos, en el mismo... en los mismos acuerdos de San Andrés, que señalan lo siguiente:

Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas como mujeres, como indígenas y como pobres, exigen la construcción de una nueva sociedad nacional con otro modelo económico, político, social y cultural, que incluya a todas y todos los mexicanos.

Cuarto y último... componente. Exhortación a los parlamentarios y al gobierno federal.

El momento actual que viven los pueblos indígenas de México es crucial, ofrece dos escenarios; o se avanza en el reconocimiento pleno de los derechos como pueblos indígenas, o nuevamente seremos excluidos del gran proyecto de nación.

Hoy existen condiciones para iniciar una nueva relación entre los pueblos indígenas, los pobres... perdón, los poderes de la Unión y la sociedad nacional en un marco de justicia y equidad para todos y todas; es necesario empezar a saldar dignamente la enorme deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos indígenas, ya que gran parte de la riqueza nacional se ha construido con el trabajo, con el esfuerzo, con la sangre de nuestros hermanos y hermanas indígenas. Por lo tanto, humildemente me permito exhortar a los diputados y senadores de toda la fracción parlamentaria, a que asuman una actitud honesta

y valiente, otorgando su voto a favor de la aprobación de los acuerdos de San Andrés, conforme a la iniciativa de la Cocopa, en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

Al Gobierno Federal, para que dé cumplimiento a las tres señales que demanda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y se restablezca el proceso de diálogo; a la sociedad civil para que sea garante de paz en todo el país, pero principalmente en las zonas indígenas.

UNA REFLEXIÓN PERSONAL

Aracely Burgette*

Buenos días a todas, a todos; agradezco mucho la invitación a los organizadores. Soy Aracely Burgette, de CIESAS sureste, vengo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Realmente fue difícil para mí decidir de qué manera aprovechar estos diez minutos, tomando en cuenta que la mayoría de los participantes que iban a estar en este evento, son expertos conocedores del tema; de tal forma, que decidí una... compartir con ustedes mi experiencia, es decir, intentar una reflexión a partir de lo que yo he vivido en dos etapas de mi vida. Una, es trabajando aquí en el Congreso como apoyo a dos diputados indígenas; y una más, en mi experiencia de trabajo en Chiapas.

El primer asunto que les quiero compartir, es que en 1988... 89, cuando trabajaba de... apoyando a un diputado indígena aquí en el Congreso, y llegó la propuesta de reforma del artículo cuarto, por la vía del Instituto Nacional Indigenista; en ese momento, la reacción de los diputados –y me estoy refiriendo a todos los diputados de todos los partidos, no solamente del partido, en ese momento del PRI, sino de todos los partidos de oposición- su reacción inmediata fue ignorarla. Es decir, eran las épocas en donde este asunto se le llamaba las congeladoras, es decir, simplemente se mandaban las iniciativas.

* CIESAS-Chiapas

Y estoy llamando la atención de esto, porque la propuesta venía directamente de la oficina del Presidente; esto era un hecho verdaderamente insólito, era la primera ocasión que en la propuesta que venía del Ejecutivo, de un presidente de la República, en una época de presidencialismo en este país, esa iniciativa no fuera atendida.

Tuvieron que pasar casi 3 años, en una coyuntura en donde se tuvo que pactar, se tuvo que negociar, a nivel de las cúpulas de los partidos, para que la reforma al artículo cuarto, se pudiera realizar; y se realizó el último día de sesiones de la fracc... de la LIV Legislatura del Congreso. Fue un momento de mucha tensión, porque se pensaba que ya no iba a salir.

¿Y por qué era importante esa reforma al artículo cuarto, aún cuando en ese momento se veía con grandes limitaciones? Porque era necesario, porque sino iba a contravenir al Convenio 169, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que ya iba a entrar en vigencia en ese mismo año, en mil novecientos ochenta... en 1990, perdón.

Entonces, para nosotros los que trabajábamos en esta iniciativa, era fundamental que el artículo cuarto estuviera incorporada a la Constitución, porque sino iba a contravenir; pero lo mismo había pasado en el Senado de la República. En el Senado, los senadores aprobaron, le dieron el aval al Convenio 169 de la OIT, también con una decisión del presidente.

Tiempo después, con otro diputado con el que trabajaba, se vino la reforma al artículo 27. El documento de considerandos del presidente Salinas, establecía el reconocimiento del derecho –decía textualmente: “Del derecho de territorio a los pueblos indígenas” –así salió la propuesta de la oficina de Salinas. Sin embargo, cuando llegó al Congreso, esa frase fue modificada, y en la fracción Séptima –me parece que el segundo párrafo- se quedó algo así como: “Se reconoce la forma de propiedad de los grupos étnicos”, es decir, quedó en nada; fue totalmente vaciado de sus contenidos.

Posteriormente, esa misma reforma, cuando se hizo la ley reglamentaria, en el artículo 106, se dijo que esos presuntos derechos agrarios de los indígenas, se iban a reglamentar, pero en el artículo cuarto.

El balance que yo quiero mencionar con este primer fragmento de mi intervención, son fundamentalmente dos cosas: Una, que las propuestas cuando salen del Ejecutivo, siempre salen con un perfil más alto, es decir, lamentablemente –y digo lamentablemente, el presidencialismo ya se acabó- porque, precisamente por el presidencialismo a este Congreso, llegaron el artículo cuarto, el Convenio 169 –y reitero- una propuesta bastante alta que salió de la oficina de Salinas.

Sin embargo, cuando llegó al Legislativo, el perfil se bajó y quedó prácticamente en nada; y lo que sigue es realmente preocupante, porque lo que debe de seguir teóricamente después de una vez hecho las reformas legales, las reformas constitucionales, que supone los acuerdos de San Andrés, es su reglamentación. Y resulta, que a más de 10 años de reforma en el Artículo cuarto, de que el país aceptó el convenio 169, todavía no tenemos leyes reglamentarias.

Entonces, de qué nos va a servir -por supuesto que es importante- pero la interrogante es, ¿cuáles van a ser los mecanismos?; ¿cuáles van a ser aquellas instancias que van a garantizar y le van a dar seguimiento a que las leyes reglamentarias continúen? Realmente es un gran mérito y un gran esfuerzo el que se han estado haciendo desde 1994, para que los derechos indígenas puedan ser incorporados a la Constitución –y me refiero concretamente al derecho de autonomía- pero recordemos que aún las reformas al artículo cuarto, cuando tienen un perfil muy bajo, no han estado en el interés –insisto- del Congreso, de los diputados, de los senadores, para hacer este trabajo.

Mi temor es que los... una vez más y porque lo vi estando fuera del Congreso, siempre otro tipo de negociaciones son prioritarias, y los partidos suelen ceder en sus negociaciones de cúpulas, entre que: “ yo te doy esto, y tú me das esto”, para que los derechos indígenas frecuentemente queden menos valuados.

Lo dejo pues, como una preocupación de la necesidad de crear una instancia, que le dé seguimiento para coadyuvar con los diputados y que hayan propuestas cotidianamente planteadas, para tratar de bajar la reglamentación, no solamente de lo que vaya a quedar en los acuerdos de San Andrés, sino a las otras cuentas pendientes que están ahí, como es el caso concreto del convenio 169 de la OIT.

La otra cuestión que quiero... ¿por favor, me pueden indicar mi tiempo? Gracias.

La otra cuestión que quiero compartir con ustedes, es la... lo que significa en las reformas legales en los estados.

Nosotros tenemos en Chiapas una reforma legal que vino desde mayo del año pasado, el 89; de una legis... de una reforma legal unilateral del gobierno de Albores, que de acuerdo con su versión estaban reglamentando los acuerdos de San Andrés; sin embargo, yo puedo sacar el... o traigo como muestra, dos flores para mostrar las contradicciones que esto tiene.

En primer lugar, me quiero referir al asunto que tiene que ver con la creación de los juzgados de Justicia y Paz Indígena, y que se refiere a la impartición de justicia en las comunidades. La reforma de... desde antes de la reforma de mayo, se habían hecho reformas al sistema judicial, que creaba la figura de los juzgados de Paz y Conciliación Indígena.

Estos juzgados tienen como propósito, ser un espacio de resolución de conflictos, de las comunidades del municipio, porque la ponen en la cabecera municipal, del municipio, casi siempre estamos hablando de municipios con una población mayoritariamente indígena; me voy a referir solamente al caso de Los Altos, que es el que conozco.

Allí, la ley dice... la ley dice que las autoridades tradicionales serán auxiliares de la administración de justicia, y sus opiniones serán auxiliares de la... y sus opiniones serán consideradas en los términos de la legislación procesal respectiva, para la resolución de las

controversias que se sometan a la jurisdicción de los juzgados de Paz y Conciliación Indígenas.

También dice... entonces quiero señalar el papel de auxiliares de las autoridades tradicionales, y también dice que el juez y los jueces; el juez auxiliar y el juez propietario, van a ser nombrados por el sistema judicial.

Cuando uno lee la ley, lo primero que uno percibe es una gran aberración; una gran aberración, porque todo está decidido desde el sistema judicial. Y el papel de los auxiliares como dice la ley, pues realmente uno presume que es marginal, sin embargo yo que he estado haciendo trabajo de campo en los juzgados, he percibido, he estado viendo que la impartición de justicia en los juzgados, lo están realizando los indígenas más o menos; y digo más o menos, porque ahora está en un edificio con condiciones más cómodas de la resolución de sus conflictos.

El papel de los auxiliares, de estos presuntos auxiliares, es mucho más activo de lo que señala la ley; el juez, que teóricamente debería ser nombrado por el sistema judicial, es nombrado por las mismas autoridades.

Entonces, tenemos aquí un caso, exactamente al revés del otro que voy a presentar, un caso en donde la ley está diciendo cosas que no se hace; el funcionamiento del... -le estoy hablando de una institución nueva, que acaba de nacer teóricamente como resultado de una reforma legal, en donde en realidad lo que está sucediendo, es que los municipios están aplicando sus propios sistemas jurídicos, más allá de lo que la ley está diciendo.

Otro asunto también importante en esto mismo, es el concepto de usos y costumbres. Cuando uno llega a ver, buscando los usos y costumbres, no se los encuentra –estoy hablando de los hechos. Cuando los jueces comunitarios y las autoridades comunitarias, escuchan a las partes, no están pensando en dónde termina mi uso y mi costumbre, están pensando en la justicia.

Yo fui testigo del caso de una mujer que llegó a pedir justicia –textualmente dicho- pedir justicia; y le preguntaron a la mujer, ¿qué quieres? -Pues, yo quiero que en mi separación con mi pareja haya repartición de bienes; él se lleve una parte y yo otra–, y así se resolvió. Miren, si los usos y las costumbres se hubieran definido, el marco jurídico de este acuerdo, simplemente no se hubiera resuelto así, porque cualquier persona que estuviera de observadora y le dijera: “Señor, los usos y costumbres, las mujeres, los... las resoluciones, no terminan de esta manera”.

Entonces, desde esta lectura pequeña, de una experiencia que solamente puedo hablar por Chiapas, y concretamente de lo que yo he visto, es que yo estoy pensando en la importancia del reconocimiento, no de los usos y las costumbres, sino de los sistemas jurídicos normativos, los sistemas jurídicos propios, con la garantía de los derechos humanos.

Yo sí comparto la garantía de los derechos humanos, que esté acotando la impartición de la justicia. Y quiero hacer –para terminar- el otro caso, es decir, el caso totalmente extremo, que es lo que... que es la elección de las autoridades... locales y las autoridades municipales.

De acuerdo con las reformas legales que hizo Chiapas, dice textualmente: “Esta Ley, reconoce y protege a las autoridades tradicionales, nombradas por consensos de sus integrantes y conforme a sus propias costumbres”.

El problema es que en Chiapas no hay autoridades tradicionales, es decir, Chiapas solamente la región Altos tiene el formato de autoridades tradicionales entendidas, como se entiende en otros pueblos; lo que los pueblos tienen, son sus autoridades propias, nombradas por ellos mismos mediante sus propios mecanismos, la asamblea y otras formas organización para nombrar. Si el riesgo es que nosotros vamos a tener elecciones el próximo mes de octubre; si esta ley se aplica, es absolutamente peligrosa, porque además con la ley dice que garan... el Estado garantizará que los mecanismos, que la ley proteja a las autoridades tradicionales.

Afortunadamente, nosotros tuvimos cambio de gobierno en Chiapas, pero yo me imagino un escenario... esta ley aplicada en un escenario anterior, hubiera sido terrible, porque solamente los tradicionales articulados a un partido x, iban a hacerlos legalmente reconocidos.

Entonces yo apelaría a una redacción, que reconociera los sistemas políticos indígenas, sistemas políticos de elección y nombramiento de sus autoridades; no tiene por que decir tradicionales, usos, costumbres, sino las propias, las que las propias comunidades se quieren dar, con una garantía que haya pluralismo político.

Si nosotros no garantizamos el pluralismo político, tenemos el riesgo de la intolerancia, el riesgo de que bajo los usos y las costumbres no se garantice el derecho de las minorías, el derecho de otras... de otros sectores sociales que tiene que estar representados -por eso decía yo- sólo hablo por Chiapas. En Chiapas, los pueblos son diversos, son plurales, con clases internamente, y esta realidad tiene que ser reflejada en la ley; la ley no puede pensar en el pasado, tiene que pensar hacia el futuro.

SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA DE LA NACIÓN

Aldo González*

Llegó la hora del Congreso de la Unión. Toca hoy a este Poder de la República, contribuir a construir la paz en México y a saldar la deuda histórica que la nación tiene con los pueblos originarios de estas tierras; no es tiempo ya de pensar en los intereses políticos y económicos del grupo o grupos, a los que cada partido representa, sino de tener presentes los intereses de los pueblos indígenas a este país.

La propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación, es una propuesta que los pueblos indígenas de México hemos hecho nuestra; y en ese sentido, creemos que es muy

* Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca

importante que el Congreso de la Unión pueda respaldar esta decisión, que hoy los pueblos indígenas hemos hecho y estamos exigiendo el reconocimiento. Sabemos que lo que en esta iniciativa se presenta, no recoge todas las aspiraciones del movimiento indígena nacional; sabemos que hay muchas aspiraciones que van a quedar pendientes, sin embargo, a pesar de esta situación, creemos que es el consenso mínimo que podemos alcanzar todos los mexicanos.

A lo largo de este foro se han presentado algunas propuestas que van a más allá de lo que dice la iniciativa de la COCOPA; en este foro no han estado presentes las posiciones que tratan de reducir esta iniciativa.

Y en ese sentido, yo quisiera hacer el llamado entonces a estas dos posiciones; a compañeros indígenas que quieren jalar hacia arriba y a otras posiciones que quieren jalar hacia abajo, que pongamos sobre la mesa el interés nacional, que pongamos sobre la mesa la decisión histórica que hoy le toca al Congreso tomar; no demos un paso atrás, la propuesta de la COCOPA, es la propuesta que México merece.

A mi me han pedido en esta ocasión, que pueda tocar el tema relacionado con las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, si bien éste es uno de los asuntos que se toca en la propuesta de la COCOPA, al hablar de los recursos naturales; también es un asunto que queda pendiente, que no se trata en su cabalidad, es muy importante que recordemos que en el formato de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, hay otras mesas que están pendientes.

Y que en la medida en que se creen las condiciones para la reanudación del diálogo, será necesario que esos otros temas puedan abordarse para así recoger todas las aspiraciones de los pueblos indígenas y del resto de la sociedad.

Me refiero a la falta... a una de las aspiraciones que tiene que ver con los principios de Emiliano Zapata, “La tierra es de quien la trabaja”, “Tierra y libertad”. Estos principios de la Revolución Mexicana, fueron traicionados al hacer la reforma al artículo 27, en 1992.

Creemos que es necesaria una modificación al 27, sin embargo, yo quisiera decir y reafirmar lo que dije en un principio; no estamos pidiendo la reforma al 27 en este momento, para que se reconozcan los derechos indígenas; es una de las asignaturas pendientes que tendrá el Congreso de la Unión, una vez que se apruebe la iniciativa de la COCOPA.

Es necesario que se busque también en relación con este asunto de las tierras y los territorios, que... se puedan recomponer las reglamentaciones, para que los... procedimientos que se toman hoy para resolver los asuntos agrarios, puedan favorecer realmente a los pueblos indígenas.

El establecimiento de procedimientos y mecanismos para la regulación de las formas de propiedad indígenas y de fomento a la cohesión cultural, es ese asunto pendiente.

En los acuerdos de San Andrés, se menciona que el tema agrario deberá examinarse a plenitud en la mesa de bienestar y desarrollo, hasta donde entiendo, esto tendrá que hacerse una vez que se reanude el diálogo.

Es necesario recordar que el actual territorio de México, está sentado sobre los territorios que antes de la invasión española, fueron de los pueblos indígenas prehispánicos. Las mejores tierras para la agricultura, fueron ocupadas por los europeos y se empujó a los pueblos indígenas a las regiones más agrestes; con la llegada de la Independencia y la construcción del Estado mexicano, se asignó la propiedad originaria de estas tierras, a lo que hoy se denomina en la Constitución, la nación mexicana; las cuales, conforman junto con las aguas el territorio nacional.

Durante la época de la Reforma, los liberales mexicanos interesados en impulsar el desarrollo económico del país, expidieron la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos y de las comunidades; provocando con su ejecución, que las comunidades

indígenas perdieran más tierras, las cuales pasaron durante la segunda mitad del siglo XIX, a muy pocas manos.

La concentración de la tierra en manos de los latifundistas, y otras condiciones de explotación y opresión que vivió el pueblo mexicano de principios del siglo XX, provocaron la Revolución Mexicana; de los revolucionarios, el que mejor expresó la voluntad de los indígenas y campesinos, fue Zapata: “La tierra es de quien la trabaja” y “Tierra en libertad”, son principios que hoy continúan vigentes.

Después de estas etapas de cercenamiento y recuperación parcial de las tierras, de las comunidades indígenas, hoy cuando hablamos de los territorios de los pueblos indígenas, entendemos que estos han sido reducidos a las tierras que actualmente nos reconoce la ley; y son la totalidad del *hábitat* de las regiones que nuestros pueblos usan u ocupan de alguna manera, como lo expresa el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Pueden estar seguros que no reclamaremos los territorios originales de nuestros abuelos prehispánicos, y no es nuestra intención que los territorios indígenas sean espacios donde se ejerza una soberanía que ponga en riesgo el territorio mexicano.

Nuestras propuestas han sido claras, el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos se hará en un marco de autonomía que respetará a la soberanía nacional.

Los recursos naturales que se encuentran en nuestras tierras y territorios, han sido conservadas por nuestras comunidades indígenas, gracias a las prácticas de modelos de desarrollo comunal, que han sido probados por cientos de generaciones; si comparamos los lugares del país donde están asentados los pueblos indígenas, con los lugares donde existe mayor número de especies vivas en su *hábitat* natural, veremos que hay una gran coincidencia entre estas dos regiones; son los lugares donde ha impulsado el desarrollo capitalista donde hay mayor contaminación y degradación del medio ambiente, el entender a la tierra como nuestra madre, y los recursos que en ella se encuentran, como nuestros

hermanos, nos ha permitido conservarlos a nuestro lado. Hoy tenemos la firme intención, que esto siga ocurriendo con las generaciones futuras.

El desarrollo comunal es posible, porque muchas de nuestras comunidades han conservado la propiedad comunal de la tierra, esto ha permitido que cuando se realice el aprovechamiento de los recursos naturales que ahí se encuentran, se procure hacerlo de manera racional; sin embargo, no faltan intereses que trastoquen estos principios, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, después que las comunidades forestales recuperaron sus bosques, de manos de dos compañías que los explotaban; una particular y otra paraestatal, muchas de ellas decidieron cortar sólo la mitad de la madera que permitiera sacar la dependencia encargada de otorgar los permisos, con la intención de provocar un menor impacto sobre el medio ambiente.

Un estudio reciente ha informado a las comunidades, que no podrán aprovechar por mucho tiempo más la madera, ya que el grosor de los árboles ha disminuido sensiblemente; se supone que la Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca), tendría que haber otorgado permisos, de tal manera que el aprovechamiento fuera sustentable; sin embargo, los permisos otorgados siempre fueron por encima de estos valores, buscando siempre el beneficio de los capitalistas de la madera y trastocando los principios comunales.

El acceso colectivo al uso y disfrute de los recursos naturales de la tierras y territorios de las comunidades y pueblos indígenas, no significa que se coartará la libertad, que cualquier mexicano ciudadano indígena o no indígena, tiene para poder hacerlo, en otro régimen de propiedad. Si un indígena puede comprar tierras bajo el régimen de pequeña propiedad, podría usufructuarlas como mejor le convengan -aunque esto lo considero muy difícil- podrá estar seguro de que la comunidad no se las expropiará; lo que sí quiero enfatizar, es que la propiedad colectiva de la tierra, queremos que siga siendo colectiva, y en consecuencia, el aprovechamiento de los recursos que en ella se encuentra.

UNA IGUANA RECORRE EL MUNDO

Enedino Jiménez*

Una iguana recorre el mundo, pueblos del universo, alertas Juchitán vive; los pueblos indígenas de México caminan por su libertad.

Voy a hablarles hermanos y hermanas, acerca de la concepción de que la defensa del territorio de nuestras comunidades indígenas, es también sustancialmente, la defensa de nuestra cultura.

La resistencia de los pueblos originarios de México, ante las distintas formas de colonialismo que han... que las han sometido desde hace más de 500 años, les ha permitido seguir existiendo en los albores del siglo XXI. En el Istmo de Tehuantepec, tan codiciado por los colonizadores españoles, los invasores franceses y el imperialismo yanqui; nuestras comunidades indígenas han protagonizado hechos que testimonian su voluntad de vivir en un país libre, autónomo y pacífico.

Así, la memoria de los pueblos del Istmo, registra la lucha de los zapotecas de Juchitán, por el respeto a sus títulos primordiales en 1836; por la defensa de sus bienes comunales contra la decisión del poder central, por consecionar las Salinas de las costas de la región, José Meléndrez (?), encabezó entonces nuestra lucha.

En 1860, los colonizadores españoles recibieron la primera gran protesta de esa época, en lo que se llamó: “La rebelión de Tehuantepec”. Los invasores franceses fueron derrotados el 5 de septiembre de 1866, en Juchitán.

Representa esa lucha sustancialmente el reclamo al derecho de vivir con libertad en nuestras tierras, pero también significa el reclamo de seguir produciendo nuestra cultura.

* COCEI

En los primeros años de la Revolución Mexicana, los diputados constituyentes: José F. Bustamante, de Juchitán; y Crisóforo Rivera de Tehuantepec, presentaron la iniciativa de creación del territorio del Istmo, en 1916; fue el intento en... el marco de la Constitución del nuevo Estado mexicano, de que se nos tomase en cuenta.

En todos los casos mencionados, yace en el fondo el supremo interés del ejercicio de la autonomía traducido en el derecho histórico de posesión de la tierra; pero recordemos que en la cosmovisión zapoteca, la tierra es la madre de todo lo que vive; ella produce no sólo los frutos para nuestra existencia, sino que de la interrelación con ella, y en general, con la naturaleza, también se producen nuestros sistemas de saberes y nuestra cultura, que no es la del hombre económico –como dijera el maestro, Gustavo Esteva (?) Figueroa- sino la del hombre comunitario, representan dos maneras diferentes de concebir el mundo; luego entonces, dos culturas distintas.

En ese sentido, la lucha por la tierra, es también la lucha por la resistencia cultural; y si la lengua es la síntesis de lo que representa la concepción del mundo que los pueblos tienen, la sobrevivencia de ellas, es por supuesto también una demanda sustancial de nuestras comunidades; de ahí que en la región del Istmo de Tehuantepec, el zapoteco sigue vivo, como consecuencia de esa lucha histórica de los zapotecas, mixes, chontales, zoques y nuestros paisanos de las comunidades mareñas, por sobrevivir.

De ahí que este foro de los pueblos indígenas de México ante la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, ha de acumular las propuestas que el Congreso de la Unión en sus dos Cámaras, habrá de discutir con plena conciencia, para que los que hemos sido marginados del proyecto histórico o de los proyectos de nación mexicana, ahora se nos tome en cuenta, se nos incluya, no de rodillas, sino de pie; caminando, en la búsqueda de nuestra libertad -como dije al principio.

No obstante, la voluntad ciudadana expresada por los mexicanos el 2 de julio de 2000, en las urnas electorales significó sin duda el sentimiento de una gran necesidad de cambios en

nuestra vida nacional, en los órdenes económico, político y social. En el orden político el dictamen ciudadano fue la sustitución priísta por el panista; no expondré aquí las causas que motivaron ese resultado, pero es claro que lo que los mexicanos y mexicanos deseamos, es el mejoramiento de nuestras condiciones, existencia como individuos, como pueblo y como nación; para ello, es imprescindible el ejercicio de una política de Estado independiente, de los centros de poder económico mundial y sensible a las demandas y propuestas de todos los mexicanos. Pero principalmente, a la de quienes desde hace más de 500 años hemos sido marginados en este país y que desde el primero de enero de 1994, tomamos la decisión indeclinable de establecer el reconocimiento de nuestros derechos en nuestra Constitución Política federal y en consecuencia, en la Constitución Política de cada entidad federativa.

Digo: “Tomamos”, porque no sentimos parte del movimiento Zapatista en Chiapas.

En tal virtud, la iniciativa de reforma constitucional, debe ser suficientemente discutida en el Congreso de la Unión, con la suficiente conciencia de que los que... han sido y siguen siendo los pueblos y comunidades indígenas de este país; también con la suficiente seguridad de que la aprobación de esa ley, representará el inicio de un desarrollo realmente sustentable de la patria mexicana, en los inicios de este tercer milenio; pues se incluirá a quienes -como he dicho- hemos sido excluidos del proyecto nacional, a los hombres y mujeres de los pueblos originarios de este país.

Y bajo estas consideraciones... además de las reformas a los artículos: 4º, 18,26, 53, 63, 115 y 116, que la Ley de la COCOPA propone, deben agregarse las que corresponden a los artículos: 3º, 7 y 27, constitucional –desde mi punto de vista.

En cuanto al artículo cuarto, es pertinente insistir que la iniciativa en cuestión propone como segundo párrafo de ese artículo, lo siguiente: Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional, en los que reconocerán su herencia cultural.

El texto en mención, debe formar parte en realidad, del artículo tercero, constitucional, como ayer –me parece- lo afirmaba el maestro Natalio Hernández.

En la idea de reconocer constitucionalmente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas, el artículo tercero, también debe ser reformado en su segundo párrafo, relativo a los fines de nuestro proyecto educativo nacional; que textualmente dice: “La educación que imparta el Estado, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y fomentará en él a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”.

Bajo mi propuesta, considero que debe decir: “La educación que imparta el Estado, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; y fomentará en él, a la vez, el reconocimiento de la existencia de nuestros pueblos originarios. El amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”.

El artículo séptimo, constitucional, no hace mención a la función social de los medios televisivos, solamente alude lo relativo a la prensa; bajo esa consideración, considero que el artículo séptimo constitucional debe establecer textualmente que el ejercicio de los medios de... debe establecer textualmente, que la función social de los medios de comunicación colectiva, contribuirán al logro de los bienes educativos establecidos... que los fines educativos establecidos en el artículo tercero constitucional, aprobada esta reforma, la Ley General de Educación, podrá establecer la obligatoriedad de los medios, a publicar y difundir programas, en los que la lengua indígena tengan cabida; que beneficien el desarrollo educativo y cultural de nuestras comunidades.

En relación al artículo veintisiete, creemos y lo reiteramos, que debe de rescatar nuevamente el espíritu original, que gracias a la lucha Zapatista, tuvo... reciente hasta hace algunos años.

No podemos llegar en esta jornada en que aspiramos a ser reconocidos en el nuevo proyecto de nación, de rodillas; tenemos que reclamar el reconocimiento pleno, al derecho de explotar nuestras tierras y usufructuar todos sus beneficios.

No debemos olvidar, que nuestra sociedad es clasista, y la composición del Congreso de la Unión, está... integrada la representación de esas clases; cada una defenderá sus intereses de clase.

Somos la mayoría, la voz de la mayoría; en esta ocasión debe prosperar. Ciertamente, en un proceso de negociación, ambas partes deben ceder, pero es nuestro deber reclamar lo que nos corresponde.

COCOPA, SENTAR LAS BASES PARA MODIFICAR LEYES Y REGLAMENTOS

Margarita Gutiérrez*

Señores diputados, señores senadores; pueblos indígenas, hermanos indígenas, hermanas que están aquí presentes; buenos días tengan. Y bueno, con el interés de participar y estar presente, y ser consecuentes con lo que nos plantea la historia de ahora, estamos aquí presentes. Organizadores de este foro, ya mañana les tocará a las nuevas generaciones continuar con el compromiso, con nuestra historia y destino.

Hoy tenemos leyes y las respetamos o las pisoteamos; tenemos instituciones y las respetamos o nos acomodamos, según convenga el momento.

El Presidente retomó la iniciativa de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) y la presentó al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores. Esta iniciativa que

* ANIPA

contempla las aspiraciones, y a base de presión política de los pueblos indígenas convenimos, en su momento.

Las aportaciones que logramos en los acuerdos de San Andrés, en el diálogo, para enriquecer y llegar a tener esta iniciativa, es lo más importante para nosotros, pero no sólo tenemos un gran reto, mantener la unidad del movimiento indígena y lograr cada vez más la unión de los pueblos indios de México, es así como también lograremos mantener la fuerza política que haga cumplir esta iniciativa, esta palabra dada en San Andrés Larráinzar.

Aprobar la iniciativa de ley de derecho y cultura indígena, significa sentar las bases para modificar leyes y reglamentos, leyes orgánicas de la Administración Pública, Federal, estatal y municipal, entre otras.

Hay algunos que les asusta oír, hablar de la libre determinación, y yo me quiero referir a algunos argumentos jurídicos sobre esta palabra.

En la iniciativa que manda el presidente Fox, que es la iniciativa de la COCOPA, está... dice: "Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y como expresión a la autonomía, como parte del Estado mexicano", y se dan ciertas funciones que se señala.

Y hay un avance en el artículo 4º constitucional, y yo creo que es una cosa muy importante, el reconocimiento de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Pueblos. Por eso es que, entonces, apelamos a este derecho a la libre determinación; es el eje rector de las demandas del movimiento indígena. La autodeterminación o libre determinación, que es lo mismo, solamente es una tra... ayer, creo que se hablaba de este concepto, pero es lo mismo, solamente implica una traducción del inglés al español, pero autodeterminación y libre determinación es lo mismo, están sólidamente establecidas en el derecho internacional.

El estándar mínimo que existe en derecho internacional y el cual nos basamos para reclamar el derecho a la libre determinación, es el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Sin duda alguna, el derecho a la libre determinación está sólidamente establecida en el derecho internacional y lleva una evolución, tan es así, que fue incluida en los pactos internacionales sobre derechos humanos y en la declaración y programa de acción, de Viena, derivados de la conferencia de derechos humanos, realizados en 1993, que subrayan que la autodeterminación es una parte integral de la legislación de los derechos humanos, que tienen una aplicación universal.

Así mismo, se reconoce que de conformidad con el derecho a la autodeterminación es una condición fundamental, para el disfrute de otros derechos humanos y libertades fundamentales, sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Ejercer nuestra libre determinación al interior del Estado mexicano, implica una democracia participativa, es el derecho que tenemos a decidir la forma de gobierno y la identidad de los gobernantes que queremos.

Es el derecho que tenemos a participar en la toma de decisiones, en todos los niveles y ámbitos de gobierno. Implica ejercer la autonomía política, cultural, lingüística, religiosa y territorial.

El ejercicio a la libre determinación es la contribución a la prevención y resolución de conflictos, estos conceptos concuerdan con la comprensión y situación que guarda este término en el contexto global del derecho internacional, cuyo principal fin es mantener la paz, las relaciones amistosas y de cooperación, y mantener la seguridad.

En esencia, la autodeterminación significa que los seres humanos de forma individual o colectiva, como están planteando los pueblos indígenas, debemos de tener el control de nuestro propio destino, y que de acuerdo a esto deberían de concebirse las instituciones de gobierno.

Por eso es que volvemos a enfatizar, que el reconocimiento de la libre determinación expresada en la autonomía, nos da la posibilidad a los pueblos indígenas o a los pueblos indios, de manejar nuestros destinos, nuestros programas, nuestros proyectos, también nuestro territorio; defender nuestras costumbres y órganos de gobierno.

Autonomía y territorio llevará a modificar los esquemas de planeación y desarrollo también. Influirá para que las instituciones definan, junto con nosotros, pero de acuerdo a nuestros planes propios.

En la experiencia que tenemos y en los esfuerzos que día a día vamos haciendo los pueblos indígenas, a lo largo de nuestra historia de México, para avanzar en la autodeterminación, no sólo es el de mantener nuestra estructura tradicional de gobierno, en nuestros usos y costumbres, tradiciones y leyes internas, sino también en una redefinición, en una orientación de las políticas públicas y del mismo desarrollo nacional, esa es la contribución de los pueblos indígenas.

Nos hemos enfrentado al marco jurídico y a un modelo económico que niega la pluralidad, la realidad pluricultural, y esto dificulta el acceso a los servicios de los municipios, el Estado y la federación y, aún también para la inversión directa con los pueblos indígenas del sector privado y organismos internacionales.

Los efectos los podemos observar en acelerar influencia en nuestros... en la degradación de nuestros elementos culturales. No podemos negar que muchas lenguas están desapareciendo, y si desaparecen las lenguas, desaparece una cultura, y desaparece una parte de la riqueza nacional.

Tampoco podemos negar que hoy las políticas y las instituciones nos niegan el derecho a hacer y a decidir. Ahí está, por ejemplo, la Ley de Aguas, que necesitamos que recurra a ella, para tener formalmente y legalmente los ojos de agua, que ahí están en los territorios.

Que las reformas al 27, igual como se mencionó, o sea, nos niegan hacer, y nos despojan legalmente de nuestro territorio y aún de la tierra, la poca tierra que tenemos para trabajarla y sobrevivir.

Las diversas estrategias, también indigenistas, practicadas a lo largo de las últimas décadas, son una expresión del enfoque integrador y dominante de una sociedad apropiadora, a partir de una diferenciación en los conceptos y términos de ley y puntos de vista sobre nosotros, para construir sus relaciones sociales.

Y aquí viene una propuesta. Yo creo que es importante estar en este diálogo, en este foro. El diálogo ya se dio también en San Andrés Larráinzar, entonces, van a venir los compañeros zapatistas, una parte muy importante del movimiento indígena, pero es importante también tomar en cuenta en esta discusión que se haga, de otros actores del movimiento, para que coadyuven a aclarar estas cosas y estas dudas que los legisladores y la sociedad nacional, en general, tienen, sobre nuestras propuestas, esa es una propuesta que nosotros estamos haciendo y un llamado también.

Que se sienten los hermanos zapatistas con otros indígenas, que ya estuvieron también en el diálogo, y las autoridades propias, las autoridades tradicionales que, bueno, sería mejor que se llamaran propias, y es importante esta intermediación, para arreglar este problema que existe en México.

Estamos en una situación, en un conflicto, y hay que reconocerlo, para avanzar en esta discusión, en el diálogo, y realmente se pueda, además retomar el paso siguiente, como decían, la reglamentación, las leyes secundarias, etc., pero no sólo.

Nos ven ahora como un problema solamente de desarrollo, y desarrollo concebido desde las instituciones, por eso es urgente también replantearnos un plan estratégico de desarrollo autosostenible por los propios pueblos, que puedan contribuir también a las demás realidades de la sociedad nacional.

Este enfoque del plan tendrá expectativas para ser asumidas por el gobierno federal, en primera instancia, en la definición por medio de su política de atención, que respalde la integridad de los pueblos indígenas, porque hoy el desarrollo es solamente darnos pollitos, es solamente... en el caso concreto de las mujeres, por ejemplo, el programa de desarrollo es dar pollitos, dar borreguitos, es proyectos productivos, pero no es un proyecto de desarrollo de los pueblos.

El desarrollo para nosotros implica reconstituir o fortalecer nuestros idiomas, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, y ahí es muy importante hacer énfasis sobre la propuesta de las mujeres indígenas.

Nosotros queremos retomar de nuestra filosofía los conceptos muy importantes para nosotros, que sería la dualidad, la complementariedad, la paridad y el equilibrio. Es que también nos han permeado todas estas ideas de la modernidad, la globalización y no es que sea malo, pero tenemos que discernir, para tomar lo que nos ayuda a avanzar y desechar la que nos hacen mal, la que no nos permiten avanzar.

Nosotros queremos ser actores sujetos, también sujetas, en estas propuestas, y desde los diálogos en San Andrés, las mujeres indígenas estamos dando seguimiento, paso a paso, de estos acuerdos emanados.

Estarán las leyes, pero también necesitamos un cambio, (repite) un cambio, una nueva mentalidad, unas nuevas reglas de tolerancia y de respeto, porque tampoco el tolerar y no aceptar, no es lo mismo. Necesitamos tolerarnos y aceptarnos.

Necesitamos una revisión a fondo de todas, las mismas instituciones, creadas hasta hoy, solamente para mediatizar, pero necesitamos sentarnos a dialogar y ponernos de acuerdo y ver si estamos hablando de lo mismo.

Por eso damos un respaldo a lo que es la iniciativa de COCOPA, como un primer paso. Ya se hablaba aquí, de que no es toda la aspiración de los pueblos indígenas, porque las realidades son muy diferentes.

Y yo diría, para terminar, que la causa que subyace a la negación del ejercicio a la libre determinación, expresada en la autonomía de los pueblos indígenas, es el racismo, eso en México, hay racismo.

Y por eso, desde niños nos despojaron o trataron de hacerlo, de quitarnos nuestro idioma, nuestra ropa, nuestro territorio, y es una constante violación y es un constante conflicto.

Tendríamos que resolver estos asuntos, para ver de qué manera todos los actores involucrados, ya que hablamos mucho y nos espanta, además, y queremos, las autoridades quieren, siempre, hablar del Estado de derecho, pues hoy aquí presentamos la argumentación jurídica, hay argumentación filosófica, argumentación histórica, si no abren los oídos y el corazón a esta realidad, no va a haber una resolución de este conflicto permanente con los pueblos indígenas, que es una parte importante de la sociedad nacional.

Yo creo que en el diálogo que va a venir para la aprobación de la iniciativa de ley, debemos estar presentes los demás indígenas de este país.